

Giuliana Di Febo y Santos Juliá

El FRANQUISMO

Una introducción

ESPAÑA

UNA!

GRANDE!

LIBRE!



se

Giuliana Di Febo y Santos Juliá

El FRANQUISMO

Una introducción





¿Qué supuso el liderazgo de Francisco Franco durante la Guerra Civil española? ¿Cómo se manifestó su condición de «caudillo» al término de ésta? ¿En qué se diferenció el régimen franquista de los demás fascismos europeos de la época?

A través de un análisis claro y sintético de los procesos ideológicos, culturales y políticos que confluyeron en aquel período, este libro recorre y explica todas las fases de la dictadura que gobernó España entre 1936 y 1975, a partir de la sublevación militar y hasta la crisis y el inicio de la transición democrática. Además, reconstruye las etapas de la institucionalización y la política económica, el contexto internacional y las estrategias de las movilizaciones antifranquistas.



Giuliana Di Febo & Santos Juliá

El franquismo

Una introducción

ePub r1.0

Titivillus 20.07.17

Título original: *Il franchismo*
Giuliana Di Febo & Santos Juliá, 2003

Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2



Introducción

EN 1936, en plena Guerra Civil, se instauraba la dictadura de Francisco Franco en los territorios ocupados por los militares protagonistas del golpe de Estado contra la República. El contexto en que nacía, la compleja constelación de fuerzas involucradas, su larga duración y su capacidad de adaptación a los cambios internacionales son los principales factores que hacen difícil una caracterización exhaustiva y definitiva del régimen que gobernó España durante casi cuarenta años. A lo largo del debate historiográfico han surgido múltiples denominaciones —cesarismo, autoritarismo, fascismo, totalitarismo, caudillismo, dictadura militar— con el propósito de precisar sus aspectos dominantes y la influencia más o menos acentuada de otras dictaduras, en particular de la italiana.

Sin duda, la peculiaridad fundamental del franquismo radica en el hecho de haberse estructurado durante la Guerra Civil, que se produjo por el intento de algunos generales de derribar al gobierno republicano que había ganado las elecciones de 1936. Este *incipit* marcó durante mucho tiempo las instituciones, las orientaciones políticas y la propia concepción y gestión del poder. Tampoco debe olvidarse que la ayuda alemana y, sobre todo, italiana fueron determinantes para la victoria de los «nacionales», y favorecieron la imitación del modelo fascista y totalitario. Por otra parte, la misma Falange, la organización política fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, en un momento de fuerte consolidación del régimen de Mussolini, se había configurado ya en los años de la Segunda República como canal de propaganda de la ideología fascista, incluyendo la atracción por el uso de la violencia en la política. Esta opción, que formaba parte del programa falangista presentado en Madrid por José Antonio, se resumía en la conocida frase «la dialéctica de los puños y de las pistolas». Su admiración por Mussolini le había llevado a prologar en 1934 la obra *El*

fascismo, versión española del libro que recogía los escritos del *Duce* sobre la doctrina fascista. Ya durante la Guerra Civil, a través de la política de «hermandad» con Italia, y posteriormente en los primeros años de la dictadura, la Falange fue el canal de importación de formas institucionales, símbolos y estilos *fascistizantes*, aunque manteniendo el componente católico.

Sin embargo, la incidencia de instituciones, ideología y símbolos asimilables al fascismo italiano debe valorarse sobre la base de la eficacia, la importancia y la duración que tuvieron en el sistema dictatorial español. También hay que considerar hasta qué punto las caracterizaciones propuestas reflejan las tendencias más o menos predominantes en las diversas fases y, en todo caso, influidas por las legitimaciones y funciones ejercidas por los tres pilares fundamentales del poder —Ejército, Falange, Iglesia—, en un complejo entramado de reorientaciones y equilibrios internos vinculados a los diversos acontecimientos internacionales. Desde luego, entre los hechos externos que tuvieron importantes repercusiones en la estructura, la reorganización, la estabilidad y, a partir de los años sesenta, en la creciente deslegitimación de la dictadura, cabe destacar la Segunda Guerra Mundial y la derrota del Eje, la Guerra Fría y el Concilio Vaticano II. Lo que permaneció inalterado, y justifica la utilización del término «franquismo» para calificar el régimen, fue el inoxidable poder personal de Franco, hecho posible por la interacción de todos estos sujetos, contextos y situaciones, y por una represión capilar y constante. Por lo tanto, la periodización aquí propuesta no pretende ser una elección de orden meramente cronológico, sino que está relacionada con las tendencias que incidieron en la configuración del «Nuevo Estado», en sus numerosos reajustes y, en los últimos años, en la profunda crisis que minó sus fundamentos.

Este perfil de historia del franquismo intenta reconstruir las etapas de la hegemonía ejercida por sectores, grupos e instituciones a partir del período conocido como «la larga posguerra», seguido por los años de la Guerra Fría y por la superación gradual del aislamiento internacional de España. Con la expresión «larga posguerra» nos referimos también a la elección hecha por el régimen —apoyado por la mayoría de la jerarquía eclesiástica— de

mantener la fractura producida por el conflicto. La política de guerra, materializada en una intensa represión, tenía una poderosa arma de movilización en la continua representación y evocación de la victoria. Fue también un instrumento de disuasión contra toda pretensión de reavivar el recuerdo del estado democrático y laico que cuestionase la estructura antiliberal del «nuevo orden»: una elección coherente por parte de un régimen nacido de un golpe de Estado antirrepublicano.

Se propone aquí, pues, un recorrido a través de las diversas fases y modalidades del crecimiento económico, iniciado a finales de los años cincuenta y consolidado a lo largo de la década siguiente, que dio lugar a unas transformaciones e impulsos modernizadores en la sociedad, que estaban en contradicción con el inmovilismo de las principales instituciones dictatoriales. Son estos los años en los que se afirma una extendida movilización antifranquista, caracterizada por múltiples estrategias y también por la búsqueda de un frente común, coincidiendo con la reaparición de los partidos y sindicatos tradicionales y el nacimiento de nuevas formas de organización. Por último, se examinan las tensiones, la crisis del régimen y las conquistas *de facto* que al inicio de los años setenta abrieron el camino a la transición democrática.

El apéndice documental que cierra el libro pretende ofrecer al lector informaciones adicionales para la interpretación de los acontecimientos, de las leyes, de los discursos y de los programas del régimen. Tiene igualmente el objetivo de sacar a la luz algunos aspectos menos conocidos o cuya contundencia puede haber pasado desapercibida por la necesidad de la síntesis o la brevedad de las citas. Es el caso del documento sobre la absurda sanción impuesta a la familia de Manuel Azaña, que ilustra eficazmente los criterios jurídicos en que se basó la Ley de Responsabilidades Políticas. A su vez el manifiesto de los estudiantes universitarios madrileños de 1956 explicita un cambio de actitud hacia la cultura de guerra dominante, al mismo tiempo que la respuesta del régimen desmiente las hipótesis que sostienen el comienzo de tendencias «liberalizadoras» a partir de la segunda mitad de los años cincuenta.

Nos complace incluir la canción *Diguem no*, de Raimon, símbolo de toda una generación y demostración de las posibilidades de convertir la

metáfora en acto de resistencia civil.

EL «NUEVO ESTADO» (1936-1945)

1.1. FRANCO, CAUDILLO PROVIDENCIAL

A FINALES DE SEPTIEMBRE DE 1936 una junta militar, denominada Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Miguel Cabanellas, proclamaba a Francisco Franco Bahamonde «Generalísimo» de todas las Fuerzas Armadas y jefe del gobierno del Estado español, otorgándole «todos los poderes del Nuevo Estado». La decisión había sido determinada por las circunstancias de la guerra, que imponían un mando único. El nombramiento perdió enseguida su carácter provisional para convertirse en dictadura vitalicia. El 1 de octubre Franco comenzó a firmar decretos como jefe del Estado. Nacía de hecho el régimen franquista, contrapuesto al gobierno legal republicano.

Franco había llegado a la Guerra Civil acompañado de una fama de experimentado estratega militar y combatiente heroico ganada en Marruecos. General de brigada con solo treinta y tres años, se había distinguido por su intransigencia en la aplicación de la disciplina militar y por su dureza en la represión, que ya demostrara en 1934 con motivo de la insurrección de Asturias y que confirmaría en el transcurso de la Guerra Civil. Su investidura como jefe del Estado fue celebrada el 1 de octubre de 1936 en Burgos, una de las primeras ciudades conquistadas y sede de la Junta, según un protocolo arcaico y solemne que inauguraba la larga serie de rituales marcados por mensajes simbólico-ideológicos que caracterizarán al régimen. Una muchedumbre entusiasta, con el brazo en alto, aclamó al «Generalísimo», quien había festejado pocos días antes la conquista de

Toledo y la liberación del alcázar asediado por los milicianos. La victoria se convertiría de inmediato en una epopeya mítica.

Al día siguiente, a pesar de que algún incauto periódico utilizara el término *dictador*, rápidamente censurado, se imponía la denominación de Caudillo, correspondiente al italiano *Duce* y al alemán *Führer*. Una atenta campaña propagandística dirigida al culto a la personalidad empezaba a dibujar el perfil de un carisma que también recurría a las comparaciones con legendarios héroes del pasado, el Cid de manera especial. La efigie de Franco montado en un caballo blanco hizo su primera aparición en las tarjetas postales de la zona nacional (Martí Morales, 2000, pág. 133) y con el añadido de la escolta mora constituyó durante años la iconografía dominante. No menos conocida fue la imagen creada por el pintor Arturo Reque Meruvia, quien le representó con vestimenta de cruzado medieval en un lienzo de imponentes dimensiones.

«Mando y capitanía» aparecían juntos en los documentos oficiales y en los discursos, indicando un ejercicio del poder caracterizado por la dimensión militar y sintetizado en la fórmula del «caudillaje». La adhesión de la Iglesia al «Alzamiento Nacional» tuvo como consecuencia la exaltación en clave religiosa y salvífica de la figura del Caudillo, al cual la divina providencia habría encomendado la misión de rescatar a España. No muy experto en cuestiones políticas, respecto a las cuales «non nasconde il suo impaccio» —como anotó el mismo Galeazzo Ciano al regreso de su viaje a España realizado en julio de 1939 (Di Febo, 2005, pág. 266)—, Franco era, en cambio, muy hábil a la hora de utilizar las divisiones y los contrastes existentes entre los diversos sectores y grupos para reforzar su supremacía. Los críticos y los disidentes acababan marginados o alejados, incluso mediante el exilio; los aliados y consejeros podían verse apartados por razones de oportunidad y reajuste de los equilibrios políticos. La Guerra Civil, por lo tanto, no fue solo escenario de vicisitudes y eventos militares, sino también de estrategias de construcción de las primeras estructuras dictatoriales, del poder y del carisma del jefe. Las consignas que comenzaban a aparecer en las portadas de los diarios —«Una Patria, un Estado, un Caudillo» y «Por el Caudillo y por Dios»— aludían a la identificación entre la configuración del «caudillaje» y la definición del

Nuevo Estado. *Caudillo*, *caudillaje*, *acaudillar* evocaban, de forma sintética, la idea de excelencia y unicidad del mando, a la cual se añadiría rápidamente la dimensión mesiánico-providencial.

Asistido por una Junta Técnica de Estado, que se ocupaba de administrar las zonas conquistadas a través de comisiones concebidas como organismos paraministeriales, Franco comenzaba a sentar los cimientos del Nuevo Estado a través de decretos. El fracaso de la ofensiva sobre Madrid, en noviembre de 1936, prolongaba los tiempos y las dificultades de la guerra. Se hacía improrrogable pasar de un Estado «campamental» e improvisado a una organización estatal y administrativa dotada de órganos de gobierno y de una ideología que definiera los objetivos y las finalidades del Alzamiento. El principal artífice de la operación fue el brillante abogado Ramón Serrano Suñer, diputado de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) durante la República, cuñado de Franco, amigo en su juventud de José Antonio Primo de Rivera y admirador de Mussolini. Serrano llegó a Salamanca, sede del cuartel general alojado en el palacio episcopal, en febrero de 1937, huyendo de la zona republicana en la que había perdido a dos hermanos, fusilados en la cárcel Modelo de Madrid.

1.2. CONFIGURACIÓN DEL NUEVO ESTADO

El acto que marcó el comienzo del nuevo ordenamiento fue la creación y formalización del partido único. La unificación se llevó a cabo en una etapa de la Guerra Civil crucial desde el punto de vista militar. En la primavera de 1937, las fuerzas nacionales estaban concentradas en la campaña del norte con el objetivo de conquistar las zonas republicanas (Vizcaya, Santander, Asturias) mientras que a la victoria de los italianos en Málaga había seguido su derrota en Guadalajara. En este marco, el bando nacional debía unificar las distintas ramas de los combatientes y reforzar políticamente el mando del «Generalísimo».

El decreto, aconsejado por el «cuñadísimo», fue anunciado por Franco el 18 de abril en Salamanca por Radio Nacional en un discurso muy esclarecedor de las finalidades asignadas a la nueva formación. En realidad,

se trata de una arenga imbuida de la retórica mítico-doctrinaria de la «Cruzada», dirigida a los españoles y a los combatientes. La unificación se presenta como continuación de las etapas patriótico-religiosas de la España imperial y antiliberal, se insiste sobre su necesidad para acelerar la victoria y se exaltan todas las fuerzas involucradas realzando el papel del Ejército. Se afirma el carácter de «Movimiento» de la nueva formación y por lo tanto «en proceso de elaboración y sujeto a constante revisión y mejora». Combinando el discurso tradicionalista con las consignas de Falange dibuja el perfil del Nuevo Estado que se caracterizaría por una «democracia efectiva» en oposición a la «verbalista y formal» del Estado liberal con sus «ficciones»: los partidos, las leyes electorales y las votaciones (Doc. 1^[*]).

El 19 de abril de 1937, Franco promulgó el decreto de unificación de los partidos, por el cual se establecía la fusión en una «sola entidad política nacional» de las dos organizaciones que, a pesar de las diferencias y las divisiones entre ellas, habían proporcionado una considerable ayuda militar a la guerra: Falange Española, de orientación fascista, y Comunión Tradicionalista, concentrada en Navarra, monárquico-carlista e inspirada en el catolicismo integrista. Todas las organizaciones y partidos políticos existentes fueron suprimidos y la nueva formación sometida al mando del Caudillo. La entidad fue bautizada con el largo nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), aunque se denominaría corrientemente Falange o Movimiento. La unificación comportó una homologación exterior de todos sus adeptos, que adoptaron la camisa azul de Falange y la boina roja carlista. El programa se inspiró en los 26 puntos fijados en su tiempo por José Antonio Primo de Rivera —Estado totalitario y nacional-sindicalista articulado a través de la familia, el municipio y el sindicato, disciplina y «orden nuevo»— aunque se suprimió el punto 27, probablemente porque sugería el «predominio» político de Falange Española. El sello falangista es evidente en la asunción de algunos símbolos y liturgias, en particular el saludo romano impuesto por ley y llamado «saludo nacional» (Doc. 2^[*]), el himno «Cara al sol» y el emblema del yugo y las flechas de los Reyes Católicos. Nacía una organización asimilable, bajo ciertos aspectos, al partido único de «otros países de régimen totalitario», pero con una

diferencia fundamental: había sido creada desde arriba por un jefe militar, ya instalado en el gobierno del Estado, quien la utilizaría como instrumento para consolidar su poder. La Falange no consiguió imponer su hegemonía en las relaciones entre Estado y sociedad, pero mantuvo durante muchos años un papel determinante en diversos sectores e instituciones del régimen.

La Falange, que de fuerza marginal en los años de la República había llegado a ser durante la guerra el más importante centro de agregación y militarización, se consideró como el instrumento idóneo para contribuir a la organización del régimen dictatorial. Sin embargo, más tarde sufriría las consecuencias de la heterogeneidad ideológica que había acompañado su transformación en partido único. En efecto, en la recién nacida «entidad» confluyeron católicos de la CEDA y sectores del Ejército que, más que a un Estado totalitario moderno aspiraban a la restauración de la España católica, autoritaria, corporativa y de la monarquía de Alfonso XIII, mientras que los carlistas tradicionalistas mantenían sus reivindicaciones de sucesión dinástica en la persona del príncipe Francisco Javier de Borbón Parma, y su nostalgia por un Estado preliberal. Además, se perfilaba el peso creciente de la Iglesia muy atenta en parar posibles desviaciones totalitarias; los mismos teóricos del Nuevo Estado asociaban el atributo de «católico» a los términos totalitario, fascista y nacionalsindicalista, para destacar una peculiaridad española.

Esta interrelación político-religiosa, que caracterizó al régimen durante al menos veinte años, se formalizó en los Estatutos de FET y de las JONS promulgados en agosto de 1937. En ellos se enfatizaba la misión regeneradora del Movimiento, cuyo fin era «devolver a España el sentido profundo de una indestructible unidad de destino y la fe resuelta en su misión católica e imperial». Se preveían dos órganos: el Consejo Nacional y la Junta Política. El Consejo (todos los miembros del primer Consejo fueron nombrados por Franco, según se establecía en su artículo 36) se reuniría cada año el 17 de julio y «cuantas veces sea convocado por el Caudillo». El decreto establecía, además, que en la primera reunión el jefe y los miembros del Consejo prestarían el juramento de la FET y de las JONS «por España, ante Cristo y los Santos Evangelios» (Doc. 3^[*]). La ceremonia de la jura, enmarcada en una escenografía patriótico-religiosa que

anunciaba la configuración nacionalcatólica del régimen, se celebró en Burgos, en el monasterio de Santa María Real de las Huelgas, el 2 de diciembre de 1937.

El Consejo Nacional, concebido como órgano supremo del partido único, y la Junta Política o Secretariado, que tenía básicamente tareas de «asesoramiento a la Jefatura», cumplirían en realidad la función de ratificar las decisiones del jefe del Estado. Los Estatutos fueron también la ocasión para proclamar a Franco «Jefe Nacional» de FET y de las JONS y «Supremo Caudillo del Movimiento» con la atribución de «la más absoluta autoridad», subrayándose con estilo lapidario: «El Jefe responde ante Dios y ante la Historia».

Se va configurando en estos años el intento, apoyado por Serrano Suñer y otros dirigentes falangistas, de orientar la construcción del Nuevo Estado según el modelo de los Estados totalitarios nazi y fascista, pero con una especial influencia del régimen italiano. La Segunda Guerra Mundial, iniciada pocos meses después de finalizar la Guerra Civil, las victorias del ejército alemán y la entrada en guerra de Italia, imprimieron una aceleración en este sentido. Sin embargo, el proceso de fascistización del régimen, visible en la adopción e imitación de instituciones y símbolos italianos, debía responder a exigencias de equilibrio respecto al Ejército y la Iglesia, y al mismo tiempo de consolidación del caudillaje.

Si el Ejército tenía un fuerte poder de decisión, en su calidad de guardián y árbitro de las decisiones políticas y militares del régimen, la Iglesia, por su parte, había conseguido imponerse como elemento de cohesión entre los distintos sectores, gracias a la asimilación de la guerra con una cruzada. La adhesión de la jerarquía eclesiástica al golpe de Estado militar —anunciada en septiembre de 1936 en la carta pastoral *Las dos ciudades* del obispo Enrique Pla y Deniel y reiterada oficialmente a través de la *Carta colectiva del episcopado español* de julio de 1937, redactada por el cardenal primado Isidro Gomá— había introducido un cambio de sentido en la rebelión de los militares, presentada en un primer momento como un clásico *pronunciamiento* decimonónico dirigido a restablecer el orden vulnerado.

Menos de dos meses después de la sublevación, las primeras declaraciones de los generales contra la anarquía y el caos, atribuidos al gobierno republicano y a la influencia de «agentes bolcheviques», dejaban paso a la definición del conflicto como Cruzada y, por lo tanto, como guerra de religión y choque entre dos civilizaciones: «España y la anti-España». Se indicaba como principal motivación el asesinato de religiosos y la destrucción de iglesias y objetos sagrados, perpetrados durante los primeros meses de la guerra. De hecho, la insurrección de los militares y la consiguiente ruptura de la legalidad republicana habían producido un violento y difuso anticlericalismo, que se escapó del control del gobierno y provocó, según la reconstrucción del obispo Antonio Montero, el asesinato de unos 7000 religiosos (Montero, 1961). Pesaban sobre la Iglesia española la memoria pasada y reciente del apoyo dado a los regímenes conservadores en perjuicio de las capas menos favorecidas y su oposición a la modernidad. La resistencia de la jerarquía eclesiástica ante los procesos de laicización emprendidos por la República y, al mismo tiempo, el radicalismo o la inoportunidad de algunas medidas legislativas, así como el resurgir de actitudes anticlericales, habían dado lugar a profundas divisiones que la guerra hacía irreparables. En estas circunstancias se fue forjando una idea de identidad nacional basada en la pertenencia al catolicismo, según el proyecto político-religioso en su tiempo adoptado por los Reyes Católicos y fundado en la exclusión de las otras religiones. La Cruzada, además, ponía en marcha la recuperación de formas arcaicas de religiosidad y un modelo de interacción entre lo sacro y lo político filtrado a través de una ritualidad en la que a menudo se fundían aspectos devocionales y mensajes de legitimación del régimen. El nacionalcatolicismo, tal como se le denominará posteriormente, se configuró durante la Guerra Civil como «teología de reconquista» caracterizada, entre otras cosas, por una «militante antimodernidad» según Alfonso Álvarez Bolado (1976, pág. 195). En los primeros veinte años de dictadura tuvo la función de remodelar las costumbres, la educación y el mismo universo mítico y simbólico.

En las ciudades y pueblos que el ejército franquista iba ocupando, las procesiones y misas de campaña, los actos de reparación por las iglesias y reliquias profanadas y las entronizaciones del Sagrado Corazón se

superponían al cruento escenario de guerra. En el centro de las celebraciones, la constante presencia de Ejército, Falange y jerarquía eclesiástica se convertía en autorrepresentación de la unidad de los poderes político, militar y religioso. La adhesión y la integración de las masas —y en esto el régimen se diferenciaba del fascismo y del nazismo— se realizaban mediante la identificación individual y colectiva con una idea de nación-patria que asumía como elemento unificador el catolicismo tradicional, en cuanto rasgo constitutivo de la historia y del pasado imperial. Los acontecimientos míticos que se evocaban eran la Reconquista y los Reyes Católicos, la Conquista, la Contrarreforma, Lepanto, los reinados de Carlos V y de Felipe II.

Acompañaba a esta representación la exaltación de Franco como jefe invencible y asistido por la protección divina; todo ello, sostenido por el retorno a prácticas devocionales medievales y barrocas o propias del integrista católico carlista. La mano-reliquia de Teresa de Ávila —santa acreditada y popular, convertida durante la guerra en «Santa de la Raza»— cuya custodia la Iglesia encomendó al Caudillo después de su «providencial hallazgo» en la maleta de un coronel republicano en 1937, contribuiría a reforzar en el imaginario colectivo la dimensión sobrenatural del carisma del «Generalísimo». Al finalizar la guerra, a través del uso soberano y omnipotente de los decretos, y resucitando una tradición que se remontaba a la primera guerra carlista, el Caudillo otorgaba «los máximos honores militares» a la Virgen de los Reyes y a la Virgen de Covadonga (Di Febo, 2012, págs. 41-42).

En este complejo escenario, el 31 de enero de 1938 se constituía en Burgos el primer gobierno del régimen de Franco con arreglo a la ley aprobada el día antes sobre organización de la Administración Central. La Ley establecía que: «Al Jefe del Estado... corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general». Franco se autoasignaba también el poder constituyente, que mantendría durante todo el período de la dictadura. La elección de las personas llamadas a ocupar los cargos ministeriales se orientó a garantizar un protagonismo equilibrado a la coalición que había apoyado el golpe de Estado y a privilegiar a hombres de confianza de Franco. Así, la distribución de los ministerios reflejaba la

primacía de los militares (Exteriores, Defensa, Orden Público e Industria y Comercio). Al secretario general de Falange Española, Raimundo Fernández Cuesta, se asignó el Ministerio de Agricultura y a otro falangista, Pedro González Bueno el de Organización y Acción Sindical. La cartera de Educación Nacional fue para Pedro Sainz Rodríguez, exponente de la derecha católica, monárquico y fuertemente antiliberal; mientras que el Ministerio de Justicia fue ocupado por los carlistas. Las provincias serían, en realidad, administradas por una poderosa burocracia estatal, dirigida principalmente por Falange. Serrano Suñer, nombrado ministro de Gobernación, también se hacía cargo del Servicio de Publicaciones y Propaganda, cuya gestión confió a jóvenes intelectuales falangistas.

La creciente influencia del fascismo italiano se veía confirmada por la aprobación, por decreto firmado por Franco el 9 de marzo de 1938, del Fuero del Trabajo, inspirado en la *Carta del Lavoro* de Mussolini y que será considerado como una de las Leyes Fundamentales del régimen. El Fuero (en un primer momento denominado *Carta del Trabajo*) tuvo un itinerario atormentado precisamente por promulgarse en un momento en el que el régimen, aun abierto a sugerencias totalitarias, iba acentuando su carácter confesional. A este respecto fue fundamental la intervención de Gomá — desde 1937 encargado oficioso provisional de la Santa Sede en Burgos— en la modificación del texto. Al cardenal primado le preocupaba, entre otras cosas, la reacción que pudiera tener el Vaticano —que todavía no había reconocido *de iure* al gobierno de Franco— en relación a la posible orientación totalitaria del Nuevo Estado (Di Febo, 2008). Todo ello comportó unos reajustes que valoraban la dimensión católica, opción patente en el mismo preámbulo:

Renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado, Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar —con aire militar, constructivo y gravemente religioso— la Revolución que España tiene pendiente...

Prohibida la huelga, considerada delito «de lesa patria», se instauraba el sindicato vertical y único, definido como «instrumento al servicio del Estado» y dirigido por Falange; el derecho al trabajo se consideraba como

«consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios». Entre las disposiciones figuraba la marginación femenina del trabajo, mediante la fórmula «[el Estado] libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica». Paralelamente, se procedía al desmantelamiento del Estado laico y de las principales reformas republicanas. Entre 1936 y 1939 fueron abolidos los Estatutos autónomos de Cataluña y del País Vasco, gran parte de la reforma agraria, la libertad de prensa y de asociación; quedó prohibido el culto público de otras religiones, fue derogada la Ley de Divorcio y declarado nulo el matrimonio civil. La enseñanza perseguía una formación «eminentemente católica y patriótica» y «los ideales del Nuevo Estado».

La caída de Cataluña, en febrero de 1939, anunciaba el epílogo de la guerra. Con la entrada del ejército franquista en Madrid, el 28 de marzo de 1939, concluía una Guerra Civil que duró casi tres años. El último parte del 1 de abril anunciaba: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado».

1.3. LITURGIAS, CENSURA, PROPAGANDA

«El Madrid rojo ha sucumbido. La victoria militar lo ha incorporado a la Patria. Llegue la noticia a todos los ámbitos de la tierra». En marzo de 1939, Serrano Suñer dirigía «al mundo» su *Anuncio de la Victoria Española*, configurando ya el carácter revanchista de las futuras «fiestas de la Victoria».

Dos meses después, el 19 de mayo de 1939, por las calles del Madrid «reconquistado» tenía lugar un inacabable, patriótico y «viril» desfile militar: representación de triunfo y poder, y advertencia al mundo exterior y a los vencidos. Franco asistía al desfile, rodeado por las autoridades, desde lo alto de la tribuna levantada en el Paseo de la Castellana. Al comienzo de la ceremonia el general Varela impuso «al invencible Caudillo» la máxima condecoración, la Gran Cruz Laureada de San Fernando. En el cielo una escuadrilla de aviones escribió VIVA FRANCO. A la *damnatio memoriae* de la República, además de la incesante propaganda destinada a deslegitimar el

ordenamiento, la cultura y las instituciones republicanas, contribuiría la exaltación de los lugares de las más importantes victorias del ejército franquista, transformados en santuarios patrióticos. Ceremonias religiosas, desfiles militares, conmemoraciones de los caídos se desarrollaban en los aniversarios declarados fiesta nacional: el 18 de julio, «Día del Alzamiento Nacional»; el 1 de octubre —fecha de la investidura de Franco como jefe del Estado— se denominó desde entonces el «Día del Caudillo»; el 12 de octubre, «Día de la Raza» o «de la Hispanidad». Durante años se celebró un ritual de la memoria dirigido a exaltar una identidad fundada también en la permanente afirmación de la división producida por la Guerra Civil. Las ruinas del alcázar de Toledo y de Belchite cerca de Zaragoza, el santuario de Santa María de la Cabeza en la Sierra Morena, los muros de muchas iglesias con la leyenda «Caídos por Dios y por España. ¡Presentes!», perdurarán como testimonio de una ruptura irremediable e inalterada a lo largo del tiempo. En cada aniversario del Alzamiento se leía en las plazas, según establecía una Orden de Serrano Suñer, el último parte de guerra.

El día siguiente al desfile militar, tenía lugar en la iglesia de Santa Bárbara, en Madrid, la ofrenda de la espada de la victoria al Santo Cristo de Lepanto por parte de Franco. El rito, que aludía a una renovada alianza entre trono y altar, evocada también por el uso de la liturgia medieval y por un ceremonial con connotaciones regias, escenificaba, de hecho, la cancelación del Estado laico y la redefinición en sentido confesional del Nuevo Estado. La iglesia estaba engalanada con objetos y símbolos de la Reconquista y de la victoria de Lepanto; asistieron a la ceremonia miembros del gobierno, de Falange, generales y embajadores de los países amigos. Salvas de cañón y vítores de la muchedumbre saludaron la llegada de Franco, que se dirigió hacia la escalinata pasando bajo un arco de blancas palmas y saludando con el brazo en alto. Después de haber sido recibido por la jerarquía eclesiástica, entró en la iglesia y se encaminó hacia el altar bajo palio, privilegio reservado en la liturgia católica a los obispos, al Santísimo Sacramento y a los reyes, que el Generalísimo seguiría disfrutando durante muchos años. La ceremonia legitimaba el paso del «Caudillo por la gracia de Dios» de jefe victorioso a guía de la nación, al tiempo que sacralizaba su carisma (Di Febo, 2012). Su poder era tan

absoluto como el de los antiguos monarcas, salvaguardado por un Ejército que seguía dirigiendo al país como territorio ocupado y por una Falange cada vez más cercana al fascismo.

El 20 de noviembre de 1939 comienza en Alicante el traslado de los restos mortales de José Antonio. Un imponente cortejo fúnebre recorre más de 400 kilómetros y concluye diez días después en El Escorial, donde tiene lugar la sepultura ante la presencia de Franco. El traslado, organizado por el Servicio de Prensa y Propaganda de Falange, es una concentración de ritos y de liturgias en los cuales, como es usual en las ceremonias de esos años, conviven permanencias e innovaciones. Junto a liturgias nazi-fascistas (las hogueras, los gritos rituales, el saludo romano), el acontecimiento evoca también antiguos ritos funerarios; al mismo tiempo, el contexto hagiográfico y sacralizante que le rodea sugiere modalidades propias de la *traslatio* de reliquias de origen barroco. Al «santo» José Antonio le dirigen oraciones su hermano Miguel —«José Antonio ruega por nosotros»— mientras que su hermana Pilar escribe un *De profundis*. El acontecimiento señala el intento de hacer del culto a los caídos la expresión de un duelo nacional de cohesión y agregación alrededor de la «Cruzada», aunque con aportaciones de consignas de la Falange.

El 20 de noviembre fue declarado «Día de luto nacional» por un decreto del 16 de noviembre de 1938, que también establecía que, previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas, «en los muros de cada Parroquia figurará una inscripción que contenga los nombres de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista». Durante años, cada aniversario de la muerte del «gran ausente» fue ocasión de conmemoraciones de claro cariz religioso. Proliferaron las publicaciones en clave hagiográfica por parte de conocidos escritores, autoridades eclesiásticas y políticas. Con el paso de los años el culto a José Antonio va asumiendo cada vez más formas devocionales reservadas a los santos y a los mártires. Emblemática, en este sentido, es la *Súplica* que, en 1942, le dedica el secretario general de Falange, José Luis de Arrese (Doc. 4^[*]).

En realidad, aunque en competición por la supremacía en algunos sectores de la sociedad, la Falange y la Iglesia, a la sombra de la atenta vigilancia de los generales, aparecían en armonía tanto en las ceremonias

públicas como en la utilización de un lenguaje común impregnado de mensajes palingenésicos y admonitorios. Promesas de regeneración y redención, bajo el signo de «orden, patria y religión», se evocaban en los discursos de Franco, los boletines episcopales, los manuales de Falange y la prensa. La regeneración comportaba el sacrificio, convertido en idealización y sublimación espiritual, en la España autárquica y extremadamente pobre de los años cuarenta (el racionamiento acabó tan solo en 1952). La represión se acompañaba de una abundante normativa que reglamentaba lecturas, comportamientos, entretenimientos y lugares de encuentro. Se prohibieron el carnaval y la coeducación, esta última por ser un sistema pedagógico «contrario enteramente a los principios religiosos del Glorioso Movimiento Nacional».

Como acto de clemencia hacia el vencido —idea «sacada por el Generalísimo de las entrañas mismas del dogma cristiano» según J. A. Pérez del Pulgar, vocal del Patronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo (Sueiro, 1976, pág. 48)— la Redención de Penas por el Trabajo, reglamentada por numerosos decretos y órdenes, concedía a los presos políticos, que sufrían en las cárceles duras condiciones de vida, la reducción de días de cárcel por días de trabajo. En el decreto de 28 de mayo de 1937 se afirma: «El derecho al trabajo, que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el punto quince del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos». A este «derecho» también se acogieron los numerosos detenidos republicanos utilizados para construir el Valle de los Caídos, cerca de El Escorial, el austero monasterio de Felipe II. Ejemplo de una recurrente amalgama simbólico-ideológica, en la construcción conviven el monumentalismo arquitectónico y la religiosidad espectacular —materializada en la cruz de 150 metros de altura y en el imponente mausoleo construido «con objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada», según afirma el decreto de 1 de abril de 1940— con el mensaje de continuidad con la España imperial y de la Contrarreforma. Su realización duró unos veinte años. El mismo Franco fue enterrado en el mausoleo después de su muerte, que ocurrió el mismo día, 20 de noviembre, que la de José Antonio.

Durante años, la propaganda oficial presentó el Valle de los Caídos como monumento de «reconciliación nacional».

El Nuevo Estado confesional impuso un giro antimodernizador que tuvo una significativa repercusión en el ámbito de la enseñanza. El preámbulo de la Ley sobre Ordenación de la Universidad Española, de 29 de julio de 1943, declaraba: «La Ley, además de reconocer los derechos docentes de la Iglesia en materia universitaria, quiere ante todo que la Universidad del Estado sea católica. Todas sus actividades habrán de tener como guía suprema el dogma y la moral cristiana y lo establecido por los sagrados cánones respecto de la enseñanza». La participación en las oposiciones universitarias estaba supeditada a la presentación de una certificación de la Secretaría General del Movimiento que atestiguara «la firme adhesión a los Principios Fundamentales del Estado».

Disuelto el asociacionismo católico juvenil, con cierta resistencia por parte de la jerarquía eclesiástica, los estudiantes fueron encuadrados en el Sindicato Español Universitario (SEU), dirigido por Falange.

Fueron estos los años de máxima expansión de Falange Española. Dependían directamente de ella numerosos aparatos de propaganda: periódicos como *Arriba* y *Pueblo*, emisoras de Radio Nacional, editoriales, revistas culturales y el NO-DO (Noticiarios y Documentales Cinematográficos), semanario de actualidad parecido al Film Luce italiano cuya proyección era obligatoria en las salas cinematográficas, antes del comienzo de las películas. Durante más de veinte años constituyó un importante instrumento de información propagandística con la función de legitimar y exaltar al régimen. En 1940, un grupo de ideólogos falangistas —«apóstoles de una moral nacional»— fundó la revista *Escorial* con el siguiente objetivo: «Rehacer la comunidad española, realizar la unidad de la Patria y poner a esa unidad al servicio de un destino universal y propio». Pero en realidad la unidad de que habla la revista, declaradamente antiliberal, significaba rescatar a «aquellos que, aun habiendo colaborado con los vencidos, decidieran expiar su pecado, dar el paso de incorporarse a los vencedores» (Juliá, 2004, págs. 342 y 347).

Si bien el ocaso de la Falange empezará a vislumbrarse en 1942 —cuando el intento de institucionalizar el régimen en sentido totalitario fue

parado por Franco—, su control sobre la información se mantuvo por mucho tiempo. Represión, encuadramiento social y una rígida censura caracterizaron la larga posguerra española. La censura era «dogmática, xenófoba y pudibunda en un grado inverosímil (Ridruejo, 1976, pág. 435)». Esta es la valoración expresada en *Casi unas memorias* (publicado póstumamente en 1976), de Dionisio Ridruejo, responsable del Servicio de Propaganda hasta 1941, que había pasado a la oposición en la década de los cincuenta. La censura intervenía ante cualquier opinión, análisis, observación que estuviese en desacuerdo con la ideología oficial. Controlaba la prensa, el cine, el teatro y la literatura, así como los actos públicos. Quedaban exentos los «actos de propaganda política del Movimiento», los de carácter militar, los «puramente religiosos» y los de enseñanza organizados en los centros escolares (Abellán, 1980, págs. 275-276). Todo lo que se consideraba crítico con el régimen, etiquetado de «disolvente o pornográfico», se retiraba inmediatamente de la circulación.

Hasta 1941 la censura dependió directamente del Ministerio de la Gobernación; desde 1942 a 1945 fue controlada por la Subsecretaría de Educación Popular de la Falange; a continuación pasó al Ministerio de Educación; y finalmente, de 1951 a 1976 al Ministerio de Información y Turismo. La Ley de Prensa, promulgada en 1938 y complementada por sucesivas órdenes, permanecería sin apenas cambios hasta los años sesenta. Se estableció la censura previa para cualquier tipo de publicación (con la excepción de algunas eclesiásticas), la intervención del Estado en el nombramiento de los directores de los periódicos y las sanciones a las personas o las empresas. La primera modificación se produjo en 1966 a raíz de la Ley de Prensa e Imprenta del ministro Manuel Fraga Iribarne.

En 1967, Juan Goytisolo publicó en Francia el ensayo *Escribir en España*, en el que describe el trámite a que debía someterse todo escritor que quisiera editar novelas o poesías. El «no procede» o, en el mejor de los casos, la devolución del manuscrito una vez eliminadas las escenas eróticas, las alusiones críticas o irónicas hacia la religión oficial o «el orden existente», se comunicaba al interesado. La agotadora tramitación es evocada por Goytisolo: «El original debe pasar por las manos del prestigioso Departamento de Orientación y Consulta, último nombre de pila

de la censura, a fin de que en un plazo más o menos breve —de dos semanas a un año y, a veces, más aún— los funcionarios de este Departamento —sacerdotes, militares y ciudadanos pura y simplemente— resuelvan, a la luz de los principios de la moral católica y de los intereses del Estado, si su publicación es o no es oportuna» (Goytisolo, 1967, pág. 23).

La censura también canceló segmentos enteros del pensamiento político y filosófico. En las universidades se enseñaba neoescolástica, y solo en los años cincuenta, gracias a docentes como Enrique Tierno Galván, José Luis Aranguren, Manuel Sacristán y José María Valverde, quienes habían mantenido contactos con los filósofos exiliados, se recuperaron para la enseñanza otras corrientes filosóficas. Especialmente demoledora fue la campaña dirigida contra la prestigiosa escuela liberal Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por el filósofo y pedagogo Francisco Giner de los Ríos, en la cual se habían formado numerosos intelectuales abiertos a Europa y a la modernidad.

La denigración del intelectual en cuanto sinónimo de pensamiento laico, y por ende factor de disgregación de la unidad nacional, ya se había iniciado durante la guerra con la publicación de la carta pastoral de Pla y Deniel *Los delitos del pensamiento y los falsos ídolos intelectuales* (1938). En el documento se denunciaban los «pecados del entendimiento» no sometido al magisterio de la Iglesia y se invocaba para «los libros condenados por la Iglesia» la expurgación de las bibliotecas populares, escolares y pedagógicas. Esta fue sistemática y se extendió a las escuelas y las universidades y a todo el personal docente. Se alejó, en particular, a miles de maestros herederos de la pedagogía laica e innovadora de la Institución. La crítica como libre ejercicio y debate, como interpretación y reconstrucción problemática de los procesos históricos y culturales, fue sustituida por la homologación del pensamiento y del lenguaje. El liberalismo y sus «perniciosas libertades» —de conciencia, culto, prensa, reunión, enseñanza y propaganda— fueron objeto de una severa condena por parte del catecismo oficial del padre Ripalda; en cambio, se apoyaba la censura previa, ya que «debe impedir el engaño, la calumnia y la corrupción

de sus súbditos, que van directamente contra el bien común» (*Nuevo Ripalda*, 1944, pág. 104).

La misma jerarquía eclesiástica, en la persona del cardenal Gomá, autorizado defensor del régimen, sufriría los efectos de la censura. En agosto de 1939 fue prohibida la publicación (salvo en los boletines episcopales) de su carta pastoral *Lecciones de la guerra y deberes de la paz*. En el documento, retomando críticas hacia los Estados totalitarios expresadas en su momento por Pío XI, el prelado defendía un totalitarismo de dimensiones cristianas, que definía como «totalitarismo divino», criticaba el «estatismo moderno exagerado» e invitaba «al perdón de los enemigos».

La censura, como veremos, continuó funcionando de modo más o menos arbitrario hasta finales de los años setenta. Una ambigua apertura fue propuesta a través del Fuero de los Españoles, que pretendía ser una carta de los derechos. Fue promulgado en 1945 con el propósito de ofrecer una fachada legalista a la fórmula de la «democracia orgánica». De hecho, el artículo 12 declaraba la libertad de expresión de las ideas, pero añadiendo: «... mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado». El aislamiento político y cultural de España iba aumentando, debido al vacío intelectual causado por el exilio de miles de historiadores, escritores, filósofos, juristas. Entre los más conocidos, cabe mencionar a los poetas Rafael Alberti y Juan Ramón Jiménez; los historiadores Américo Castro, Salvador de Madariaga, Claudio Sánchez Albornoz; los filósofos José Ferrater Mora y María Zambrano; el jurista Luis Jiménez de Asúa, y los escritores Ramón Sender y Mercè Rodoreda.

Poco después de finalizar la Guerra Civil, el régimen empezó a crear los primeros institutos culturales, que también nacían marcados por el impulso ideológico y propagandístico. En el preámbulo de la ley por la que en noviembre de 1939 se creaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se indicaba como objetivo cultural el de la «restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias, destruida en el siglo XVIII». Institutos especializados, como el Consejo de la Hispanidad, sustituido en 1945 por el Instituto de Cultura Hispánica, fueron destinados al relanzamiento de las relaciones y los intercambios con América Latina y a

la recuperación de España como «guía espiritual», en nombre de los antiguos lazos y comunión de lengua, cultura y religión. La campaña de promoción editorial de temas latinoamericanos fue encomendada al Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo y a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. (Delgado Gómez-Escalonilla, 1999, pág. 153).

La hispanidad se imponía como instrumento de movilización interno y como eje de la política cultural hacia Hispanoamérica, continente privilegiado en las relaciones internacionales y también en función de la recuperación de un protagonismo que dejara en un segundo plano el aislamiento del régimen en Europa. Retomando el planteamiento ideológico de Ramiro de Maeztu en *Defensa de la hispanidad* (1934), se relanzaba una identidad hispánica basada en valores patrióticos y religiosos presentados como consustanciales de la España auténtica, cuya realización se remontaba a la evangelización de América, a las victorias bélicas del pasado imperial y al esplendor cultural del Siglo de Oro. Castilla, tierra de la reina Isabel y de Teresa de Ávila, era objeto de una atención privilegiada en cuanto forjadora de los mitos y símbolos tradicionales hispánicos: la hidalguía, el sentido religioso de la vida, la austeridad, el rigor moral, el «casticismo» lingüístico.

La revalorización de «lo español» frente a la *extranjerización* era un tema recurrente en los manuales escolares. La legislación, ya en 1938, indicaba los objetivos de la enseñanza de la historia: «Se trata así de poner de manifiesto la pureza moral de la nacionalidad española; la categoría superior, universalista, de nuestro espíritu imperial, de la Hispanidad, según concepto felicísimo de Maeztu, defensora y misionera de la verdadera civilización, que es la Cristiandad». En los libros de texto, la clave de la lectura del pasado procedía de la *Historia de los heterodoxos españoles* de Marcelino Menéndez Pelayo (1882), obra en la que los acontecimientos, los procesos históricos, los protagonistas, se analizan según criterios que consideran positivas las fases marcadas por la afirmación del catolicismo tradicional y patrio, y negativas las caracterizadas por la disidencia religiosa, la Ilustración, el liberalismo, el laicismo; en definitiva, la España «heterodoxa».

Exceptuando algunas importantes contribuciones en el campo de la historia moderna, entre ellas el libro *Carlos V y sus banqueros* (1943), de Ramón Carande, la historiografía de los años cuarenta, en particular la contemporánea, estaba generalmente orientada al adoctrinamiento y al conformismo. La monumental *Historia de la cruzada española*, en diez volúmenes, dirigida por Joaquín Arrarás y Carlos Sáenz de Tejada (diseñador gráfico oficial del régimen, se encargó de la dirección artística de la obra) y publicada entre 1939 y 1943 con el propósito de exaltar las fases heroicas de la guerra-cruzada, constituye un ejemplo de historia unilateral y apologética.

1.4. REPRESIÓN, INTERVENCIONISMO, AUTARQUÍA, POBREZA

El régimen político que se impuso en España tras la victoria del 1 de abril fue una dictadura basada en las tres fuerzas que durante la guerra habían luchado contra la República y que a su final procedieron a un reparto, no siempre libre de conflictos, de las diferentes esferas de poder: los militares, la Iglesia y el Movimiento. Eran tres grandes burocracias que estaban de acuerdo en la necesidad de aniquilar el pasado liberal republicano, militarizar el orden público, regimentar la vida económica y social, recatolizar la sociedad y evitar cualquier contagio con el exterior. Una sociedad represaliada, regimentada, recatolizada y autárquica: tales fueron las características de la sociedad española mientras se construía un Estado cuya nota fundamental consistió en concentrar todo el poder en las manos del general Francisco Franco.

Es imposible entender lo que a la sociedad española le ocurrió tras la derrota de la República si no se tiene en cuenta que fue el Ejército la burocracia dominante en los años siguientes y que el Ejército nunca redujo su función a la de mero instrumento de una dominación de clase. La sociedad española vivió hasta bien avanzado el año 1948 bajo el estado de guerra formalmente declarado por la Junta de Defensa Nacional diez días después del golpe de Estado de 1936. Los militares inundaron literalmente todo el aparato del Estado, se hicieron cargo de la gestión de la economía,

con la creación del INI y llenaron a rebosar las calles con sus uniformes. Más decisivo aún: fueron tribunales militares los encargados de administrar la justicia de los vencedores. Lo hicieron con una técnica metódica, implacable, puesta al servicio de unos objetivos muy precisos, mil veces repetidos en la propaganda oficial y en las disposiciones legales. Las nuevas autoridades se propusieron liquidar el liberalismo heredado del siglo XIX y la democracia instaurada en el XX: dos herencias que los mandos militares consideraban espurias y extranjeras y que decidieron erradicar del suelo español.

Fue por eso la sociedad de la posguerra, ante todo, una sociedad reprimida, recluida —como la vio el novelista Luis Martín-Santos— en un tiempo de silencio. La represión comenzó pronto, desde el mismo día de la rebelión militar. Los militares contaban con ella como un elemento central para construir su Nuevo Estado: en la instrucción reservada número 1, firmada por «El Director» unas semanas antes del golpe militar de julio de 1936, se indicaba que «la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y bien organizado». Desde luego «serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga». Durante la guerra, la represión se cebó sobre todo en las clases obrera y campesina, en los afiliados a las organizaciones sindicales y en los partidos políticos que formaron parte del Frente Popular y en sus viudas, hijas o hermanas, castigadas con el corte de pelo al rape, la purga, la marcha por las calles del pueblo y el despojo de sus bienes. Sobre la clase media, profesional o empresarial, de adscripción republicana y socialista también cayó una terrible represión: muchos alcaldes y concejales pertenecientes a partidos republicanos fueron fusilados y sus bienes incautados.

La Junta de Defensa se apresuró en dotarse de instrumentos jurídicos para proceder a esta sistemática y ejemplarizante represión. A los bandos que los días 17 y 18 de julio declaraban el estado de guerra, con la consiguiente asunción de todos los poderes por las autoridades militares, siguió el publicado por la misma Junta el 28 de julio que declaraba incurso

en el delito de rebelión y sometido por tanto a la jurisdicción militar, que actuaría por procedimiento sumarísimo, a cualquiera que hubiera defendido, activa o pasivamente, el orden constitucional vigente o que, desde el 1 de octubre de 1934, hubiera sido miembro de sindicatos o partidos opuestos al Movimiento Nacional. Lo que en las primeras semanas del golpe de Estado fueron matanzas más o menos indiscriminadas, se convirtió inmediatamente en ejecuciones decretadas por tribunales militares en aplicación del vigente código de justicia militar contra decenas de miles de españoles acusados de «adhesión a la rebelión militar». Fue, en verdad, una «justicia al revés» como la definirá años después Ramón Serrano Suñer en sus memorias (1977, pág. 245), que se podía aplicar a todos los que de alguna manera hubieran mostrado lealtad a la República y a todos los afiliados o simpatizantes de partidos políticos y sindicatos obreros.

A pesar de las promesas de clemencia y generosidad expresadas personalmente por el general Franco en diversas ocasiones, el fin de la guerra como rendición incondicional supuso, para quienes habían combatido en las filas republicanas y no pudieron atravesar la frontera, su detención en campos de concentración en los que muchos de ellos perdieron la vida. De los campos de internamiento, decenas de miles de socialistas, anarquistas, republicanos y comunistas salieron hacia las cárceles o las colonias penitenciarias, donde hubieron de enfrentarse a miserables condiciones de vida, al hacinamiento, la tortura, el hambre y las epidemias que asolaban a la población penitenciaria. Con los prisioneros en edad de cumplir el servicio militar se constituyeron las colonias penitenciarias militarizadas. El ritmo del trabajo, los castigos, la mala comida provocaban entre los penados graves enfermedades que causaban no pocas muertes.

La finalidad de esta represión, una vez terminada la guerra, no consistía en asegurar la victoria militar sino en una depuración masiva de los vencidos hasta erradicar por completo todo lo que los vencedores tenían como causa del desvío de la nación: según dijo el mismo Franco en alguna ocasión, había que enderezar la nación torcida. Fue, en su conjunto, una «operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían sostenido la República», como escribió a principios de los años sesenta el que fuera dirigente de Falange, Dionisio Ridruejo: una extirpación que

empujó al exilio a medio millón de españoles, encerró en campos y cárceles a unos 300 000 y llevó ante el paredón o liquidó en calles y caminos a, por lo menos, 150 000 españoles, varias decenas de miles de ellos después del 1 de abril de 1939, día de la victoria; una extirpación que dejó sin líderes a la clase obrera y sin cabezas a toda aquella clase media que había protagonizado los años de la Edad de Plata de la cultura española. Víctimas de esa represión, perdieron la vida ante pelotones de fusilamiento el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, los ministros de la República Julián Zugazagoitia y Juan Peiró, dirigentes del PSOE y de la CNT, respectivamente, detenidos los tres en Francia por la Gestapo y entregados a las autoridades españolas para ser sometidos a consejos de guerra.

Por otra parte, los tribunales de Responsabilidades Políticas, creados por ley de 9 de febrero de 1939 e integrados por representantes del ejército, de Falange y de la magistratura, y las comisiones de depuración nombradas en todos los organismos públicos para revisar la actuación de los funcionarios, abrieron expediente administrativo a decenas de miles de españoles, que podían ser sancionados con la adscripción de residencia obligada, la pérdida de su cargo o empleo en cualquier rama de la función pública, y con fuertes multas y el embargo e incautación de sus bienes. Miles de maestros fueron depurados y muchos miles de españoles fueron castigados con la pérdida de todas sus propiedades, como fue el caso del mismo presidente de la República, Manuel Azaña, condenado después de muerto al pago de una multa de cien millones de pesetas (Doc. 5^[*]), condena que según la misma ley era transmisible a sus herederos, excepto en los casos en que se acreditase su adhesión a los postulados del Movimiento Nacional. Todos estos procesos se acompañaban además de la convocatoria de testigos para que denunciaran a los sospechosos de no haber mostrado adhesión al Movimiento, lo que extendió por toda la sociedad española un clima de delación y de sospecha.

Por si fuera poco, el 1 de marzo de 1940 se aprobaba la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo que podía aplicarse a todos aquellos que sembraran «ideas disolventes» contra la Religión, la Patria, las instituciones fundamentales del Estado o contra la armonía social. Más aún,

la Ley de 29 de marzo de 1941, de Seguridad del Estado, tipificaba una serie de delitos entre los que destacaban la circulación de noticias y rumores perjudiciales a la seguridad del Estado y ultrajes a la Nación, las asociaciones y propagandas ilegales, la suspensión de servicios públicos y las huelgas. En fin, por leyes de 2 de marzo de 1943 que reformaban los códigos de Justicia Militar y Penal de la Marina, se equiparaban al delito de rebelión militar la propagación de noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público, «los plantés, huelgas y chantajes, así como las reuniones de productores y demás actos análogos cuando persigan un fin político y causen graves trastornos de orden público». El 15 de noviembre de este mismo año se creaba por ley en cada región militar un juzgado especial encargado de la aplicación de la Ley contra la Masonería y el Comunismo que, en opinión de Manuel Ballbé (1983), suponía el establecimiento de medidas con idénticos efectos que la ley marcial. La Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo venía a culminar, unos años después, el edificio legal del nuevo régimen. Sin temor a exagerar, se podría decir que media España vivió durante los años cuarenta sometida de manera permanente a un estado de excepción, del que se vieron libres todos los partidarios del Movimiento, incluso aquellos que hubieran cometido actos considerados delictivos entre el día de la proclamación de la República y el 18 de julio de 1936, exonerados de cualquier responsabilidad penal por ley de 23 de septiembre de 1939 (Marc Carrillo, 2001).

Al paso que erradicaba la rica herencia del más denso período de cambio social y creación cultural experimentado por España durante las décadas de 1910 y 1920, y liquidaba las organizaciones obreras y los partidos políticos, el Estado surgido de la Guerra Civil se aplicó a crear una sociedad homogéneamente católica, encuadrada por una burocracia fascista con amplio poder en sindicatos y corporaciones locales, cerrada a todo influjo exterior, corporativa y autárquica y con sueños de reencontrar su pasado imperial. Franco hubiera querido borrar de la historia de España todo el siglo XIX, un siglo al que los ideólogos católicos y falangistas negaban carácter español. De acuerdo con esa visión de la historia, no dejó de repetir en sus discursos que del liberalismo procedían los dos males que habían resultado en el «balance catastrófico» de siglo y medio: la

democracia, con sus partidos, y la lucha de clases, con sus sindicatos; el liberalismo se entendía como la antesala del marxismo y de la revolución.

Había que proceder, por tanto, como primera medida del nuevo orden en construcción, a disciplinar a toda la fuerza de trabajo, tarea encomendada al partido único. Falange no solo llegó en 1939 a altas posiciones de gobierno; bajo su mando quedaron también encuadrados todos los productores en una organización regida por los principios de verticalidad, unidad, totalidad y jerarquía. Los estatutos de la nueva FET y de las JONS concebían los sindicatos como un servicio del Partido y el Fuero del Trabajo establecía que todos los factores de la economía debían quedar integrados en sindicatos verticales cuyos directivos procederían de la misma Falange. El nuevo sindicato debía agrupar a obreros, técnicos y empresarios en una sola organización, ordenada jerárquicamente bajo control de los mandos del Movimiento que, por su simultánea presencia en el aparato del Estado, garantizaban la conexión orgánica del Estado con el Sindicato y lo reducían a instrumento de su política económica.

Estos principios quedaron consagrados por la Ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940 y por la Ley de Bases de la Organización Sindical del 6 de diciembre del mismo año. Por la primera se concedía el monopolio sindical a FET y de las JONS, lo cual significaba que la Iglesia debía permitir la absorción de sus sindicatos, muy arraigados entre los campesinos castellanos, en el aparato del Movimiento. La segunda establecía, en el seno de la Organización Sindical, las Centrales Nacional-Sindicalistas, con la función de encuadrar y disciplinar a todos los productores, y los Sindicatos Nacionales, organismos de carácter económico sobre los que recaía la responsabilidad de hacer cumplir en la esfera de su competencia las normas y órdenes dictadas por el Estado en su nueva calidad de supremo director de la economía.

El objetivo final de este encuadramiento de carácter tendencialmente totalitario consistía en organizar la economía como un «gigantesco sindicato de productores». Todos los españoles que participaban en la producción formarían parte de la gran comunidad nacional y sindical al servicio de la potencia económica de España. Embriagado por la perspectiva que se abría ante el sindicato, su primer delegado nacional,

Gerardo Salvador Merino, se dedicó con entusiasmo desde agosto de 1939 a la tarea de crear una fuerza autónoma y decidió participar el 31 de marzo de 1941 con una concentración de más de 100 000 productores en los fastos conmemorativos del segundo aniversario de la victoria. Generales y obispos comenzaron a manifestar su descontento ante la posibilidad de que surgiera un sindicato controlado autónomamente por el partido fascista, pero los nazis avanzaban incontenibles por toda Europa y nadie se atrevía por el momento a paralizar el proyecto de una organización capaz de someter a una estricta disciplina laboral y política a toda la fuerza de trabajo.

Disfrutando de una sólida posición en el gobierno, propietarios de un extenso aparato de prensa y propaganda, gestores de delegaciones y comisarías, dueños de la Organización Sindical, con una extensa implantación entre mujeres, jóvenes y adolescentes, con decenas de miles de consejeros locales, miles de jefaturas locales y provinciales, con el Instituto de Estudios Políticos y enjambres de intelectuales afanados en elaborar la teoría del Caudillo fundido con el pueblo en el destino imperial de la Nación, fueron estos los momentos de mayor entusiasmo fascista. Falange contará muy pronto con cerca de un millón de afiliados y estará en condiciones de repartir entre ellos la parte del león del botín capturado: de cada cinco puestos depurados de la Administración cuatro se reservaron para excautivos, excombatientes, huérfanos y viudas; en el nuevo régimen, todo el que no mostrara fervorosa adhesión se veía condenado al ostracismo y al silencio; no había prensa más que la censurada, ni casinos más que los de labradores, ni casas del pueblo más que las del partido único: toda la vida asociativa había quedado encuadrada en las instituciones del Nuevo Estado.

Asegurada de esta forma la regimentación de las fuerzas productivas, el gobierno nombrado el 8 de agosto de 1939 anuló la reforma agraria de la República y estableció el intervencionismo estatal en todas las actividades económicas. Para lo primero, un decreto de 28 de agosto dejaba en suspenso los planes de aplicación de la reforma agraria que no estuvieran ejecutados del todo en esa fecha, y una ley de febrero del año siguiente ordenaba la devolución a sus propietarios de las tierras ocupadas por el Instituto de Reforma Agraria en los años de República y guerra. Para lo

segundo, el Nuevo Estado se dotó de una extensa burocracia y de una prolija legislación. Por ley de 10 de marzo de 1939 se creó la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes con el cometido de procurar y distribuir recursos para abastecer a la población y fijar los tipos de racionamiento de alimentos básicos y los precios para el consumo de los artículos tasados en producción. La Comisaría tuvo competencia sobre multitud de artículos de primera necesidad, como cereales, legumbres, patatas, frutas, pan, carne, pescado, tejidos, vestidos, calzado..., y multiplicó la burocracia con decenas de servicios centrales, comisarías de recursos, zonas de abastecimientos, delegaciones provinciales y locales de racionamiento y consumo. Las infracciones se perseguían por una Fiscalía de Tasas, creada en septiembre de 1940, que podía llevar a los culpables ante tribunales militares, competentes también en esta clase de delitos.

Al fijarse precios bajos, los agricultores tendieron a labrar menos tierra, ocultar cosechas y canalizar parte de su producción a través de mercados no controlados. Se generalizó así el mercado negro —bautizado con el nombre de «estraperlo», por un célebre fraude en cierto juego de ruleta en el que se vio implicado un sobrino de Alejandro Lerroux, varias veces presidente del gobierno de la República en 1934 y 1935— de los productos agrícolas, tasados a precio más bajo de su nivel de equilibrio, con ganancias suplementarias, en ocasiones fabulosas, de los grandes agricultores que aprovecharon además las concesiones del Estado en fertilizantes, maquinaria o productos energéticos. Los resultados económicos fueron catastróficos aunque de ellos obtuvieran grandes beneficios los grupos con capacidad para burlar controles y moverse en mercados paralelos. La búsqueda de ese beneficio creó una trama de intereses en los que se encontraron los burócratas del Nuevo Estado, que decidían sobre concesiones y licencias, y los terratenientes cuya producción se canalizaba a través de esos mercados.

Resultado del nuevo sistema de dominación impuesto en el campo y de la política intervencionista fue un descenso de los salarios agrícolas en términos reales de un 40% respecto a los pagados antes de la guerra. Los jornaleros perdieron la posibilidad de organizar sus propios sindicatos o de recurrir a los tradicionales métodos de negociación y presión para mejorar

sus contratos. El reforzamiento del poder de las fuerzas de seguridad —por lo que se refiere a la España rural, de la Guardia Civil—, la ausencia de un Estado de derecho y de una magistratura independiente dejó en la más absoluta indefensión al campesinado. Ahora bien, la reducción de salarios y la disponibilidad de una abundante y sometida mano de obra no favoreció en nada a la producción. Los años cuarenta conocieron de nuevo grandes hambres provocadas por unas mediocres cosechas entre las que se cuentan algunas de las peores del siglo. La producción de los alimentos básicos descendió dramáticamente durante toda la década como lo hizo también la de los productos agrarios de exportación.

*Cuadro 1. Producciones agrícolas
(medias anuales en miles de toneladas)*

<i>Años</i>	<i>Trigo</i>	<i>Cebada</i>	<i>Aceite</i>	<i>Patatas</i>	<i>Naranja</i>
1931-1935	4.364	2.394	349	5.010	1.044
1940-1944	3.206	1.938	319	3.335	834
1945-1949	3.177	1.819	331	2.715	722

FUENTE: Carlos Barciela, «Introducción», en Ramón Garrabou y otros (1987, pág. 386).

El dramático descenso de la producción agraria fue atribuido por los ideólogos del Nuevo Estado a las destrucciones provocadas por la guerra, a la escasez de fertilizantes y maquinaria y a la llamada «pertinaz sequía», que fue la habitual denominación de las adversas condiciones climatológicas. Sin embargo, las destrucciones solo fueron significativas en lo que se refiere al ganado de labor, del que se perdió un 26,6%, pero el hecho de que grandes extensiones del suelo más fértil quedaran desde el principio de la Guerra Civil en la zona controlada por los rebeldes y que el hundimiento del frente se produjera al final sin grandes combates hizo que, en todo lo demás, las pérdidas no fueran de gran importancia. De hecho, la agricultura mantuvo durante aquellos años aproximadamente el volumen de la producción anterior. Fue únicamente al acabar la guerra e implantarse las nuevas políticas de intervención cuando comenzaron los catastróficos resultados.

Estos tampoco se debieron a las adversas condiciones climatológicas, pues solo se produjeron fuertes sequías en 1945 y 1949, sino a la política económica impuesta por el nuevo régimen. Tal política consistió en una mezcla de los tradicionales principios de intervencionismo estatal y de proteccionismo autárquico con algunos añadidos de lo que se ha denominado fascismo agrario. El Estado español había intervenido tradicionalmente como protector de la producción nacional, papel que llegó a su cima durante la dictadura de Primo de Rivera y no se redujo con la República. En 1940, haciendo de la necesidad virtud, el Nuevo Estado exaltó el ideal autárquico mezclándolo con la nueva retórica del nacionalismo y de la autosuficiencia. A tal retórica se añadía, para completar el cuadro, la crasa ignorancia de los mecanismos económicos por la élite político-militar que concebía el abastecimiento de la población en términos de intendencia, con cartillas de racionamiento de los productos básicos.

Parte de la retórica fascista del Nuevo Estado implicaba, además de la intervención en el suministro, la acción para modificar la estructura de la propiedad creando el Instituto Nacional de Colonización seis meses después de terminada la guerra, en octubre de 1939. El plan de «redención» del campesinado consistía en asentar colonos en zonas de regadíos. La Ley de Colonización de Grandes Zonas fue, sin embargo, un absoluto fracaso: de más de medio millón de hectáreas declaradas de interés nacional para ejecutar el plan solo se transformaron unas diez mil. El número de colonos asentados ha sido estimado recientemente en solo 1759, pero incluso aunque hubieran sido ciertas las cifras oficiales, 25 000 colonos, tal cantidad no habría representado más que un 0,2% de los campesinos sin tierra que, por otro lado, recibían lotes muy pequeños y que enseguida se revelaron antieconómicos.

Intervencionismo y autarquía fueron también los principios que guiaron la política industrial. En la línea del lento pero sostenido proceso de crecimiento industrial que había caracterizado a la economía española del primer tercio de siglo, la guerra y el primer franquismo suponen una quiebra de continuidad. Evidentemente, en este sector las destrucciones fueron superiores a las del sector agrario, aunque el tejido industrial de las

zonas más industrializadas pasó sin grandes destrozos a manos del ejército franquista. Los nacionalistas vascos evitaron aplicar cualquier política de tierra quemada y entregaron prácticamente intacta la industria siderometalúrgica a los vencedores, que pudieron disponer de ella desde el verano de 1937. En Cataluña no hubo tampoco destrozos de maquinaria y los antiguos propietarios que, para salvar la vida, se habían exiliado durante los años de guerra y revolución pudieron reanudar la producción al día siguiente de su retorno. Los destrozos más significativos se produjeron en el transporte y las comunicaciones, pero no en el tejido industrial.

Sin embargo, la inmediata posguerra presenciará una profunda depresión que alcanzó su punto más bajo varios años después de terminada la contienda: la década de 1940 supuso para España la única quiebra notable del secular proceso de industrialización. La explicación, como en la agricultura, debe buscarse en la política intervencionista y autárquica seguida por el Estado Nacional Sindicalista —que era como a la Falange le gustaba denominarlo—, así como en las nuevas alianzas internacionales que alejaron a España de Francia y Gran Bretaña para convertirla en aliada de Alemania e Italia. La libertad de creación de industrias quedó severamente limitada por los decretos de 20 de agosto de 1938 y de 8 de septiembre de 1939, que exigían una autorización previa. Los planes de industrialización quedaron vinculados a la creación, en septiembre de 1941, del Instituto Nacional de Industria, que convirtió al Estado en gran empresario industrial y que será la institución desde la que se asiente el poder económico de los «gestores militares». El INI estuvo desde sus comienzos dirigido por militares y dedicó su atención preferente a industrias de defensa. Los altos costes de primer establecimiento, la fuerte competitividad internacional, la sustitución de importaciones y la financiación poco ortodoxa de su instalación contribuyeron a disparar la inflación, aunque al final de la década el INI era el único o mayoritario fabricante de camiones y automóviles, fertilizantes, aluminio y refino de petróleo.

Esta nueva ideología industrialista era una amalgama de la tradicional exigencia de intervención del Estado para proteger a los industriales de los competidores extranjeros y de las demandas obreras con el principio del Estado como agente impulsor de la industrialización. Las consecuencias

fueron que el gobierno, además de descabezar a la clase obrera, incautándose de las propiedades de sus sindicatos y deteniendo, torturando y sometiendo a consejo de guerra a quienes pretendían organizar alguna acción reivindicativa, favoreció la ausencia de competitividad de las empresas y las situaciones de oligopolio y monopolio. El Estado intervencionista reforzó el poder de los sectores más tradicionales del capitalismo español, que con sus industrias protegidas y con la clase obrera sometida pudieron reducir los salarios hasta un tercio del valor real alcanzado antes de la guerra sin preocuparse del aumento de la productividad. Por otro lado, la rigidez ordenancista redundó en una proliferación de burocracia y de toda clase de irregularidades administrativas. Se creó así un clima económico del que fueron expulsados los principios de la racionalidad capitalista de la libre empresa, la libertad del mercado, la búsqueda de mayor productividad por medio de la reducción de costes. Ante ese Estado omnipresente, el principal esfuerzo de los nuevos industriales consistía en conseguir influencias políticas y administrativas que redundaran en beneficio de los intereses personales.

El intervencionismo reforzó, pues, el poder de los sectores más tradicionales del capitalismo español, que siempre habían reclamado la protección del Estado contra la competencia que podía llegar del exterior y las reivindicaciones obreras que llegaban del interior. Ahora, con sus industrias protegidas hasta el grado extremo de levantar una barrera autárquica y con la clase obrera sometida, los industriales españoles pudieron efectivamente reducir el componente del coste de producción que representa la masa salarial sin preocuparse para nada del aumento de la productividad. Este conjunto de factores —descenso de salarios y, por tanto, de consumo real, fuerte intervencionismo estatal y política autárquica del Nuevo Estado— explican la profunda depresión que atravesó la industria española durante la primera década del franquismo. De acuerdo con el mejor índice disponible, hasta 1950 no volvió a alcanzarse el nivel de producción industrial ya registrado en 1930.

El descenso en la producción industrial, añadido al paralelo de producción agraria, explica que durante los años cuarenta España se empobreciera en términos absolutos y quedara rezagada respecto a otros

países europeos cuyo ritmo de crecimiento había sido hasta entonces similar al español. Buena prueba de lo primero es que el nivel de renta por habitante que se había alcanzado en 1935 no se volverá a igualar de manera definitiva hasta 1954. El conjunto de los españoles tardó, pues, veinte años en recuperar lo que ya habían obtenido.

1.5. DE LA NEUTRALIDAD A LA NEUTRALIDAD PASANDO POR LA NO BELIGERANCIA

El predominio adquirido en 1939 por Falange en política interior tuvo su inmediata correspondencia en la predilección por Alemania e Italia, frente a Gran Bretaña y Francia en la política exterior. Por supuesto, los vínculos que ataban a España con las potencias del Eje venían de antes, de las primeras semanas del golpe de Estado, cuando los insurgentes solicitaron y recibieron copiosa y regular ayuda militar de ambas potencias. Franco había firmado con la primera un pacto secreto de amistad y cooperación en marzo de 1936, y con la segunda en noviembre. Nada de extraño, pues, que inmediatamente terminada la Guerra Civil, España anunciara su adhesión al Pacto Anti-Komintern y el abandono de la Sociedad de Naciones. Ciertamente, el Nuevo Estado español estableció también relaciones con Gran Bretaña y Francia y firmó acuerdos comerciales con ambas, pero el rechazo del liberalismo y la ya histórica frustración de los medios militares ante la competencia francesa en Marruecos, multiplicaron los gestos de simpatía hacia Italia, que alcanzarán su punto más emotivo durante el viaje de Serrano Suñer a Nápoles y Roma, en junio de 1939, al frente de una amplia misión militar que acompañaba a los repatriados italianos de la Guerra Civil. Poco después, en la crisis de agosto del mismo año, el general Gómez-Jordana, que no compartía el entusiasmo de Serrano por las potencias del Eje, fue sustituido al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores por el coronel Juan Beigbeder, más cercano a las tesis de Serrano.

Con el cambio de gobierno de agosto de 1939, Falange pretendió impulsar el proceso de completa fascistización del Estado, lo que en política

exterior significaba un acercamiento sin cortapisas a Alemania e Italia, que incluía también su identificación con los fines de la guerra. Sin embargo, la cautela proverbial de Franco, la desastrosa situación interior y el lamentable estado en que se encontraban el armamento y los suministros de guerra, empujaron al gobierno a declarar la neutralidad el 4 de septiembre de 1939, pocos días después de la invasión alemana de Polonia y la consiguiente declaración de guerra contra Alemania por parte de Gran Bretaña y Francia. Era una neutralidad benévola hacia el Eje, obligada únicamente porque el control marítimo ejercido por Gran Bretaña y Francia habría impedido el aprovisionamiento de alimentos y combustibles en caso de que España hubiera entrado también en la guerra.

Las fulgurantes victorias y, sobre todo, la rápida ocupación de los Países Bajos y Francia por las tropas alemanas fue recibida con entusiasmo en los medios de Falange, como una confirmación hacia el exterior de las posiciones ya conquistadas en el interior: Europa entera sería fascista y España tenía que ocupar una posición de avanzada en tan histórica empresa. El embajador de España ante el nuevo Estado francés presidido por el mariscal Pétain, José Félix de Lequerica, sirvió de mediador para la firma del armisticio el 22 de junio de 1940, lo que elevó por unas semanas el papel internacional de España, que había ocupado Tánger el mismo día, 14 de junio, de la caída de París. En el entusiasmo general desatado por lo que parecía simultánea derrota del comunismo en Rusia y del liberalismo y la democracia en Francia, Franco se sintió por vez primera tentado de entrar en la guerra, aunque finalmente se impuso de nuevo la cautela, a la que le invitaban los altos mandos militares, y se contentó con dar un paso adelante declarando la no beligerancia de España, una iniciativa similar a la tomada por Mussolini en Italia hasta que la derrota de Francia le empujó a declarar también la guerra como aliado de Alemania. En el caso de Franco, era una no beligerancia entendida como un primer paso en el camino que conducía a una participación plena de España al lado de Alemania e Italia.

Ocurrió, sin embargo, que Franco quiso vender muy cara su esperada declaración. En junio de 1940, el general Juan Vigón, jefe del Alto Estado Mayor, ofreció a Hitler la entrada de España en la guerra a cambio del envío de suministros bélicos y alimenticios y de un compromiso de cesión de

Gibraltar, el Marruecos francés y el Oranesado una vez alcanzada la victoria. A Hitler, más interesado en mantener la colaboración con el Estado francés de Vichy, la ayuda que pudiera recibir de las maltrechas Fuerzas Armadas españolas le traía más bien sin cuidado y despreció la oferta. Con Serrano ya al frente del Ministerio de Exteriores desde el 17 de octubre de 1940, la posible entrada de España volvió a plantearse en sendas entrevistas que Hitler mantuvo con Franco, en Hendaya, el 23 de octubre, y con Serrano, en Berchtesgaden, el 18 de noviembre. En ninguna de las dos ocasiones forzó Hitler la decisión española; en ambas, insistieron Franco y Serrano en los puntos ya conocidos por los alemanes: España atravesaba una situación de penuria, carecía de petróleo y armamento, sufría una gran escasez alimentaria y solo podría entrar en guerra si Alemania garantizaba los suministros necesarios y si obtenía un compromiso de cesión de territorios en el norte de África.

Con toda su estrategia dirigida a la invasión de Rusia, Hitler no consideró prioritario ocupar España, invadir Gibraltar y cerrar el estrecho. Los españoles, por su parte, necesitados de suministros, y vulnerables a posibles ataques británicos en las islas Baleares y Canarias, no dejaron de insistir en la sinceridad de su identificación con el Eje y aprovecharon la ofensiva nazi contra la Unión Soviética para pasar de las palabras a los hechos: la formación de una división de voluntarios con la misión de combatir en el frente oriental. Los dirigentes de Falange pensaron que con esta iniciativa reforzarían su posición dentro del Estado español, en declive por la presión de los militares y de la Iglesia. Pero Franco, aunque aceptó la propuesta de enviar una división, bautizada como «azul» por el ministro secretario general del Movimiento, José Luis de Arrese, tuvo buen cuidado en ponerla bajo mando militar. Era, en la práctica, una ruptura de la no beligerancia aunque Franco se apresuró a tranquilizar a los británicos insistiendo en el doble carácter de la guerra: en la que enfrentaba a Alemania con Rusia, España era beligerante frente al comunismo; en la que oponía a Alemania con Gran Bretaña, España se mantenía neutral. Una neutralidad que la entrada de Estados Unidos de América en la guerra y el desembarco aliado, un año después, en el norte de África, no hizo más que confirmar.

Las crecientes dificultades de Alemania e Italia y el vigor de la ofensiva aliada modificaron por completo la estrategia del Caudillo español. Franco se mostró sobre todo muy impresionado por la decisión y la fortaleza de Estados Unidos y aprovechó los conflictos internos entre Falange y el Ejército para destituir a Serrano de todos sus cargos ministeriales y políticos y volver a llamar en septiembre de 1942 al general Gómez-Jordana al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. La derrota del sector «totalitario» de Falange —el sector «serranista»— tuvo una inmediata repercusión en la política exterior del Nuevo Estado. A partir de ese momento, la diplomacia del régimen dirigió sus mejores esfuerzos a reforzar sus relaciones con el Vaticano y a anudar lazos con Estados Unidos, cuyo presidente, Franklin D. Roosevelt, ofreció toda clase de garantías a Franco en el sentido de que el desembarco aliado en el norte de África no pondría en peligro las posesiones españolas siempre que España mantuviera la neutralidad.

Y a la neutralidad estaba ansioso de volver Franco a medida que los aliados avanzaban y las potencias del Eje acumulaban reveses en los campos de batalla. El desembarco americano en Sicilia y la simultánea caída de Mussolini fue la circunstancia aprovechada por el dictador español para volver a declarar la neutralidad de España desde octubre de 1943. La División Azul —por la que habían pasado 45 500 hombres, de los que 5000 perdieron la vida— inició su repatriación y en mayo de 1944, después del estricto embargo de petróleo decretado por Estados Unidos ante la persistencia de aprovisionamiento español de wolframio a los alemanes, España firmó con Estados Unidos y Gran Bretaña un acuerdo por el que se comprometía a reducir al mínimo los intercambios comerciales con Alemania, expulsar a sus espías y cerrar los consulados.

El retorno de España a la neutralidad tuvo efectos inmediatos en la política interior. Franco se apresuró a recalcar que su régimen no era ni fascista ni nazi, sino exclusivamente español, lo que constituía una singularidad derivada del 18 de julio de 1936, cuando se inició una guerra por la patria y la religión y contra la amenaza comunista. El contenido anticomunista de la Guerra Civil y del régimen de ella salido se exaltó al mismo tiempo que pasaba a primer término su catolicismo radical. Como el arzobispo de Toledo y primado de España informaba a los aliados al día

siguiente de la capitulación alemana, la guerra europea y mundial no había tenido nada que ver con la guerra de España, que había sido una verdadera cruzada en defensa de la religión, la patria y la civilización. Esa mezcla constituía la singularidad española. Por tanto, los aliados no debían temer nada de ella; todo lo contrario: España era una adelantada en la lucha contra el comunismo de la que los aliados podrían recibir alguna enseñanza. Mientras tanto, y como en Europa occidental la democracia había triunfado, Franco procedió a un reajuste de gobierno en el que suprimió el Ministerio de la Secretaría General del Movimiento y nombró para ocupar la cartera de Asuntos Exteriores al presidente de la Junta Nacional de Acción Católica, Alberto Martín Artajo. Poco después, el régimen se presentaba al mundo como una democracia, aunque inmediatamente connotada de «orgánica».

El 15 de agosto de 1945 Franco ordenaba izar la bandera nacional para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial (Doc. 6^[*]).

RESUMIENDO...

La dictadura franquista nace y se desarrolla durante la Guerra Civil causada por el golpe de Estado perpetrado contra la República por un grupo de generales, con Emilio Mola y Francisco Franco a la cabeza. Desde las primeras semanas, la guerra-cruzada se convierte en una oportunidad para el Caudillo de construir su poder personal.

Inicialmente la configuración del Nuevo Estado, apoyado por la Falange, la Iglesia y el Ejército, refleja la inspiración del fascismo italiano, fundida con una tradición española que negaba como espuria y extranjera la herencia liberal y democrática.

Desmanteladas las instituciones republicanas, el régimen se va definiendo a través de estructuras corporativas, organismos e instituciones similares a los del modelo italiano pero sometidos al control absoluto de Franco y del Ejército y con un fuerte influjo de la Iglesia. En el plano económico, la elección autárquica comportó pobreza y crisis.

Franco renunció a entrar en guerra al lado de las fuerzas del Eje. En realidad, las distintas estrategias —neutralidad, no beligerancia, envío de

voluntarios y retorno a la neutralidad— fueron dictadas por las vicisitudes bélicas y por las luchas de facciones dentro del mismo régimen, especialmente entre Falange y el Ejército.

LA HEGEMONÍA CATÓLICA (1945-1957)

2.1. EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN

EL RÉGIMEN NACIDO DE LA REBELIÓN MILITAR y de la Guerra Civil que fue su consecuencia significó, en la historia política de España, un radical corte con el pasado. Su más cercano antecedente, la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), había mantenido al rey en la jefatura del Estado, pero ahora el primer acto jurídico de los militares rebelados contra la República consistió en crear una Junta de Defensa Nacional que por decreto de 24 de julio de 1936 asumió todos los poderes del Estado y la representación del país ante las potencias extranjeras. Era verdaderamente un acto fundacional por el que un órgano colegiado, formado solo por militares, asumía todos los poderes y comenzaba a legislar por decreto. Como ya se ha indicado, la asunción y concentración de todos los poderes por la Junta se transfirió por decreto de 29 de septiembre de 1936 al general de división Francisco Franco, nombrado ese día jefe del gobierno del Estado. El decreto atribuía a Franco «todos los poderes del Estado» y lo nombraba «Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire», confiriéndole el cargo de General Jefe de los ejércitos de Operaciones.

Lo que se creó en esos primeros meses de la Guerra Civil fue, por tanto, una especie de dictadura cesarista, soberana, sin límites de tiempo o condición. Con una jefatura del Estado dotada de facultades omnímodas, un partido único, un gobierno y una incipiente administración central del Estado, quedaba aún por dar el siguiente paso: una ley constituyente. El mismo Serrano Suñer elaboró un proyecto de Ley de Organización del

Estado que lo definía como «instrumento totalitario al servicio de la integridad de la Patria», y atribuía la suprema potestad política al jefe del Estado. El proyecto no concedía al gobierno ninguna atención especial, reducía las Cortes a una extensión del Consejo Nacional de Falange, atribuía a la Junta Política de Falange la función de enlace entre Estado y Movimiento y preveía un Consejo de Economía encargado de promover la industria nacional. Era lo más cercano a una constitución fascista que se podía pensar y en el seno mismo de aquel gobierno, donde no todos veían con buenos ojos el creciente poder de Serrano Suñer, surgieron voces discrepantes, centradas en dos puntos: el proyecto concedía demasiado poder al partido sobre el gobierno; y había en él muy poca identidad católica para el Nuevo Estado.

Esas reticencias se habrían disipado si Serrano hubiera contado con el apoyo de Franco para su proyecto de ley. Pero Franco no mostró ningún interés en dotarse de un «instrumento totalitario» ni en iniciar un proceso constituyente. Lo primero, porque un instrumento de ese tipo podría concentrar algún día un poder que atentara contra su suprema potestad, como se había visto en Italia; lo segundo, porque la experiencia de Primo de Rivera le había enseñado que una dictadura podía irse al traste desde el momento en que sus partidarios comenzaran a discutir acerca de una futura constitución. Comprendía Franco, sin embargo, la conveniencia de reunir en una Cámara desprovista de poder legislativo una representación de todos los que disfrutaban de una posición en aquel sistema de clientelismo burocrático. Era preciso dotar al Estado en formación de algún organismo representativo, no de la sociedad, sino de las mismas instituciones públicas.

Accedió, pues, a promulgar el 17 de julio de 1942 una Ley Constitutiva de Cortes que desde su preámbulo reafirmaba para la jefatura del Estado la «suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general», de la que ya disfrutaba desde el decreto que creaba el primer gobierno del nuevo régimen: no un Estado totalitario, sino un jefe de Estado investido de suprema potestad, ejercida en virtud del principio de unidad de poder y coordinación de funciones. Las nuevas Cortes renunciaban a definirse como representantes de nadie; por supuesto, no de la soberanía popular, pero tampoco de un partido o de un movimiento, y no reclamaban para sí la

potestad legislativa. Las Cortes se definían como «*órgano superior* de participación del pueblo en las tareas del Estado» pero, como ya se sabía desde los tiempos de Primo de Rivera, no había mejor cámara de representación popular que la formada por cargos previamente designados por el jefe del ejecutivo. En realidad, las Cortes eran como una representación de todo el aparato estatal, con los ministros, los consejeros nacionales de Falange, los designados directamente por el jefe del Estado, los presidentes de altos organismos, los representantes de los sindicatos nacionales, los alcaldes de la provincia o de determinadas capitales y algunos obispos que de esta forma hacían visible la identidad de Iglesia y Estado: por esos cauces tendría que participar el pueblo en las tareas del Estado.

A la Ley de Cortes se añadió pocos meses después del triunfo de los aliados la Ley de Referéndum Nacional, de 22 de octubre de 1945, por la que la jefatura del Estado se autoconcedía la potestad de instituir la consulta directa a la nación en referéndum que se llevaría a cabo entre todos los hombres y mujeres mayores de veintiún años. Esa potestad se ejerció por vez primera dos años después, cuando culminó esta primera fase de institucionalización del régimen con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947. El gobierno español atravesaba entonces el momento de más fuerte presión ejercido por los aliados cuando decretaron la retirada de embajadores y el aislamiento de España. Los obispos, que mantenían en todos los foros posibles su discurso de cruzada contra el comunismo, publicaron llamamientos y exhortaciones pastorales para empujar a todos los españoles a cumplir como católicos su deber de depositar la papeleta en las urnas: «Por Dios y por España, todos a votar», escribió el obispo de Madrid.

La Ley de Sucesión, promulgada como respuesta dilatoria a las presiones para iniciar una transición de la dictadura a la monarquía, fue mucho más de lo que su nombre indica. En su artículo primero, España se definía como «Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino». Ahora bien, en ese Reino, la jefatura del Estado correspondía a una persona concreta, definida en la nueva ley como Caudillo de España y de la Cruzada y Generalísimo de los

ejércitos. Lejos de garantizar el normal orden sucesorio, el artículo 6 de la ley atribuía al jefe del Estado la facultad de proponer a las Cortes la persona que estimara oportuna para sucederle en su día a título de rey o de regente. Además de esta facultad, Franco se reservaba, respecto a la persona que hubiera de ocupar el trono, el poder de revocar su nombramiento, una forma de controlar la conducta de quien en su día fuera nombrado sucesor. Por supuesto, la monarquía no podría recurrir a ninguna legitimidad histórica, de origen o hereditaria: Franco podía elegir entre las personas de estirpe regia a quien bien quisiera con tal de que fuera varón, español, de treinta años cumplidos, católico y que hubiera jurado fidelidad a los principios del Movimiento Nacional.

La Ley de Sucesión, además de definir la forma de Estado, atribuir a Franco la jefatura vitalicia, crear un Consejo de Regencia y un Consejo del Reino, y regular con todo detalle la sucesión en la jefatura del Estado, proclamaba como Leyes Fundamentales de la Nación el Fuero de los Españoles, el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de Cortes, la Ley de Referéndum y la misma Ley de Sucesión. Eran leyes extraordinarias que no se podrían derogar ni modificar sin el acuerdo de las Cortes y el referéndum de la nación. Pero estas cinco leyes fundamentales no constituían un bloque cerrado: la misma Ley de Sucesión preveía la posibilidad de que se dictaran nuevas leyes con ese mismo rango: Franco nunca tuvo prisa en dotarse de un marco «constitucional» cerrado. Habrán de pasar, sin embargo, otros diez años para que una nueva Ley Fundamental vea la luz: la de Principios del Movimiento, de 17 de mayo de 1958; y otros diez más para que el edificio se dé por terminado con la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967.

2.2. NACIONALCATOLICISMO Y «DEMOCRACIA ORGÁNICA»

En julio de 1945 Franco nombraba ministro de Asuntos Exteriores a Alberto Martín Artajo, presidente de la Junta Nacional de Acción Católica y dirigente de la ACNP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas), una organización fundada en 1909 con el intento de formar a los cuadros

intelectuales y profesionales para ocupar altos cargos en la sociedad y en el Estado. El nombramiento se enmarcaba en una estrategia de cambio de imagen del régimen, como consecuencia de la nueva situación internacional que se había creado tras la derrota de las potencias del Eje. Además de la designación para un ministerio clave de un acreditado exponente del mundo católico, en un momento de graves dificultades para el país, se tomaron otras medidas. La Vicesecretaría para la Educación Popular —encargada del control de la prensa, la censura y la propaganda, hasta aquel momento dirigida por la Falange— pasó al Ministerio de Educación Nacional, cuyo titular fue, desde 1939 hasta 1951, José Ibáñez Martín, miembro de la ACNP y precedentemente diputado de la CEDA.

El ascenso de los «católicos» a las esferas de gobierno estuvo acompañado de disposiciones dirigidas a «desfascistizar» el régimen, eliminando los signos externos más vistosos. Así, quedó suprimido por decreto el saludo romano y, en las ceremonias oficiales, progresivamente Franco fue abandonando el uniforme de Falange. En cambio, los rasgos sacrales de su carisma comenzaban a formar parte de lo cotidiano. A partir de 1947, la leyenda «Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios» rodeó la efigie del dictador grabada en las monedas.

Entre las medidas que, lejos de representar alguna forma de apertura liberal del régimen dictatorial, tendían a una prudente «desfalangistización» del aparato institucional, cabe incluir la supresión —que resultó temporal— de la categoría de ministerio a la Secretaría General de FET y de las JONS. Sin embargo, el falangista José Antonio Girón, en el reajuste de gobierno de 1945, mantuvo la cartera de ministro de Trabajo hasta 1957 y Raimundo Fernández Cuesta recibió la de Justicia. Los ministerios de las Fuerzas Armadas y los de Obras Públicas fueron asignados a militares.

Franco, fiel a la línea de no marginar a ninguno de los componentes del régimen, seguía siendo árbitro absoluto mediante un equilibrio de poderes en la distribución de cargos que respondía a necesidades internas y externas. La política cultural promovida por el Instituto de Cultura Hispánica, y destinada a intensificar las relaciones con América Latina, pretendía tanto contrastar el aislamiento internacional como construir un consenso interno. Consecuentemente se incrementaron los recursos presupuestarios del

Ministerio de Asuntos Exteriores destinados a las actividades culturales con los países latinoamericanos, pasando del 3% en 1945 al 12,5% en 1949 y 1950 (Delgado Gómez-Escalonilla, 1999, pág. 155). Son también los años en los que el Opus Dei, instituto secular fundado en 1928 por el sacerdote José María Escrivá de Balaguer, se abre camino en importantes instituciones culturales y en las universidades. Un miembro del Opus Dei, José María Albareda, fue secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1939 hasta 1966.

Paralelamente, en sus discursos públicos y en las entrevistas, Franco subrayaba la distancia entre el fascismo y el régimen español, en cuanto católico, y presentaba las reformas propuestas como elementos constitutivos de la «democracia orgánica». De hecho, la Ley de Sucesión confirmaba la denominación de España como «Estado católico», y el artículo 6 del Fuero de los Españoles (BOE, 30-6-1945) afirmaba: «La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni en el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica». En el artículo 12 se afirmaba la libertad de expresión, pero, como ya se ha indicado, solo mientras no atentara contra los principios fundamentales del Estado; el artículo 13 garantizaba «la libertad y el secreto de la correspondencia»; el artículo 18 rezaba: «Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las leyes. En el plazo de setenta y dos horas todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial». Sin embargo, estos y otros derechos podían ser «temporalmente» suspendidos por el gobierno «total o parcialmente» mediante decreto ley (art. 35).

La promulgación del Fuero de los Españoles estuvo precedida por encuentros entre exponentes del gobierno y de la jerarquía eclesiástica, preocupada esta por su posible identificación con el régimen dictatorial pero, al mismo tiempo, interesada en recuperar espacios frente a la Falange.

La Iglesia, a través de sus voces más autorizadas, brindó un importante apoyo teórico para la reincorporación de España en Europa, diseñando un itinerario político-religioso coherente y consecuente, que empezaba por la «necesidad» de la Guerra Civil y terminaba con la no intervención en la

Segunda Guerra Mundial. El modelo nacionalcatólico se presentaba como «singularidad», que comportaba también la redefinición de un concepto de democracia ligado a la «diferencia» española, cuyas raíces ahondaban en una tradición mítica, caracterizada por la identificación entre patria y catolicismo, seña de identidad de la «esencia española» y garantía de convivencia civil. Esta interpretación estaba presente en la carta pastoral *Conducta de España en la guerra y en la paz*, redactada en mayo de 1945 por el arzobispo Enrique Pla y Deniel, sucesor en la sede primada de Toledo del cardenal Isidro Gomá, fallecido en 1940. La pastoral condenaba la guerra, considerándola justa solo en caso de necesidad, de acuerdo con lo establecido en el *Syllabus*. Aclaraba que la Segunda Guerra Mundial no tenía nada que ver con la Guerra Civil española, y que esta última había sido provocada por la imposibilidad de alcanzar «según la consigna de la Santa Sede, la colaboración para el bien común, aun dentro del régimen republicano». Reiteraba el carácter de «verdadera Cruzada» de la Guerra Civil, a la vez que subrayaba la importancia de la neutralidad del gobierno español en el conflicto mundial. España se presentaba como la nación que «ha influido en la Historia descubriendo y civilizando junto con otras naciones al Nuevo Mundo». La pastoral concluía con una llamada a esa unidad que engrandeció el país en los Siglos de Oro, deseaba al Estado «la solidez de firmes bases institucionales» e invitaba a los ciudadanos a colaborar, a través de las «instituciones naturales de la familia, profesión y municipio».

La especificidad del «problema español» sería reafirmada por Franco un mes después en un discurso pronunciado en Radio Nacional: «... ni nuestras tradiciones, ni nuestro carácter individualista e independiente, ni el sentido católico de la vida que en España predomina, son compatibles con las fórmulas que sacrifican al hombre y la iniciativa privada a la absorción de un Estado monstruoso y omnipotente. Cada nación resuelve sus problemas internos de acuerdo con sus tradiciones y peculiaridades».

En este contexto, la Iglesia acogía favorablemente el Fuero de los Españoles. La revista *Ecclesia* (órgano de la Acción Católica Española) publicaba el texto de la ley el 21 de julio de 1945 y en el editorial se comentaba: «con el Fuero de los Españoles, recientemente aprobado por las

Cortes, la política española bordeaba la perfección». Al mismo tiempo aparecían críticas al antisemitismo y al racismo. El teólogo Gregorio Rodríguez de Yurre publicaba, entre junio y agosto de 1945, una serie de artículos en la misma revista, en los que condenaba el racismo, identificando sus antecedentes (Gobineau, Chamberlain, Nietzsche), y analizaba la relación entre el Partido Nacionalsocialista y el catolicismo alemán, así como el Concordato entre el Vaticano y el Tercer Reich.

La orientación general era la de reequilibrar la imagen de una España que había sido aliada del Eje y que, durante unos años, había adoptado formas y estilos del régimen fascista italiano. Sin embargo se seguía condenando cualquier forma de democracia parlamentaria. En el número de septiembre-octubre de 1945, la revista de los jesuitas, *Razón y fe*, publicaba un editorial dedicado al final de la Segunda Guerra Mundial en el que se defendía la imposibilidad de practicar el sufragio universal «directo, inorgánico e indiscriminado», al considerarlo inoportuno en una España de posguerra en la que aún pervivían rencores y «ánimos alterados». Como ejemplo negativo se mencionaban las constituciones y la vida parlamentaria de los siglos XIX y XX.

El antiliberalismo seguía siendo un potente factor de cohesión entre Falange, Ejército e Iglesia, mientras que una hábil propaganda exaltaba la «democracia orgánica» como especificidad española y como «diversidad» respecto a los regímenes fascistas. La Cruzada, cemento de la unidad nacional, era evocada frecuentemente en los discursos del Caudillo, en las revistas religiosas, en las pastorales y en los periódicos, destacándose su espíritu antimasónico y anticomunista. Al carisma militar y providencial del jefe del Estado se añadía la representación de un Caudillo como salvaguardia de Occidente, según lo difundido en la biografía-hagiografía de Luis de Galinsoga, escrita en colaboración con el teniente general Franco Salgado, publicada en 1956 con el título de *Centinela de Occidente*.

«Cambios cosméticos», «maquillaje», «camuflaje» son las definiciones utilizadas por la historiografía española para indicar las transformaciones de fachada realizadas por el régimen durante esos años. Una voz aislada, la del exministro de Agricultura durante la República, Manuel Giménez Fernández, procedente de la CEDA, denunciaba: «Ni el sentido cristiano de

la libertad es compatible con la tribuna amordazada, la prensa esclava, el libro censurado, la asociación libre proscrita y la opinión disconforme draconianamente perseguida...» (Tusell, 1984, pág. 77). Sin embargo, en lo que se refiere a la enseñanza, habrá que esperar hasta 1951 para ver algún cambio. Fue en este año cuando Joaquín Ruiz-Giménez, por entonces embajador ante el Vaticano, fue llamado para ocupar el cargo de ministro de Educación. Entre las primeras decisiones del nuevo ministro destaca el nombramiento de Pedro Laín Entralgo como rector de la Universidad de Madrid y Antonio Tovar de la de Salamanca, ambos procedentes de Falange, pero abiertos a la recuperación del pensamiento de la Generación del 98. En particular, Laín Entralgo había protagonizado, años antes, una polémica emblemática del inmovilismo cultural dominante. Su libro *España como problema* (1949), en el que se sugería la posibilidad de reconsiderar aspectos de la historia cultural de España que no fueran solo la expresión de un catolicismo monolítico, obtuvo una dura respuesta de Calvo Serer que, en *España sin problema* (1949), defendía la validez de la tradición «ortodoxa» de Menéndez Pelayo para «mantener la homogeneidad conquistada en 1939». (Díaz, 1992, págs. 53-54).

La vuelta de Ortega y Gasset a Madrid, en 1945, y sus clases en el Instituto de Humanidades en 1949 y 1950, hacían renacer la esperanza de una recuperación del pensamiento liberal. Su muerte, sobrevenida en 1955, dio lugar a actos conmemorativos celebrados en la Facultad de Letras de Madrid, en los que participaron numerosos profesores y estudiantes.

La reforma de la enseñanza media, llevada a cabo en 1953 por Ruiz-Giménez, promovió un acceso más amplio a la educación y produjo algunos cambios en los programas. Se reorganizó el sistema de oposiciones con el fin de limitar abusos y arbitrariedades, y se fijaron normas que regulaban las actividades de los centros religiosos, medida que suscitó las críticas de la Iglesia. (Puelles Benítez, 1980, págs. 387-392). En los manuales escolares se atenuaba la retórica agresiva de los años de la posguerra, pero se mantenía el tono triunfalista y la presentación de la historia como cumplimiento de los designios de la Providencia, por supuesto reflejando el conformismo que aún dominaba en la historiografía oficial. Sin embargo, cabe mencionar, como voces disonantes, los volúmenes de la historia de

España dirigidos por el filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal, exentos de toda concesión apologética, y la renovación llevada a cabo en la Universidad de Barcelona por la escuela de Jaime Vicens Vives, historiador catalán que en 1957 coordinó la fundamental *Historia de España y América social y económica*. Además, la historiografía se enriquecía con las valiosas aportaciones de historia política de Miguel Artola, y las de historia social y de las mentalidades de Antonio Domínguez Ortiz y José María Jover Zamora.

La firma del Concordato entre España y el Vaticano, en agosto de 1953, brindó un reconocimiento oficial al nacionalcatolicismo y legitimó la imagen confesional del régimen en el ámbito internacional. Se otorgaban a la Iglesia numerosos privilegios, espacios y poderes, como la enseñanza obligatoria de la religión católica en escuelas y universidades, dotaciones, exenciones de impuestos y subvenciones para la reconstrucción de lugares de culto y centros de estudio. El artículo XXVI establecía: «En todos los centros docentes, de cualquier orden o grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia católica». Y el artículo XXVII: «El Estado español garantiza la enseñanza de la Religión católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes sean estatales o no estatales, de cualquier orden o grado». (Eran dispensados los hijos de no católicos en caso de solicitud de sus padres). En el Protocolo final se subrayaba la validez del artículo 6 — sobre libertad de cultos no católicos— del Fuero de los Españoles.

Además el Concordato reforzaba la sacralización del carisma de Franco a través del artículo VI que establecía: «... los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado, según la fórmula tradicional y las prescripciones de la Sagrada Liturgia». Dos meses después el cardenal Pla y Deniel disponía que, en la misa, los sacerdotes «digan la oración *Et famulos* con las palabras *Ducem nostrum Franciscum*». A finales de año, Pío XII otorgaba a Franco la Orden Suprema de Cristo, importante condecoración del Vaticano, que nunca se había concedido a un jefe de Estado español. El Caudillo, en su mensaje a las Cortes del 24 de octubre de 1953, exaltaba el Concordato y los honores recibidos, «que hacen de España una de las naciones predilectas de la Iglesia»,

presentándolos como «premio» al pueblo español por su defensa de la Iglesia.

Ceremonias y ritos seguían representando legitimaciones y reconocimientos recíprocos entre el Estado y la Iglesia. En mayo de 1954, con ocasión de las celebraciones del séptimo centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca, y en un clima apoteósico, Franco recibió el título de doctor *honoris causa* en Derecho canónico. Entre los méritos atribuidos al Caudillo se destacaban el espíritu cristiano por él «imprimido a toda una legislación» y la reciente firma del Concordato.

Hasta principios de los años sesenta, peregrinaciones, bendiciones de reliquias y procesiones presididas por exponentes del Ejército y de Falange Española continuaban avalando la imagen de un régimen compacto y de un pueblo sumamente devoto. En julio de 1954, con ocasión de la Ofrenda, antigua ceremonia que se celebra cada año en Santiago de Compostela con la asistencia de autoridades de la Iglesia y del Estado, el arzobispo y Franco reiteraban, mediante el rito de la «invocación» y «respuesta», el carácter de cruzada de la guerra y la importancia de la «unidad católica». Sin embargo, ese mismo año, una encuesta realizada por la Asesoría Eclesiástica Nacional y publicada en la revista *Ecclesia*, revelaba la escasa devoción de los trabajadores y su ignorancia religiosa. Entre las múltiples causas señaladas por la encuesta figuraban el «virus marxista», la falta de «medios de instrucción y de divulgación religiosa cerca de ellos» y la estrechez económica; además se añadía: «Tanto a la Iglesia como al sacerdote los consideran los trabajadores más inclinados hacia el capital que hacia los humildes, y aun juzgan de nuestro apostolado que protege más bien a los ricos que a los pobres».

La cuestión social empezaba a ser fuente de preocupación en algunos sectores de la Iglesia; era objeto de frecuentes intervenciones por parte de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Católica), organizaciones creadas por Acción Católica con el objetivo de recuperar para el catolicismo el mundo del trabajo y que gradualmente se convirtieron en espacios de deslegitimación del régimen. Sin embargo, la Iglesia española estaba todavía lejos de plantear la cuestión de la «reconciliación nacional». Las primeras señales de una voluntad de superar

la fractura entre vencedores y vencidos surgirán de los estudiantes universitarios, aprovechando las tímidas aperturas realizadas durante el mandato de Ruiz-Giménez.

En 1955 un grupo de estudiantes de izquierdas, junto con algunos falangistas de la Universidad de Madrid, pedían, con el apoyo del rector Laín Entralgo, la celebración de un Congreso de Escritores Jóvenes, con el propósito de recuperar corrientes de pensamiento censuradas o marginadas por el régimen. Como consecuencia del rechazo de los dirigentes del SEU, la propuesta inicial se transformó en solicitud de un sindicato más representativo, mediante un documento que en una sola hora recogió más de 3000 firmas. Repartido el 1 de febrero de 1956, el documento llamaba a la organización de un congreso nacional de estudiantes. Grupos de personas con camisa azul asaltaron la Facultad de Derecho y, en la manifestación convocada pocos días después, un joven del Frente de Juventudes resultó gravemente herido por los disparos accidentales de un policía o de un falangista. Los responsables de la iniciativa del Congreso fueron detenidos y se descubrió que, además de estudiantes de izquierdas, habían participado en ella falangistas como Dionisio Ridruejo e hijos de falangistas. Los acontecimientos de febrero de 1956 marcaron un giro, ya que evidenciaron una oposición al régimen que prescindía de la división generada por la Guerra Civil.

Dos meses después, la Agrupación Socialista Universitaria, a través de un manifiesto, declaraba su voluntad de «reconciliarnos con España y con nosotros mismos». Fue suficiente que un ministro y un rector dejaran abierta la posibilidad de introducir cambios moderados para que los jóvenes, «hijos de los vencedores y de los vencidos», como se decía en ese manifiesto, repartido el 1 de abril, aniversario de la victoria, inaugurasen un lenguaje diferente sobre la Guerra Civil que quedaba reducida a un hecho puramente militar que no había resuelto ninguno de los problemas pendientes (Juliá, 1999). El documento critica explícitamente la política triunfalista de la victoria del régimen y sus resultados negativos y señala la contradicción entre la presencia de España en organismos europeos como la UNESCO y la violación de los derechos del hombre (Doc. 7^[*]). A consecuencia de los acontecimientos de febrero, Laín Entralgo dimitió y los

ministros de Educación y del Movimiento, Ruiz-Giménez y Fernández Cuesta, según una modalidad muy propia de Franco, fueron destituidos de sus cargos.

2.3. AISLAMIENTO, GUERRA FRÍA Y ACUERDOS CON ESTADOS UNIDOS

Con la Ley de Sucesión de julio de 1947 se había cerrado el primer ciclo de leyes fundamentales, creadoras del Nuevo Estado. Habían pasado más de diez años desde el inicio de la Guerra Civil y del nombramiento de Franco como jefe del gobierno del Estado. Las características que definían al nuevo régimen estaban ya perfectamente perfiladas: un Estado católico, constituido en Reino, con la jefatura atribuida de forma vitalicia a Franco, que retenía la suprema potestad normativa, aunque asistido por una Cámara de representación orgánica, los Consejos del Reino, de Regencia y de Ministros y, en fin, con una vía de comunicación directa entre el jefe del Estado y el pueblo a través del referéndum, como fue habitual en todos los regímenes totalitarios de la época.

La institucionalización de este Estado dictatorial tuvo lugar en condiciones de penuria y hambre en el interior y de aislamiento en el exterior. En junio de 1945, la conferencia de San Francisco aprobaba una propuesta de México que vetaba, sin nombrarla, el ingreso de España por ser uno de los Estados con un régimen establecido con la ayuda de las Fuerzas Armadas que habían luchado contra las Naciones Unidas. Cuando la guerra del Pacífico llegaba a su fin, los aliados aprobaron hacia la España franquista una política que en sus líneas fundamentales había sido elaborada por el gobierno británico. Frente a la propuesta de intervención del secretario del Foreign Office, Anthony Eden, para poner fin al régimen por medio de presiones conjuntas de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, sustituyéndolo por una oposición moderada, prevaleció la visión del primer ministro, Winston Churchill: a Franco habría de sucederle la restauración monárquica en la persona de Juan de Borbón, que buscaría apoyo en el Ejército y en los círculos de la oposición moderada; pero, añadía Churchill, los aliados no debían en ningún caso intervenir directamente para provocar

la caída del dictador, que perjudicaría los intereses británicos y aprovecharía únicamente a la Unión Soviética.

Tal fue en definitiva la política aprobada en la conferencia de Potsdam, en julio de 1945, frente a la propuesta de Stalin de romper todas las relaciones con Franco y apoyar su sustitución por una coalición de fuerzas democráticas. Fue la delegación británica —encabezada por el nuevo primer ministro el laborista Clement Attlee— la que presentó el proyecto de resolución recogido en la declaración final: los aliados no apoyarían la candidatura del gobierno español al ingreso en la Organización de Naciones Unidas porque no poseía, en razón de sus orígenes, su carácter y su asociación con los agresores, las calificaciones necesarias, pero tampoco adoptarían medidas más severas con el propósito de provocar la caída del dictador. Mostraban, desde luego, su deseo de que los españoles pudieran darse libremente el régimen de su preferencia, pero no decían nada acerca de lo que estaban dispuestos a hacer para devolverles la libertad si Franco decidía permanecer en la jefatura del Estado.

La respuesta del régimen a las presiones que durante el verano de 1945 le llegaban del exterior consistió, como ya se ha indicado, en rebajar toda su parafernalia fascista de uniformes y saludos, a la vez que se acentuaba su contenido católico y su anticomunismo confeso. Fue una convicción muy pronto sentida por los círculos de poder más próximos a Franco que el triunfo aliado no sería más que el preludio de un nuevo conflicto, esta vez entre la Unión Soviética y las democracias occidentales. Partiendo de este supuesto, la recomendación que el almirante Carrero presentaba a Franco en un memorándum era de una contundencia brutal: orden, unidad y aguantar. Era preciso reforzar los mecanismos de represión, torturar si el caso lo exigía, mantener sin fisuras la unidad en torno a Franco y esperar que el temporal amainara. Para esa política fue de importancia crucial que el catolicismo político y la jerarquía de la Iglesia católica cerraran filas en torno a Franco.

Los aliados mantuvieron, sin mayores resultados, su política de presión pero no intervención. Por razones de política interior, tras la subida de la coalición de izquierda al gobierno, Francia decidió unilateralmente cerrar su frontera con España el último día de febrero de 1946. Fue una decisión que

resultaría inadecuada para el objetivo perseguido y perjudicial para los intereses industriales y comerciales de Francia en España. Pocos días después del cierre de la frontera, el 4 de marzo de 1946, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos firmaron una nota conjunta en la que volvían a mostrar su repudio al régimen pero también su voluntad de no intervenir esperando que los españoles encontraran algún medio para conseguir que Franco abandonara pacíficamente el poder.

El resultado final de esta política de las tres potencias occidentales fue, por una parte, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no encontrara en el régimen de Franco motivos suficientes para calificarlo como «un peligro» para la paz mundial y, por tanto, no considerara obligada una intervención exterior para derrocarlo; por otra, que la Asamblea General aprobara, en su primera reunión de diciembre de 1946, una dura resolución en la que se mostraba convencida de que «el gobierno fascista de Franco» fue impuesto al pueblo español por la fuerza y recomendaba la exclusión de España de los organismos internacionales establecidos por la ONU. La Asamblea recomendaba también al Consejo de Seguridad que tomara las medidas necesarias para remediar la situación si en un tiempo razonable no se había establecido un gobierno cuya autoridad dimanase de los ciudadanos e instaba a todos los miembros de la Organización a que retirasen de España sus embajadores y ministros plenipotenciarios.

Esta última recomendación de la Asamblea General fue seguida por todos los miembros de la ONU excepto por el Vaticano, Portugal, Irlanda, Suiza y Argentina. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo intentará compensar el aislamiento con políticas hacia América Latina y hacia los países árabes. Decisivo resultó el apoyo de Juan Domingo Perón, que concedió un crédito de 350 millones de dólares para que España pudiera adquirir trigo en Argentina, mientras su esposa Eva Duarte visitaba el país entre aclamaciones populares. Pero el panorama para el régimen se presentaba más sombrío que nunca cuando finalizaba el año 1946: los embajadores se habían retirado, Francia mantenía cerrada la frontera, el Reino Unido persistía en sus presiones por un cambio pacífico hacia la monarquía y, peor aún, el Departamento de Estado de Estados Unidos parecía muy sensible a las ventajas que suponía para la Unión

Soviética, en el terreno de la propaganda, el mantenimiento del régimen de Franco. Si, en efecto, los aliados occidentales mostraban tan gran pasividad ante un régimen cómplice de nazis y fascistas, la Unión Soviética no tenía por qué dar cuenta de lo que ocurría en los países de Europa oriental, progresivamente soviéticos.

El Departamento de Estado podía sentirse preocupado por la permanencia de Franco, pero lo que de verdad inquietaba al Pentágono era qué podría ocurrir si Franco caía. Sin duda, Estados Unidos desearía un cambio en España, pero una república era impensable y la monarquía carecía de apoyos internos. Por otra parte, a medida que avanzaba el año 1947 crecía el temor de que el mundo se encaminaba fatalmente a un enfrentamiento bipolar: la doctrina Truman, elaborada en marzo de ese año, llevaba a realzar el valor estratégico de España y bloqueaba cualquier iniciativa hacia la oposición a Franco que fuera más allá de la expresión de buenos deseos. Era cada vez más patente que la política de aislamiento había llevado a resultados contrarios: fortalecía a Franco en el interior y no favorecía en nada los acuerdos entre la oposición moderada del interior, que deseaba una rápida restauración de la monarquía, y algunos políticos del exilio, que aspiraban a un restablecimiento de la democracia.

De modo que 1948 se caracterizó por el relajamiento de la política de aislamiento y la reanudación de relaciones comerciales normales con el régimen de Franco. En enero, el presidente Truman aprobaba la propuesta del Consejo Nacional de Seguridad de normalizar las relaciones con España. Acto seguido, el 10 de febrero, Francia reabría su frontera y firmaba en mayo un acuerdo comercial con España, siguiendo los que ya habían firmado Gran Bretaña e Italia. Estados Unidos aceleró entonces su cambio estratégico y, bajo su iniciativa, la segunda Asamblea General de la ONU dejó de incluir en sus resoluciones la condena de la primera, que de todas formas se mantenía vigente aunque cada vez más vacía de contenido eficaz. El *lobby* que José Félix de Lequerica, con rango de embajador, había establecido en Washington fomentó los viajes a España de senadores y militares y abrió las puertas a los primeros créditos que en 1949 la banca americana concederá al Estado español.

El camino estaba ya expedito, aunque los progresos serán muy lentos por las reticencias de los gobiernos de Francia y Gran Bretaña a aceptar al régimen de Franco en los foros internacionales. De hecho, España llegará al final de la década sin ser miembro del Consejo de Europa ni de la OTAN, sin participar en el plan Marshall ni haberse incorporado a la Organización Europea de Cooperación Económica. Sin embargo, la guerra de Corea, en el verano de 1950, acabará por inclinar en Washington la balanza hacia quienes habían insistido, durante los años anteriores, en las ventajas estratégicas de España para la política de contención del comunismo. Ese mismo año, la nueva política está ya suficientemente madura para arrastrar a una mayoría de países a aprobar una nueva resolución en la Asamblea General de la ONU que revocaba la de 1946 y levantaba la prohibición de embajadores. En marzo de 1951, Stanton Griffis presentaba sus cartas credenciales como embajador de Estados Unidos en Madrid, en medio de un despliegue de pompa, como primer adelantado de lo que el régimen celebrará como el regreso de los embajadores y el triunfo de su verdad ante las democracias occidentales.

A estas alturas, era ya evidente que Washington había desplazado a Londres como centro de la política de las potencias occidentales hacia España. La misión del embajador Griffis consistía en incorporar a España al sistema de seguridad occidental al margen de los organismos multilaterales y en incluirla en los planes de recuperación económica al margen del plan Marshall. Las conversaciones llegaron a buen puerto en un tiempo razonable. Estados Unidos y España firmarán en septiembre de 1953 un Acuerdo Ejecutivo, que no tenía que pasar por la aprobación del Congreso ni del Senado, por el que Estados Unidos dispondrá de bases e instalaciones en España sobre las que Washington, gracias a las cláusulas secretas que acompañaban al Convenio, gozará de capacidad de decisión unilateral. «Protocolo de la impotencia», como lo ha llamado Ángel Viñas, estas cláusulas secretas implicaban una sustancial dejación de soberanía por la que España recibirá en adelante el apoyo político, económico y militar de su poderoso aliado. Algo similar ocurrió con el reconocimiento recibido por el régimen de Franco un mes antes gracias a la Santa Sede: a cambio de su espaldarazo internacional, Franco reafirmó para la Iglesia por el Concordato

de 1953 una larga serie de privilegios económicos, jurídicos, educativos, sin parangón posible en ningún Estado europeo: el Estado, definido como católico por la Ley de Sucesión, se hacía algo más que católico en la práctica.

Con estos dos pactos, España salía por fin del ostracismo, aunque lo hiciera por la puerta de atrás de dos acuerdos bilaterales en los que había dejado jirones de su soberanía. En los dos años anteriores, y a caballo de la vuelta de embajadores, había sido admitida en los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas: la Organización Meteorológica Mundial, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO. Quedaba todavía pendiente la admisión como miembro de la Organización de Naciones Unidas, pero todo se andará. En 1955, solo dos años después de los convenios con Estados Unidos y del Concordato con el Vaticano, la situación habrá madurado ya lo suficiente para que la Asamblea General olvide todas sus resoluciones anteriores y acepte a España como miembro de la organización. Ha terminado el aislamiento y Franco puede prepararse para iniciar una nueva etapa de su régimen.

2.4. OPOSICIÓN EXTERIOR Y REPRESIÓN INTERIOR

A partir del otoño de 1943, con el curso de la guerra mundial inclinado definitivamente del lado de las potencias aliadas y con la aparición de una tímida oposición interna a la permanencia de Franco en la jefatura del Estado, protagonizada por disidentes monárquicos, comenzaron a dar sus primeros frutos los penosos esfuerzos de reorganización en el interior de España de los partidos y sindicatos obreros. Sin posibilidad de conocer qué pasaba con sus correligionarios en el exilio, los socialistas del interior se declararon a favor del retorno a la situación de 1936 y propugnaron la convocatoria de elecciones generales. Para avanzar en esa dirección, fomentaron los contactos políticos con los sindicalistas de la CNT y con los partidos republicanos, manteniendo las distancias con los comunistas que, por su parte, habían creado la Unión Nacional Española, primer intento por agrupar bajo su dirección a diversos grupos de oposición a la dictadura.

Fruto de las expectativas suscitadas por la inminente derrota alemana y de los contactos entre socialistas, sindicalistas y republicanos fue la creación, a mediados de 1944, del primer organismo unitario de oposición al régimen de Franco, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. En octubre, las conversaciones entre republicanos, sindicalistas y socialistas desembocaron en la publicación de la primera declaración programática para poner fin a la dictadura por medio de un gobierno provisional que presidiera un período de transición hacia una plena democracia. La Alianza se declaraba a favor del restablecimiento del régimen republicano, pero no cerraba las puertas a una futura colaboración con las fuerzas políticas favorables a la restauración monárquica: un gobierno provisional convocaría elecciones generales de las que saldrían unas Cortes que decidirían el futuro político del país. La Alianza declaraba, además, como núcleo de su política internacional, la adhesión a la Carta del Atlántico y la aspiración al reconocimiento de España como potencia occidental y mediterránea.

Esta elección estaba motivada por el hecho de que la oposición española comenzaba a sacar cabeza del pozo en el que la había hundido la implacable represión de la posguerra y era consciente de que sin ayuda de los aliados sería imposible el retorno de la democracia a España. No habrá habido en la historia política española del siglo xx ninguna expectativa tan arraigada, y tan reiteradamente frustrada, como la depositada por la izquierda obrera y republicana en las democracias europeas y en Estados Unidos entre 1944 y 1953. Con la proclamación de objetivos políticos moderados, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas pretendía presentar una coalición de partidos y sindicatos de la oposición democrática como alternativa a la dictadura aceptable por las potencias aliadas, a las que atribuía la firme decisión de liquidar al régimen de Franco como si fuera un apéndice enfermo de los regímenes fascistas.

La aparente disposición de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos a desplazar a Franco del poder tuvo un primer efecto en la creciente presión del sector monárquico que pretendía poner fin al régimen reinstaurando la monarquía. El hecho de que el inspirador de la fórmula monárquica fuera el Reino Unido y que la operación exigiera el acuerdo del Ejército explica que

el proyecto de restauración se desarrollara a través de cartas y comunicados a Franco rogándole que, por el bien de España, abandonara la jefatura del Estado. Don Juan de Borbón, con el apoyo de los monárquicos del interior, militares y civiles, podría servir a este propósito y su manifiesto de Lausana, publicado unos días después de la conferencia de Yalta, tiene sentido en este contexto. Por una parte, don Juan se revelaba como un decidido antifranquista, y por otra, tranquilizaba a los más conservadores prometiendo una «monarquía tradicional» a la vez que hacía un guiño a la oposición al asegurar que bajo la monarquía cabían «cuantas reformas demande el interés de la nación».

El acercamiento de un sector de las fuerzas monárquicas a la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas desató todo tipo de especulaciones. Se decía, cuando comenzaba el año 1946, que Juan de Borbón, con el apoyo del Reino Unido y de Estados Unidos, iba a presentarse en Portugal, mientras los generales parecían decididos a echar a Franco y llamar al pretendiente. Querían formar un gobierno en el que, como gran concesión a los socialistas, se les ofrecerían las carteras de Trabajo y Agricultura. Desde luego, los socialistas del interior desearían restaurar la República, pero es muy indicativo de las dudas y expectativas del momento que, aun insistiendo en la legitimidad republicana, pensaran que quizá pudiera acordarse la instauración de un gobierno de transición para presidir la consulta al país. La experiencia de la represión y de la fuerza del régimen, añadida a los contactos con la embajada británica y las conversaciones con los monárquicos, les habían convencido de lo vano que habría sido mantener la reivindicación de la legitimidad de la República como requisito previo a la transición hacia la democracia. El gobierno provisional, cuya tarea sería convocar un plebiscito sobre la forma de Estado y unas elecciones a Cortes constituyentes, no tendría, pues, un signo institucional definido.

La relativa claridad en los objetivos de la oposición interior no correspondía a la firmeza de la misma política en el exterior. En febrero de 1946, la llegada de don Juan de Borbón a Estoril se adelantó en pocas semanas a la instalación en París del gobierno de la República en el exilio, reconstituido en México el año anterior. La oposición al régimen aparecía,

pues, desde Portugal y Francia, dividida entre dos legitimismos excluyentes: monarquía o república. Si la oposición pretendía presentarse ante las potencias occidentales como una alternativa creíble al régimen de Franco, monárquicos del interior y republicanos del exilio, enfrentados pocos años antes en una guerra a muerte, tendrían que empezar a negociar.

El asunto no era fácil. Socialistas y republicanos habían fundado en México, en 1942, una Junta Española de Liberación con la idea de ofrecer a los aliados un organismo que, sin hacer cuestión de la restauración republicana, sirviera como gobierno provisional para la convocatoria de un plebiscito. Pero el proyecto quedó postergado ante la euforia desatada entre los republicanos exiliados por el triunfo aliado. En septiembre de 1945, Diego Martínez Barrio, elegido un mes antes presidente de la República, encargó la formación de gobierno a José Giral, que llamó para ocupar las distintas carteras a socialistas, republicanos, nacionalistas catalanes y vascos, y representantes de los sindicatos, dejando fuera a los comunistas.

Mientras los exiliados reafirmaban la legitimidad republicana, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, con objeto de evitar una crisis en el gobierno francés y calmar a los sindicatos británicos, publicaban en marzo de 1946 una declaración en la que propugnaban la retirada pacífica de Franco, la abolición de Falange y la formación de un gobierno interino que permitiera a los españoles determinar libremente su futuro. Pero esa nota tripartita no mencionaba para nada al gobierno de la República en el exilio ni al pretendiente monárquico, y parecía alentar los esfuerzos de quienes habían antepuesto la restauración de la democracia al signo institucional del régimen que la restaurara.

Pero el gobierno de la República en el exilio no atendió a las señales que marcaban la nueva dirección, nublada la vista por el ejemplo de Francia, donde un gobierno formado por democristianos, socialistas, radicales y comunistas ponía en marcha un proceso de transición institucional que llevaría de la Tercera a la Cuarta República a través de cinco convocatorias a las urnas. La idea de un gobierno de coalición de resistentes al franquismo que dirigiera un similar proceso de transición en España, con una convocatoria de elecciones a Cortes y un plebiscito sobre la definitiva forma de Estado, estaba en el aire. Para traerla a tierra, el

gobierno de la República en el exilio se inspiró en el ejemplo francés, incorporó a los comunistas y reclamó el reconocimiento de su legitimidad.

Esta iniciativa chocaba frontalmente con la nota tripartita, ratificada por la resolución de la ONU de 12 de diciembre de 1946. Ciertamente, la ONU condenaba al régimen de Franco pero invitaba a los españoles a que arreglaran su sustitución con un gobierno provisional que convocara un plebiscito. El fracaso en las negociaciones para el reconocimiento de las instituciones republicanas, por el que tanto había batallado el gobierno de Giral, abrió una crisis que solo pudo arreglarse con el nombramiento de Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE, radicado en Toulouse, para la presidencia del gobierno. Al sostener la continuidad del gobierno de la República y dar entrada en él a Santiago Carrillo, Llopis aparecía no solo como un abanderado de la legitimidad republicana, sino como un aliado de los comunistas, lo que tal vez podía ser bien visto en Francia pero fatalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde el gobierno de Truman avanzaba por el camino de la confrontación con la Unión Soviética.

Era preciso, por tanto, según lo veía el líder de los socialistas radicados en México, Indalecio Prieto, que los socialistas españoles exiliados en Francia entendieran la nueva situación internacional y que, además de romper con los comunistas, disolvieran o, al menos, abandonaran el gobierno de la República. En esa tarea se empleó Prieto durante todo el año 1947 hasta que por fin pudo atraer a sus posiciones al grueso del exilio socialista y emprender negociaciones con los monárquicos para llegar a un acuerdo presentable a los británicos. Las negociaciones fueron laboriosas, aunque finalmente, en agosto de 1948, socialistas y monárquicos de oposición llegaron a un acuerdo en San Juan de Luz que establecía las condiciones para una transición a la democracia: concesión de amnistía, garantías de orden público sin venganzas ni represalias, eliminación de toda influencia totalitaria en el futuro gobierno, incorporación de España al grupo de naciones occidentales, libertad religiosa y consideración especial a la religión católica, para terminar con una consulta a la nación después de la devolución de las libertades.

Este acuerdo iniciaba lo que será una larga serie de documentos firmados entre diversos grupos de la oposición del exilio y de disidentes del

interior y adelantaba algunos de los contenidos que caracterizarán treinta años después la transición a la democracia. Pero si el texto del acuerdo era plausible, en el tiempo de la firma era ya papel mojado. Lo era no solo porque, en el mismo momento en que se firmaba, don Juan de Borbón se entrevistaba con Franco para confiarle la educación de su hijo y desautorizaba a quienes habían negociado en su nombre, sino también porque, para agosto de 1948, el régimen había comenzado a recibir visitas de emisarios de Estados Unidos que abrieron una ventana por la que comenzó a recibir suficiente oxígeno para mantenerse con vida. En octubre de 1947, el Departamento de Estado había elaborado ya las directrices de su nueva política sobre España. Desde comienzos del año siguiente, con la reapertura de la frontera por Francia, la diplomacia española disponía de suficientes datos para saber que el aislamiento había terminado y que España, contando con el apoyo de Estados Unidos, se incorporaría en plazo no muy lejano a los organismos internacionales.

A la vez que comenzaba a abrirse al exterior, el régimen de Franco mantuvo una represión implacable en el interior. En 1945, los sindicatos clandestinos habían recibido la derrota de Alemania e Italia como un adelanto de la caída del franquismo, motivo suficiente para despertar unas expectativas que condujeron a la convocatoria de huelgas que se extienden durante dos años por Cataluña, Vizcaya, Madrid, Asturias. La represión que cayó sobre ellos, de la que fue punto culminante la matanza de Pozo de los Funereros —cuando varias decenas de mineros fueron arrojados al fondo de un pozo y dejados morir miserablemente el 21 de mayo de 1948—, acabó por destrozar las ya débiles organizaciones clandestinas. En Asturias, enclave tradicional de la UGT, la estructura organizativa que a duras penas se había reconstruido entre 1943 y 1947 quedará reducida poco después a un puñado de militantes veteranos. Con la CNT ocurrió algo parecido: si experimentó un renacimiento entre los años 1945 y 1947, su presencia a partir de esas fechas será puramente simbólica. Los sindicatos ya no eran ni la sombra de lo que habían sido en 1945. Los comunistas, por su parte, habían fracasado en la proyectada invasión por el valle de Arán y, aunque todavía perduró alguna actividad de guerrilleros, su aislamiento se hizo

cada vez más agudo hasta la última resistencia a comienzos de los años cincuenta.

La continua caída de sus comisiones ejecutivas había vuelto más cautos a los dirigentes de partidos y sindicatos clandestinos y mucho más conscientes de la fortaleza del enemigo que sus correligionarios del exilio, todavía convencidos de que una acción de las potencias democráticas podía derrocar a Franco con tal de que se les ofreciera un instrumento de gobierno que garantizase la paz interior, y que fuera satisfactorio para la Iglesia católica y para el Ejército. Era una esperanza ilusoria, como habría de quedar definitivamente demostrado con los acuerdos firmados entre Estados Unidos y España y la posterior admisión del régimen de Franco en la Organización de las Naciones Unidas.

2.5. LA LENTA SALIDA DE LA AUTARQUÍA

Al finalizar la década de 1940, la política económica impuesta por los vencedores tras la Guerra Civil había mostrado claramente su fracaso: el nivel de renta no había alcanzado aún el de 1930; la producción agrícola había retrocedido y vivía pendiente de las condiciones climatológicas; la industria sufría estrangulamientos en suministros básicos y se encontraba sumida en una profunda depresión; toda la economía se sentía atenazada por el extremado intervencionismo estatal y por la proliferación de una burocracia ineficiente; el mercado negro había florecido, mientras el nivel de vida de la mayoría de los españoles había descendido por lo menos un tercio respecto al conseguido antes de la guerra. El descenso de los salarios reales condujo en 1951 a la manifestación de las primeras muestras de malestar obrero. El anuncio de una subida en el precio de los transportes provocó la primera oleada de huelgas en Barcelona y luego en Madrid y en el País Vasco. Solo la contundente represión de cualquier signo de protesta o malestar, la persecución de cualquier organización sindical o política y los efectos morales de la derrota en la Guerra Civil podían evitar que el descontento adquiriera más amplias dimensiones.

Era evidente, pues, la necesidad de un cambio de rumbo en política económica que el régimen solo podría acometer si se sentía en condiciones de seguridad y firmeza. Muy oportunamente, esa seguridad le venía ahora del mismo sitio del que antes procedía su debilidad: la situación internacional. Nunca, desde 1942, el régimen se había sentido tan seguro como en los primeros años cincuenta. España se ofrecía como un firme aliado de la nueva política norteamericana e incluso estaba dispuesta a acabar con su tradicional neutralidad y permitir que su suelo fuera utilizado para las misiones estratégicas requeridas por la política internacional de Estados Unidos. Con tal motivo comenzaron a llegar a Madrid misiones militares, económicas y políticas norteamericanas. Se produjo así una primera apertura que puso fin a la década de exaltación del aislamiento: más que renunciar expresamente a la autarquía, se dejó de hablar de ella y de sus excelencias. Además, la expansión económica experimentada por los países europeos gracias a los programas de reconstrucción y a la sustitución de la retórica intervencionista y proteccionista por la del libre mercado y la competencia tuvo un efecto decisivo sobre la doctrina oficial. Obviamente, los míseros resultados de la política autárquica española, confrontados al éxito de la libertad de mercado y de la iniciativa privada, contribuyeron al desprestigio de la política intervencionista y autárquica.

De todas formas, y aunque 1951 fue uno de los dos momentos de inflexión en la política económica del franquismo, el cambio de dirección no fue brusco ni definitivo, ni se acometió sin obstáculos y resistencias procedentes de la burocracia del Movimiento Nacional. Fue siempre característica del ejercicio del mando por el general Franco no proceder a cambios drásticos de dirección ni marginar nunca a ninguna de las fuerzas en que se apoyaba su poder. Así, al proceder en julio de 1951 a un cambio de gobierno que anunciaba una rectificación de política, no solo no prescindió del componente fascista del régimen sino que pareció reforzar la posición de Falange al elevar de nuevo a ministerio la Secretaría General del Movimiento. Como siempre, Franco procedió distribuyendo equilibradamente el poder entre los militares, la Acción Católica, una Falange ya totalmente burocratizada y las dos ramas en que se dividía el monarquismo.

El nuevo gobierno, que estaba en su conjunto bien lejos del liberalismo político y de la economía de mercado, no volvió a incurrir sin embargo en la retórica autárquica e intervencionista. Ese simple hecho indica que sus objetivos económicos eran distintos de los que hasta entonces se habían defendido oficialmente. Lo que comenzó a dominar en el discurso oficial fue la voluntad de un crecimiento rápido apoyado preferentemente en la industria y basado, según ha escrito Joan M. Esteban, en un ideario económico que contrastaba con el anterior en cuatro puntos fundamentales: ortodoxia en la administración del sector público frente a la discrecionalidad que había caracterizado la década de 1940; necesidad de una economía abierta, con intercambios internacionales, frente al ideal autárquico de sustitución de importaciones por productos nacionales; afirmación de las ventajas del mercado libre sobre la política de control y de intervención; y confianza en la iniciativa privada frente a la anterior creencia en la eficacia del Estado como gestor de la economía.

En consonancia con ese nuevo ideario, y doblemente impulsados por el fracaso anterior y por la favorable situación internacional, varios ministerios pusieron en marcha una política económica cuyo principal objetivo consistía en un rápido crecimiento industrial sobre la base de la liberalización del comercio internacional que permitiera a las industrias españolas proveerse de materias primas y de maquinaria. En relación con este objetivo, el nombramiento de Manuel Arburúa al frente del Ministerio de Comercio fortaleció a los partidarios de la liberalización del comercio exterior frente a quienes mantenían la necesidad de reforzar la línea autárquica. Una de las características más notables del nuevo período fue precisamente el significativo avance que se produjo en las magnitudes del comercio exterior.

El cambio de gobierno afectó también a la política agraria. Rafael Cavestany, nuevo ministro de Agricultura, se había mostrado en años anteriores muy crítico con la «maraña de las restricciones, de las intervenciones, de los cupos forzosos, de los racionamientos» (Barciela, 1986) y había sido uno de los primeros en atribuir el déficit de alimentos a la política económica seguida durante los años cuarenta. Sus propuestas iban en la dirección de suprimir todo el aparato intervencionista y elevar los

precios de tasa de forma que resultaran remuneradores para los agricultores. Pretendía, además, introducir reformas técnicas que incrementaran la producción e industrializaran el campo. Otras iniciativas consistieron en impulsar los planes de colonización y repoblación forestal, extender los regadíos y concentrar las pequeñas propiedades.

Fruto de esta nueva política fue el incremento, en muy pocos años, de la superficie cultivada, de la producción y de la productividad, superando en algunos casos los niveles alcanzados en el quinquenio 1931-1935. Los niveles de 1935 se volvieron a alcanzar en azúcar, huevos y aceite, además de trigo y, por tanto, de pan, aunque todavía habrán de pasar varios años para alcanzar el nivel de consumo de carne, patatas y leguminosas. Como ha señalado Carlos Barciela (1986, vol. 3, pág. 486), «se necesitaron veinte largos años de sufrimiento para alcanzar unos niveles de alimentación que ya se habían conseguido entre 1931 y 1936». Barciela ha destacado, entre otros logros de los años cincuenta, la colonización de 200 000 hectáreas, la concentración parcelaria de otras 240 000, la puesta en riego de unas 400 000 hectáreas, repartidas por igual entre el Instituto Nacional de Colonización y los propios agricultores y, finalmente, la repoblación forestal de más de un millón de hectáreas.

La agricultura representaba todavía en 1950 una parte fundamental del PIB pero ya no la decisiva. Precisamente, uno de los cambios más significativos de la nueva década será el de la estructura del PIB con un claro descenso relativo del sector primario, que del 30% de 1950 pasó al 24% en 1960, y la subida del secundario desde el 26% al 35%. Paulatinamente, la industria se afirmaba como parte fundamental de la economía española. Si el índice de producción agrícola pasó de 100 en 1946 a un promedio de 105 en la década de 1950 —después de bajar a 90 entre 1947 y 1950—, el de la industria ascendió continua y rápidamente de 100 a 194 en 1957. Este intenso ritmo de crecimiento industrial tendrá efectos decisivos en la estructura interna del PIB y servirá de base, con su aceleración en los años sesenta, a las grandes transformaciones sociales de esa década.

Por el momento, si se añade a este crecimiento industrial la recuperación del sector agrario se comprenderá que los años cincuenta

hayan presenciado una subida sostenida de la renta nacional y de la renta per cápita, que recuperó y sobrepasó en esta década los valores alcanzados en los años treinta. Aunque las magnitudes del incremento de la renta nacional son muy variables según las fuentes y los métodos empleados, se ha estimado que el ritmo de crecimiento fue de 1,9% entre 1940 y 1950 y de 7,78% entre 1950 y 1958. De todas formas, es evidente que a partir de 1950 el ritmo de crecimiento de la economía española se sitúa en unas magnitudes que reducen paulatinamente la gran diferencia abierta por la política autárquica con otros países europeos.

En este crecimiento desempeñaron las importaciones un papel primordial. La incipiente liberalización del comercio exterior provocó un considerable aumento de la demanda de productos extranjeros entre los que ocuparán un lugar cada vez más importante los carburantes, las materias primas y semifabricadas, las manufacturas y el material de transporte. Simultáneamente se produjo un descenso notable en la importación de artículos alimenticios. Ahora bien, mientras las importaciones aumentaron de 427 millones de dólares en 1951 a 862 en 1957, las exportaciones que en 1951 ascendieron a 498 millones de dólares, no pasaron nunca de los 500 e incluso hubo algunos años en que descendieron a menos de 450 millones de dólares. Comenzó a producirse así un notable desequilibrio en la balanza comercial con un creciente saldo negativo que en 1957 llegó a superar los mil millones de pesetas/oro.

Se ha discutido en este contexto la importancia de la «ayuda americana» en la revitalización de la economía española. Aunque el volumen total de la ayuda recibida fuera modesto en comparación con el de otros países europeos —alrededor de 1500 millones de dólares en concepto de donación o préstamo— parece, sin embargo, que sus efectos fueron considerables al incidir en una economía con muy bajo nivel de actividad y atenazada por múltiples estrangulamientos. Evidentemente, al movilizar esa actividad permitiendo un considerable incremento de las importaciones, la «ayuda americana» y los créditos anteriores desempeñaron un considerable papel en la reanimación de la actividad, que pretenderá culminar el proceso de liberalización iniciado en 1951 aunque adoptando previamente un programa de estabilización y saneamiento económico.

2.6. POLÍTICA DE GÉNERO

Ya desde los años del conflicto, la «recatolización» de la sociedad, considerada fundamental para la «regeneración nacional», se presentaba como instauración de un orden antimoderno. Como consecuencia, la condena de la República iba acompañada de su estigmatización por haber generado la pérdida de los valores morales. Este tema recurrente en la propaganda antirrepublicana fue explicitado en la pastoral *La Cuaresma de España. El sentido cristiano español de la guerra* (1937), publicada por el cardenal primado Gomá durante la Guerra Civil. En el escrito la interpretación de la guerra como «enmienda» y «penitencia» por las matanzas de sacerdotes y los sacrilegios, se extiende también a los daños causados por el «laicismo» republicano, la «inmoralidad pública» y el «desquiciamiento» de las costumbres, causas manifiestas de la disgregación de la familia. Esta lectura de la experiencia republicana se mantuvo inalterada durante años. En este contexto, la redefinición de las relaciones de género y, por lo tanto, de la identidad femenina, se convirtió en una preocupación fundamental en las primeras teorizaciones sobre el «nuevo orden» y en las primeras disposiciones.

La asimetría de género, presentada como un rasgo constitutivo del «Nuevo Estado», fue defendida desde 1937 por José Pemartín, entonces responsable del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media, en su obra *Qué es «Lo nuevo»...* Este libro, del que se publicaron varias ediciones, contribuyó a la configuración de la dictadura franquista y es un ejemplo de correspondencia entre la formulación de una ideología y su traducción en las leyes. En él se perfila un régimen católico-fascista, una compenetración muy bien reflejada en el proyecto de educación de los jóvenes. Aun dedicando mucha atención a las instituciones nazis y fascistas (en el apéndice incluye la *Carta del Lavoro* y la Ley para el Régimen del Trabajo Nacional Alemán de 1934), Pemartín sugiere para España un fascismo capaz de recuperar el catolicismo español «nacional» y «el espíritu religioso forjado y amasado calladamente en nuestros hogares por

generaciones de madres» (Pemartín, 1938, pág. 114). El «hogar cristiano» se convierte en un espacio simbólico y real, donde las mujeres, vestales de la conservación de la espiritualidad hispánica, actúan como educadoras. A la escuela, vehículo de la «tradición del alma de la Nación-Estado», se le asigna la función de formar a las jóvenes para sus tareas específicas, apartándolas de la «pedantería feminista de bachilleras y universitarias». A este respecto, señala la necesidad de introducir en el bachillerato «los estudios Femeninos y del Hogar». Objetivo este que se cumpliría con la creación de las «Escuelas del Hogar» y la obligación de la asignatura «Hogar» en todos los centros docentes, ambas encomendadas a la Sección Femenina de Falange. En cambio, para los jóvenes, Pemartín propone, dentro de una «catolización progresiva y total de la enseñanza oficial», el modelo del «ascetismo militar», considerado elemento identificador de la historia de España desde Ignacio de Loyola hasta «nuestros invencibles legionarios». Y, precisamente, la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de septiembre de 1938 promueve un sistema docente destinado a la difusión de «aquellas virtudes de los grandes capitanes y políticos del Siglo de Oro, formados en la Teología católica de Trento», en contraposición al «mimetismo extranjerizante, la rusofilia y el afeminamiento». La Falange, a su vez, se encargaría de inculcar el patriotismo, la camaradería, el sentido de la jerarquía y de la disciplina, y los principios del nacionalsindicalismo, todos ellos explicitados en los textos escolares de «Formación del Espíritu Nacional» que se utilizaron hasta los años sesenta.

De hecho, el encuadramiento de los jóvenes era prerrogativa de las organizaciones falangistas: el Frente de Juventudes y la Sección Femenina de Falange. Ambas compartían la estructura jerárquica y se caracterizaban por una rígida división de género; fomentaban los principios del nacionalsindicalismo, el patriotismo y el conformismo con el Estado franquista, pero siempre en el ámbito del tradicionalismo católico. Para las mujeres estaba prevista una forma de reclutamiento mediante el Servicio Social. Creado durante la guerra y reorganizado en 1940, se concebía como «servicio al Estado» destinado «a preparar a la mujer como futura madre de familia» y a la promoción de actividades asistenciales y de beneficencia. El Servicio Social duraba seis meses y era obligatorio, pudiendo librarse de él

las mujeres casadas, viudas, monjas y las jóvenes con ocho hermanos solteros. El correspondiente certificado era indispensable para conseguir un empleo en la Administración pública, el pasaporte, el carné de conducir y cualquier tipo de diploma. Su gestión fue encomendada a la Sección Femenina, instituida en 1934 bajo los auspicios de José Antonio Primo de Rivera, que tuvo un fuerte desarrollo durante la Guerra Civil. En el Estatuto de 1937 se definía como apéndice de la Falange —«a cuya disciplina nace irrevocablemente sometida»— con la función de promover un modelo femenino tradicional: «El fin esencial de la mujer, en su función humana, es servir de perfecto complemento al hombre». Relanzada por Franco mediante decreto de diciembre de 1939, su presidenta vitalicia fue Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio.

Para las mujeres, la diferencia de género se tradujo en marginación y subordinación al hombre. La enseñanza fue un instrumento fundamental para limitar su protagonismo a la esfera doméstica, borrando toda huella de la experiencia emancipadora republicana. La República de 1931 había impulsado la participación femenina en la vida pública y política, que se materializó en la presencia de diputadas en las Cortes y en el acceso de mujeres a ámbitos profesionales y culturales tradicionalmente masculinos. Pero, si en los años de la Guerra Civil el anacronismo del modelo femenino propugnado por los «nacionales» podía parecer una exageración propagandística destinada a construir una identidad fundada en la contraposición —que comprendía el rechazo de actitudes consideradas varoniles encarnadas por «la miliciana»—, su mantenimiento incluso después de terminar la guerra se transformó en un rasgo identificador del Nuevo Estado franquista.

La marginación de la mujer fue legitimada también por la actualización de un orden simbólico-cultural fundado en ejemplos recuperados de la tradición católica —el Génesis, el Libro de los Proverbios y los Padres de la Iglesia— filtrados por los tratados del siglo XVI y a menudo acompañados de biologismos e innatismos de procedencia decimonónica. Se publicaron muchas reediciones de *La perfecta casada* de fray Luis de León (1583), compendio de deberes y tareas de la «mujer parsimoniosa» dedicada a la

«sagrada misión» del hogar y al trabajo silencioso. El libro se puso de moda como regalo de bodas.

La familia se consideró como un importante pilar del Nuevo Estado, y la mujer, devuelta a la «naturalidad» de la maternidad, se convertía en ejemplo de entrega, conformismo y respeto por la jerarquía. Los modelos evocados en los discursos de Franco, en las revistas católicas y de Falange y en los textos escolares eran los de Teresa de Ávila, declarada patrona de la Sección Femenina por su obrar «de una manera callada», e Isabel de Castilla, ambas portadoras de un protagonismo patriótico-religioso y a la vez «femenino», muy evidente en la abundante iconografía que representaba a la santa y a la reina ocupadas «en los trabajos de la rueca y el huso». Una característica del nacionalcatolicismo fue, precisamente, la utilización y adaptación de santos y santas con una función legitimadora del régimen y como «ejemplaridad total» para hombres y mujeres.

En los primeros años de la posguerra se publicaron numerosos manuales dirigidos a la «formación» femenina y, en cantidad más reducida, a la masculina. Sus autores eran religiosos, médicos, políticos, pedagogos, y también mujeres de la Sección Femenina y de Acción Católica, todos ellos empeñados en identificar la «esencia de lo femenino» y los atributos necesarios para su realización. En realidad, los manuales de formación, cuyos contenidos no sufrieron cambios sustanciales hasta finales de los años cincuenta, no hacían más que traducir en modelos de comportamiento las normas contenidas en la legislación y las consignas presentes en los reglamentos de las organizaciones juveniles, en las pastorales y en los discursos de Franco, transformándose en portavoces de una tendencia y de un sistema de valores y de representaciones que iba homologando a toda la sociedad. Precisamente en esta «acción prescriptiva» —que para las mujeres penetraba incluso en el ámbito doméstico— se hacía evidente el papel de control generalizado ejercido por la Iglesia.

A su vez lo masculino se presentaba como diferencia visible en la historia, en la cual el hombre era un sujeto activo que tenía como referencia la construcción mítica del «caballero cristiano y español» evocadora del pasado imperial (Cámara Villar, 1994). Lo varonil caracterizaba no solo «la misión» patriótico-religiosa sino también la vida matrimonial, en la que el

hombre debía actuar como «protector y jefe». La fragilidad femenina, pues, constituía la asimetría necesaria a la «virilidad psíquica» masculina, según explicaban, entre los años cuarenta y cincuenta, los manuales publicados por el «autor colectivo», que firmaba con el seudónimo «Ángel del Hogar».

Para las afiliadas de la Sección Femenina estaban vigentes las directrices del desaparecido José Antonio, elegido como defensor del auténtico feminismo: «El verdadero feminismo no debería consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social las funciones femeninas». Una definición esta a la vez dicotómica y complementaria a la del «monje soldado», pero ambas en sintonía con las orientaciones del tradicionalismo católico.

En realidad, la remodelación de la identidad femenina no respondía solo a la necesidad de restaurar un antiguo orden simbólico contra la modernidad republicana, sino también a un conjunto de exigencias políticas, sociales y económicas. En la España de la «larga posguerra» había que ofrecer un sistema de valores ideales que compensase el escenario dominado por el racionamiento, el paro, la plaga del estraperlo, las cárceles repletas de detenidos políticos, la gran cantidad de mutilados de guerra y los mendigos que invadían las calles, y que tan eficazmente retrató Gerald Brenan —viajero en la España de 1949— en su libro *La faz de España*. Además, la autarquía producía escasa demanda de bienes de consumo y el mercado de trabajo poco dinámico no favorecía el empleo. Con el fin de evitar elevados índices de paro masculino, se limitó el acceso de las mujeres o se las orientó hacia sectores «femeninos» (servicios, fábricas textiles, de calzado y de tabaco).

Si la propaganda a favor del crecimiento demográfico se enriquecía con caracteres religiosos y sublimadores, el trabajo femenino estaba regulado por «medidas protectoras» —exclusión de las mujeres de tareas peligrosas e insalubres y del trabajo nocturno—, pero al mismo tiempo se trataba de desincentivarlo en formas y ámbitos distintos. La imposibilidad de alcanzar una formación profesional adecuada, la exclusión de ciertas actividades, la «excedencia forzosa» por matrimonio y la fuerte discriminación salarial eran solo algunos de los mecanismos disuasorios utilizados por el régimen.

A estos obstáculos había que añadir las leyes destinadas a garantizar la «tutela marital»: la necesidad de autorización del marido para firmar contratos de trabajo, prestar testimonio en los juicios, heredar, ejercer actividades comerciales y administrar su propio sueldo. Paralelamente los manuales, las revistas religiosas y las publicaciones de la Sección Femenina advertían contra el peligro de «masculinización» de las mujeres trabajadoras y condenaban la atracción por lo superfluo generado por el «vivir moderno» impulsando a la mujer a buscar trabajo. En aquellos años, el *ahorro* no era solo el sistema de «reintegración nacional», encarnado por las «cartillas de ahorro», que ya mencionara Pemartín en su libro; para los españoles se había convertido en una categoría moral basada en la abstinencia y en la privación, que afectaba a toda su existencia. Los términos «restricción» y «racionamiento», recuerda la escritora Carmen Martín Gaité en *Usos amorosos de la postguerra española* (1987), «sufrieron un desplazamiento semántico, pasando a abonar otros campos, como el de la relación entre hombres y mujeres» (pág. 13).

La identidad masculina, al igual que la femenina, se definía mediante «caracteres permanentes» y predisposiciones innatas, como el espíritu de independencia y de dominio, el sentido práctico y la tendencia al análisis. Estos atributos, acompañados por la recuperación de virtudes tradicionales como el honor, la caballeridad y el valor, se hacían necesarios para garantizar la continuidad con el «espíritu de la Cruzada». En esta labor de formación, el maestro de escuela desempeñaba un papel fundamental. Su perfil lo trazó Ernesto Giménez Caballero en *Los secretos de la Falange*: «Lograr que el maestro de escuela, ese vehículo laico y corrompido que era en los regímenes anteriores... se transformase mágicamente en un ser soleado, esbelto, fuerte, audaz, encuadrado, abnegado, disciplinado, a paso gimnástico, saludando brazo en alto, cantando himnos de combate...» (Giménez Caballero, 1939, pág. 92). Estas directrices perduraron también en los años siguientes.

A partir de los años cuarenta se empezó a difundir una retahíla de prohibiciones y normas en defensa de la «moralidad pública». Como consecuencia, los lugares que podían favorecer el encuentro entre hombres y mujeres pasaron a ser fuente de preocupación. Eran estigmatizados los

cines, las salas de baile y las playas como espacios donde se concentraban los «males modernos». En la Iglesia afloraba cierto antiamericanismo, por considerar al cine de Hollywood un cauce de *desmoralización*, de prácticas exóticas y de *desfeminización*. La llegada del verano dirigía la atención hacia las playas y la preocupación llegaba al paroxismo. En 1941, la Dirección General de Seguridad prohibía «los baños de sol sin albornoz» (Abella, 1985, pág. 78).

No menos dura era la condena del baile. La pastoral de 1946 del cardenal Segura, arzobispo de Sevilla conocido por su intransigencia, contenía una lista de ejemplos, descritos con el lenguaje propio de la patología. Los bailes modernos se definen como «fiebre infecciosa» y «verdadero paludismo de las almas» y se amenazan castigos. Y mientras en la Europa recién salida de la Segunda Guerra Mundial las parejas se lanzaban a frenéticos *swing*, *boogie-woogie* y congas, en España el baile era el blanco de una campaña denigradora, difundida desde los pulpitos a través de pastorales, revistas y opúsculos. Todavía en 1957, en el documento *La instrucción sobre la moralidad pública*, los obispos españoles definían los bailes modernos como «feria predilecta de Satanás».

Otra fuente de alarma eran el deporte y la gimnasia, de cuya gestión se hacía cargo la Sección Femenina. El juicio negativo de Pío XII sobre el deporte femenino, en 1941, en su *Discorso alla Gioventù femminile dell' Azione cattolica*, por favorecer «fogge di vestire, esibizioni, “cameratismi”, inconciliabili anche con la modestia più condiscendente», tuvo una fuerte repercusión en España. Las falangistas solucionaron el problema del atuendo deportivo con los incómodos «pololos», unos pantalones anchos, cerrados bajo las rodillas por una goma. El «vestir cristiano», en cambio, era regulado por las *Normas concretas de modestia femenina*. Se consideraban «contra la modestia» los escotes, los vestidos ceñidos o que llegaban solo hasta la rodilla, las mangas que dejaban los codos al descubierto o el no llevar medias.

Los cambios producidos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial en materia de costumbres y de la condición femenina, no solo no tuvieron reflejo alguno en España sino que incluso contribuyeron a reforzar la campaña contra los «errores de la modernidad».

Para la jerarquía eclesiástica las playas siguieron representando una amenaza, especialmente cuando en los años sesenta el turismo impulsó cierta liberalización de las costumbres. *El turismo y las playas, las divisas y los escándalos* (1964) es el título de la carta pastoral del obispo de Canarias Antonio Pildain escrita tras su regreso —como él mismo afirma— de la segunda etapa del Concilio Vaticano II. Reivindicando para los obispos el derecho a intervenir en temas relacionados con la moral —según las indicaciones de Pío XII— el prelado dirige su «contraofensiva potente» hacia los «turistas indecentes» que frecuentaban las playas de Canarias que describe como escenario de perdición y «espectáculo, denigrante y escandalizador de hombres casi totalmente desnudos, y de mujeres en bikini, tumbadas o sentadas, junto a ellos, y ostentando sus desnudeces, más que de cara al mar, de cara al paseo», y «adolescentes que se abrasan en las llamaradas del instinto sexual». La pastoral refleja el desajuste entre la imposición de un anacrónico orden moral y la contaminación moderna de España por Europa.

En realidad, a finales de los años cincuenta el crecimiento económico, el desarrollo del turismo y de los medios de comunicación favorecían la difusión de pautas emancipadoras, profundizando en la separación entre las normas y los comportamientos sociales. La Sección Femenina quiso hacerse intérprete de una semblanza de modernización presentando la Ley sobre Derechos de la Mujer, aprobada en julio de 1961. En ella se reconocían a la mujer los mismos derechos que al hombre, además de la facultad de ejercer cualquier actividad de tipo político, profesional y laboral, salvo la de magistrado o juez (con la excepción de la tutela de menores). Sin embargo, en el preámbulo se subrayaban las limitaciones impuestas por la «condición femenina» y, por lo tanto, se reafirmaba la necesidad de la autorización del marido para que una mujer casada pudiera trabajar o ejercer el comercio. En realidad, solo en 1976, con la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales, se reconocieron los derechos de las trabajadoras.

La modernización económica que se puso en marcha sin avances similares en los ámbitos culturales, sociales y jurídicos, hizo manifesta una de sus más vistosas contradicciones precisamente en la resistencia a

desprenderse de los modelos tradicionales dejando inalterado un orden simbólico fundado en la asimetría de género.

RESUMIENDO...

La institucionalización del Estado dictatorial tiene lugar en condiciones de extrema pobreza y aislamiento. Tras la derrota del Eje, se pone en marcha un proceso de *desfascistización* y se inaugura la fórmula de la «democracia orgánica». El cambio de imagen requiere una reorganización del gobierno, con el ascenso de los «católicos», en tanto que la ideología nacionalcatólica se impone como instrumento para moldear la sociedad en sentido antimodernizador.

El régimen supera gradualmente el aislamiento internacional gracias a las dinámicas generadas por la Guerra Fría, mientras una fuerte represión silencia el movimiento de oposición interna que había resurgido bajo el impulso de la victoria aliada. En 1956, con Ruiz-Giménez como ministro de Educación, se produce la primera movilización estudiantil en la Universidad de Madrid, con el objetivo de oponerse al monopolio del SEU.

El fracaso de la política económica autárquica conduce a la lenta introducción de reformas destinadas a la liberalización del comercio exterior, a la promoción de la industria y a la recuperación del sector agrícola. Sin embargo, después de un período de crecimiento, la economía entra en crisis en la segunda mitad de los años cincuenta, debido también a las presiones inflacionistas.

ESTADO AUTORITARIO Y CAMBIO SOCIAL (1957-1969)

3.1. REFORMAS ADMINISTRATIVAS Y FIN DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN

LA MEZCLA DE ASTUCIA, FRIALDAD y desapasionamiento, la absoluta falta de doctrinarismo permitió a Franco y a su régimen, a base de aguante y paciencia, nadar en aguas internacionales hasta que las democracias occidentales, sobre todo Estados Unidos, olvidaran su alianza con el nazismo y los incorporaran a su sistema estratégico. Sin enemigos dentro y, a partir de los primeros años cincuenta, con un poderoso aliado fuera, Franco no tenía más que no oponer excesivos obstáculos para que se dejaran sentir los efectos de la expansiva coyuntura internacional en España. Tardó largos años en permitir que la economía se abriera y en aprobar los planes de estabilización y liberalización económica, pero de tiempo era precisamente de lo que andaba sobrado una vez superada la prueba de 1945. A partir del ingreso de España en los organismos internacionales, el tiempo, que Franco había pretendido detener en 1940, comenzó a trabajar a su favor.

Lo hizo con la desesperante lentitud que fue siempre una norma de su acción política. El nuevo gobierno de 1951 había introducido los primeros cambios de política económica, que no acabarían de rematarse hasta ocho años después, en 1959. Mientras tanto, había llegado al poder una nueva élite de altos burócratas con un proyecto de racionalizar la Administración del Estado y liberalizar la economía. La circunstancia de su ascenso es muy elocuente: en febrero de 1956 se produjo la primera movilización de nuevas

generaciones de universitarios que no habían hecho la guerra pero que habían sido sus niños, sobre todo en el lado de los vencedores. Los estudiantes acabaron de hecho con el sindicato universitario de Falange, liquidaron la reciente historia de la universidad sometida y silenciosa, y pusieron en evidencia, con el fulminante y simultáneo despido de los ministros de Educación y del secretario general del Movimiento, el declive de la fórmula de gobierno vigente hasta entonces: una mezcla de ministros procedentes de las Fuerzas Armadas, del Movimiento y de Acción Católica.

Fue también 1956 el año en que hizo su aparición un nuevo movimiento obrero, cortado ya de sus raíces históricas, de sus tradiciones socialista y anarquista, que buscaba otras formas de organización, actuando en los resquicios que dejaba abiertos la Organización Sindical: eran las llamadas «comisiones obreras», muy plurales en su origen, pero muy pronto dirigidas por militantes del clandestino Partido Comunista. Por otra parte, España acababa de ser aceptada en las Naciones Unidas, y los americanos, que habían firmado tres años antes un pacto con el Estado español, comenzaban a impacientarse porque nadie parecía capaz de poner algo de orden en la política económica: el ministro de Trabajo, José Antonio Girón, había promovido un aumento salarial de hasta el 25% que lanzó de nuevo por los aires la imparable carrera inflacionista.

Fue esa la circunstancia en la que emergió la nueva élite de poder. No procedía de las grandes burocracias nacionales fundadoras del Nuevo Estado, no eran militares, tampoco fascistas ni «católicos oficiales». Venían de altos cuerpos de la Administración y desde 1957 fueron ocupando ministerios hasta conseguir lo que se llamó gobierno «homogéneo» de 1969 y hasta que fueron inopinadamente expulsados del poder tras el asesinato de Carrero Blanco, su más firme valedor, cuatro años después, en diciembre de 1973. Una nota los define: eran miembros del Opus Dei. Sin duda, los responsables del instituto religioso siempre han negado que el hecho de pertenecer a esa sociedad tuviera la más mínima relevancia política; siempre han afirmado que los miembros del Opus Dei gozaban de autonomía para todos los asuntos temporales y que, en política como en los negocios, actuaban a título individual sin comprometer para nada a la organización. Lo mismo repetían también la Asociación Católica Nacional

de Propagandistas y la Acción Católica Española. Pero en un sistema como el franquista, en el que el personal político era escogido y designado desde el poder, los ámbitos de socialización de quienes están en el sitio adecuado y en el momento oportuno para recibir la llamada de lo alto, nunca son irrelevantes: ni la ACNP, ni la AC, ni el Opus Dei han sido nunca partidos políticos sino viveros en los que se cultivaban las «minorías selectas» de las que luego se seleccionaba a individuos particularmente adecuados para ocupar los despachos ministeriales y los altos cargo de la Administración del Estado.

Por supuesto, la dependencia jerárquica de Acción Católica respecto al episcopado había dado a los nombramientos de los «católicos oficiales» en 1945 un significado mucho más «católico», una implicación formal de la Iglesia mucho más acusada, que los nombramientos de ministros del Opus Dei a partir de 1957, que no actuaban como emisarios de los obispos ni para desarrollar una política «católica». En cualquier caso, el hecho es que los responsables de la Administración del Estado, de la política económica y de los planes de desarrollo fueron, desde 1957 hasta 1973, miembros del Opus Dei y pusieron manos a la obra para introducir nuevas políticas con muy precisos objetivos. Como su fuente de legitimidad radicó en un saber técnico-jurídico y en una eficacia económica, fueron llamados «tecnócratas» y con tal denominación han pasado a la historia: su auge y declive llenan los quince últimos años del régimen franquista.

En 1957, los desequilibrios y estrangulamientos provocados por la coexistencia de la vieja inercia autárquica con las medidas liberalizadoras tomadas desde 1951 habían llevado a la economía española a una situación de bancarrota: no había divisas para hacer frente al pago de las importaciones. Agotamiento de reservas, déficit de la balanza de pagos, aumentos salariales pronto superados por una galopante inflación, protestas estudiantiles, malestar social evidenciado en las huelgas de Madrid, Asturias y Barcelona: todo se alió para provocar una crisis de gobierno en febrero de 1957, que en realidad cerraba la abierta en febrero del año anterior. Su solución llevó por vez primera a importantes ministerios económicos a dos miembros del Opus Dei, Alberto Ullastres (Comercio) y Mariano Navarro (Hacienda). Laureano López Rodó, prominente figura de

ese mismo instituto religioso, se había hecho cargo unos meses antes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia, bajo la titularidad del almirante Carrero Blanco, verdadero hombre fuerte del régimen. Se trataba, pues, de la llegada de una nueva élite de poder a los centros de decisión política y económica, con un objetivo muy preciso: proceder a una reforma de la Administración que sirviera de base a un desarrollo económico sin que tales medidas afectaran a los fundamentos políticos del régimen.

Y en efecto, la llegada de estos «tecnócratas» al gobierno puso en marcha casi de inmediato una amplia reforma administrativa. A partir de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957, y de las siguientes leyes de Procedimiento Administrativo, de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, de Funcionarios Civiles del Estado, y de Retribuciones de Funcionarios, se produjo una renovación de la Administración pública, llevada a cabo con criterios de eficiencia y racionalización de la actividad administrativa. La nueva élite pretendía reducir el margen de actuación discrecional de las autoridades públicas gracias a una panoplia de leyes de reconocida calidad técnica.

Resultado inmediato de esta racionalización burocrática fue que el gasto público no dejó de crecer y diversificarse: de unas magnitudes situadas en torno al 10% de la renta nacional en la década de 1950, el gasto de las administraciones públicas había subido a más del 20% en 1975. Tan importante como este crecimiento fue el cambio estructural del gasto, con una drástica inversión de los porcentajes destinados a Defensa y a Fomento, que marca el paso de un Estado vigilante a un incipiente Estado interventor y de bienestar. Este cambio estructural quedó reflejado en el crecimiento de los sectores relacionados con la actividad económica y los servicios públicos: se incrementaron las inversiones en infraestructuras; las universidades públicas, que acogían a 76 500 alumnos en el curso 1960-1961, pasaron a admitir 205 600 en 1970-1971, mientras se generalizaba la enseñanza primaria y la Seguridad Social extendía el número de sus beneficiarios a cerca del 80% de la población.

Crecimiento y diferenciación del gasto no habrían sido posibles sin un proceso de burocratización y racionalización de la función pública. Si en los

primeros años de la dictadura la ocupación de posiciones de altos cargos se verificaba por reparto entre militares, falangistas y católicos, a partir de la reforma de la Administración, el aumento de funcionarios y la objetividad de las pruebas de acceso estrecharon las bases institucionales de poder de las grandes burocracias fundadoras del régimen. Así, la expansión de la enseñanza pública y su control por funcionarios de los cuerpos docentes hizo perder a la Iglesia el casi monopolio de la educación y del control sobre la cultura y la moral popular. Por otra parte, los nuevos servicios sociales y la inversión en infraestructura redujeron la proporción de recursos presupuestarios destinados a las Fuerzas Armadas, que se retiraron de áreas de poder e influencia ejercidas desde la Guerra Civil. Aunque conservaba su derecho de veto, el prestigio del Ejército en la sociedad estaba lejos de ser lo que había sido durante la primera etapa de la dictadura. En fin, las organizaciones de Falange o del Movimiento habían dejado de ser operativas, incapaces de controlar a los estudiantes o de disciplinar a la clase obrera.

Una vez consumada la reforma de la Administración, los ministros del Opus Dei emprendieron la siempre pendiente tarea de culminar la institucionalización del Estado por medio de una ley que hiciera las veces de Constitución y presionaron al jefe del Estado para que designara en vida a su sucesor a título de rey. Nadie, hasta ese momento, había sido capaz de inmutar la impasibilidad de Franco ante esas dos demandas, tan viejas como el mismo régimen. A la nueva élite, sin embargo, le sonrió el éxito en ambas iniciativas. En la primera, con la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, que modificaba algunos artículos de las anteriores leyes fundamentales, suprimiendo léxico fascista y teología católica, y regulaba las funciones y atribuciones de los distintos órganos del Estado y sus relaciones mutuas. Franco la presentó a las Cortes afirmando que entrañaba una amplia democratización del proceso político y poniendo en guardia a los españoles contra sus «demonios familiares».

En realidad, definir como democratización el proceso regulado por aquella ley no pasaba de ser irónico. Franco la promulgó en virtud de la facultad legislativa que le conferían las leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, ratificadas por la nueva ley. El Estado español,

constituido en Reino, no se definía ya como monarquía católica, social y representativa, sino como «suprema institución de la comunidad nacional», pero los Principios del Movimiento que desde su fundación inspiraban al régimen mantenían en 1967 su condición «permanente e inalterable». En consecuencia, los partidos políticos continuaron prohibidos y su existencia constituía un delito tipificado en el código penal; los derechos de asociación y reunión no podían ejercerse sino en asociaciones pertenecientes al Movimiento; los responsables de convocatorias de huelgas eran juzgados por un Tribunal de Orden Público que podía imponerles penas de largos años de prisión; la libertad de expresión quedaba constreñida por una ley de prensa cuya aplicación dio lugar a multas, persecuciones y cierres de periódicos.

La segunda novedad institucional, a los treinta años exactos de terminada la Guerra Civil, fue la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey, aprobada por las Cortes el 22 de julio de 1969. Todo el mundo estaba de acuerdo en que la Ley de Sucesión, de 26 de julio de 1947, no iba a acercar ni una hora el momento de la restauración monárquica, dejada al completo arbitrio de Franco. Pocos esperaban ya que Franco designara en vida un sucesor. Sin embargo, la tenacidad de López Rodó y la insistencia de Carrero Blanco, artífices de la llamada «Operación Príncipe», produjeron el siempre aplazado evento, con la sorpresa y la indignación del jefe de la Casa Real, Juan de Borbón, hijo del que fuera rey Alfonso XIII y titular de los derechos a la corona. Franco, sin embargo, designó a su hijo, Juan Carlos, que de niño había venido a España enviado por su padre para recibir una educación conveniente. Además de padre e hijo aspiraban también a la corona un miembro de la rama carlista, Carlos Hugo de Borbón Parma, y no perdía las esperanzas un primo de Juan Carlos, Alfonso de Borbón Dampierre, que contraería matrimonio con la nieta mayor de Franco.

Con más de un pretendiente a la corona y con los monárquicos divididos, la iniciativa quedó siempre en manos de Franco, lo que entrañó una doble consecuencia. Por un lado, al reservarse el derecho a elegir a su sucesor, Franco arrasaba los restos de legitimidad dinástica que cualquiera de ellos pudiera todavía esgrimir: la monarquía, como escribían todos en

aquellos años, sería la suya, la de Franco, la del 18 de julio. Por otro lado, al mantener la incertidumbre sobre el momento y la persona de su elección, Franco obligaba a todos los pretendientes a reiterar una y otra vez su fidelidad a los principios del Movimiento. Así las cosas, la disposición del príncipe Juan Carlos de Borbón para que sobre él recayera la elección de Franco, si le garantizaba la fidelidad de las Fuerzas Armadas y de la clase política del régimen, podía valerle la desautorización de su padre. Por tanto, en la «Operación Príncipe» no hubo más estrategia que la de Franco y, en el escaso terreno que quedaba a su propio juego, la del mismo príncipe Juan Carlos. Cuando finalmente el príncipe aceptó, percibió en el rostro impenetrable de Franco el esbozo de una sonrisa. Con ella terminaba una larga batalla para garantizar la instauración de una monarquía autoritaria, no la que había soñado Acción Española, ni la que había propugnado la ACNP, tradicional y católica, sino la que habían ideado los políticos del Opus Dei para garantizar la continuidad de las instituciones consagradas en la Ley Orgánica del Estado: una monarquía heredera de una dictadura, al abrigo de cualquier veleidad de transformarse en una democracia liberal y parlamentaria.

3.2. LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA

La reforma administrativa, la culminación del proceso institucional y la designación de un sucesor a título de rey no fueron más que una parte de la tarea que el gobierno nombrado en febrero de 1957 se dispuso acometer. La otra tuvo como objetivo un plan de estabilización y liberalización de la economía que pusiera las bases para un rápido desarrollo económico. Era este el momento de la firma del Tratado de Roma que creaba el Mercado Común Europeo y del plan de estabilización francés. Los ministros económicos del gobierno, bien relacionados con los medios financieros internacionales, se dispusieron a seguir las recomendaciones de los informes de la OCDE y del Banco Mundial en el sentido de que, antes de proceder a un plan de relanzamiento económico, era preciso adoptar medidas de saneamiento.

Las primeras medidas económicas tomadas por el nuevo gobierno constituyeron los preliminares de lo que sería el Decreto ley de Ordenación Económica aprobado el 21 de julio de 1959, más conocido como Plan de Estabilización. Ante todo, se aprobó una reforma fiscal que tendía a incrementar los ingresos de Hacienda por medio de una ampliación de las bases imponibles con nuevos procedimientos de evaluación de los impuestos indirectos. La reforma pretendía equilibrar el presupuesto con objeto de atacar la tradicional fuente de inflación derivada del recurso al Banco de España para salvar el déficit público. El incremento de los ingresos del Estado pasó de 13% anual al 26% y desde 1958 pudo prescindirse de la emisión de deuda, aunque hubo que seguir recurriendo a créditos del Banco de España para financiar al Instituto Nacional de Industria.

A la par que se equilibraba el presupuesto se emprendía el camino de la liberalización económica. En tal dirección, se suprimieron las Comisarías de Recursos establecidas en 1942 y se concedió libertad de comercio a determinados productos, aunque todavía no se abordó en su totalidad la tarea de desmontar el aparato intervencionista heredado de la anterior Administración. Con el propósito de liberalizar en lo posible el mercado de trabajo, una de las medidas más decisivas de política laboral fue la Ley de Convenios Colectivos de abril de 1958 que reestructuró el marco de la negociación salarial, rompiendo con la reglamentación anterior y dando entrada a la Organización Sindical en la discusión de convenios colectivos de ámbito local, provincial o interprovincial.

Más decisivo para la formulación de la nueva política fue el proceso de integración en los organismos económicos y financieros internacionales. En enero de 1958, España se asoció a la OCDE y en julio del mismo año quedó adherida al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Una misión del FMI discutió con los técnicos de los ministerios de Hacienda y Comercio y del Servicio de Estudios del Banco de España la necesidad de reformas económicas sustanciales, para las que España pudo contar con financiación procedente de estos organismos, directamente o como mediadores de préstamos realizados por los Estados miembros. De tales discusiones, mantenidas en febrero de 1959,

salió el primer proyecto de plan de estabilización que era en realidad «un conjunto de acciones sobre la estructura económica, puesto que englobaba la liberación comercial exterior y otras medidas internas para sentar sobre bases más flexibles a la economía española» (Sardá, 1970, pág. 472).

Todas esas medidas, aprobadas por decreto ley entre julio y agosto de 1959, iban encaminadas a alinear la economía española con los países del mundo occidental y liberarla de intervenciones heredadas del pasado: tanto o más que un plan de estabilización, fue un plan de liberalización. De las medidas estabilizadoras, destacaron los aumentos de algunos impuestos, el mantenimiento del gasto público dentro de un límite máximo de 80 000 millones, el límite de 11 000 millones al crecimiento del crédito bancario y, sobre todo, la eliminación de la pignoración automática de la deuda pública. Se dotaba además de flexibilidad a los tipos de descuento e interés del Banco de España para que pudiera servir como instrumento de la política monetaria.

De las medidas liberalizadoras, destacaron las relativas al comercio exterior y la modificación sustancial de la legislación sobre inversiones extranjeras en España. A partir de entonces, y excepto en los campos relacionados con defensa, información y servicios públicos, el capital extranjero pudo participar hasta del 50% del capital de cualquier sociedad con la posibilidad de ampliar su participación incluso a la totalidad. Esta medida tendrá consecuencias decisivas para la internacionalización del capital en actividades industriales tan relevantes como la siderurgia, la alimentación, la química y la electrónica. El gobierno fijó una nueva paridad de la peseta en relación con el dólar, que pasó de las 42 oficiales a 60, cambio más realista que tendía a favorecer las exportaciones y limitar las importaciones con objeto de aliviar la balanza comercial. En fin, se procedió a flexibilizar el mercado interior, con la liberación de precios y la disminución de controles que obstaculizaban los aumentos de productividad. Asimismo, el gobierno recomendó que los futuros aumentos de salarios se vinculasen a incrementos de productividad con objeto de frenar sus posibles efectos inflacionistas.

Con el Plan de Estabilización y Liberalización se clausuró el período de política económica autárquica ya parcialmente desechada desde 1951.

Corregido el déficit crónico, saneada la posición del Instituto de Moneda Extranjera, en solo dos años el Producto Nacional Bruto pasó de un crecimiento negativo de -0,5 en 1960 al positivo 7% en 1962, mientras que las reservas internacionales brutas ascendían de 199 millones de dólares a 1045 en el mismo período: el fantasma de la suspensión internacional de pagos se alejó definitivamente. Mientras tanto, en el interior los precios se estabilizaron en 1960 y la política deflacionista del plan no tuvo efectos desastrosos sobre el empleo debido a que la simultánea expansión europea reclamaba mano de obra y quienes en España se hubieran visto abocados al paro pudieron encontrar trabajo en Francia o Alemania.

En 1962 parecía, en efecto, que la economía española podía franquear la puerta hacia un crecimiento de ritmo intenso y sostenido. Así lo entendieron también los organismos internacionales que habían impulsado el plan de estabilización y que no tardaron en mostrar su satisfacción por los resultados obtenidos. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento elaboró un informe que sirvió de base para la discusión de las medidas a tomar con vistas a una reactivación. Mientras esto ocurría, los «tecnócratas» dieron dos significativos pasos adelante: el primero fue el nombramiento de López Rodó para el cargo de comisario de la nueva Comisaría del Plan de Desarrollo; el segundo fue un nuevo cambio de gobierno que, además de alejar de posiciones de poder a los restos del falangismo, colocó en el Ministerio de Industria a otro miembro del Opus Dei, Gregorio López Bravo, con lo que llegaba también a ese ministerio la nueva política de liberalización. Un decreto de enero de 1963 permitía la libre instalación, ampliación y traslado de industrias dentro del territorio nacional.

Así, todos los ministerios económicos más la Comisaría del Plan se concentraron en las mismas manos y pudieron seguir una política común que ha pasado a la historia con el nombre genérico de «desarrollo». Inspirándose en la planificación francesa, la Comisaría del Plan elaboró el primer Plan de Desarrollo con el propósito de estimular la inversión privada por medio de una mezcla de política indicativa e inversiones públicas. A ese primer plan, publicado en 1964, seguirían todavía otros dos, hasta que en 1973 la Comisaría fue transformada, en la misma víspera del abandono de

toda idea de planificación, incluso indicativa, en un nuevo ministerio que se extinguiría con la muerte de Franco.

Es imposible determinar hasta qué punto puede atribuirse a los planes de desarrollo el crecimiento económico experimentado en el período de su vigencia. Los índices más altos de crecimiento venían ya de antes de la aprobación del primer plan y quizá la coyuntura internacional tuvo más efecto en el desarrollo español que los planes elaborados por la Comisaría de López Rodó. En todo caso, con el ejercicio de un peculiar neoliberalismo que igual podría bautizarse como neoproteccionismo —en forma de créditos, ayudas, subsidios, aranceles y conversión del INI en entidad subsidiaria de la iniciativa privada— los nuevos gestores económicos respondieron a las expectativas empresariales y crearon un clima de euforia triunfalista muy propicio para la inversión y los negocios.

Porque desarrollo hubo, eso es indudable; y de intensidad y ritmo superior al de cualquier otro período histórico anterior, hasta el punto de sorprender a los observadores propios y extraños. El crecimiento fue ciertamente espectacular por lo intenso y duradero: de 1960 a 1974, la economía española creció a un ritmo anual del 7%, con dos momentos de recesión —1967 y 1970— en los que de todas formas el crecimiento superó el 4%. Desarrollo equivalió durante aquella década a industrialización: fue el avance del sector industrial —o del secundario en su conjunto— el factor más dinámico de este crecimiento económico sin precedentes. Partiendo en 1950 de un nivel sensiblemente igual al de veinte años antes, la industria española había doblado su producción. A partir de este nivel, la industria volvió a multiplicar su producto en una sola década. El ritmo de crecimiento industrial se mantuvo todavía en niveles muy altos hasta 1974.

Pero crecimiento económico moderno no es solo aumento de la producción sino cambio de su estructura. Y así ha ocurrido también en el caso de España por partida doble. Ante todo, en lo que se refiere al conjunto de la economía, el producto industrial pasó a superar definitivamente al producto agrario. Tan significativo como este cambio de composición en el PIB fue el que se produjo en la misma estructura industrial, con un sensible incremento de las industrias de bienes intermedios y de inversión y una

disminución relativa de la industria de bienes de consumo y de la minería no energética.

*Cuadro 2. Producto Interior Bruto al coste de los factores
(miles de millones de pesetas de 1970 y porcentaje sobre el total)*

<i>Años</i>	<i>Total</i>	<i>Agricultura y pesca</i>	<i>Industria y construcción</i>	<i>Servicios</i>
1964	1.655	259	567	829
1970	2.394	271	955	1.167
1975	3.182	333	1.308	1.540
1964	100	15,6	34,3	50,1
1970	100	11,3	39,9	48,8
1975	100	10,5	41,1	48,4

FUENTE: Datos del Banco de Bilbao, *Renta Nacional de España*

El incremento de la producción industrial y su diversificación estructural tuvo un claro reflejo en el comportamiento de las exportaciones durante estos años de expansión. Efectivamente, no solo se produjo una notable subida de las magnitudes de comercio exterior, sino que, a la par que se incrementaba, la exportación de productos españoles experimentaba una significativa diversificación. Por lo que respecta al primer punto, las exportaciones, que permanecieron estancadas durante los primeros años sesenta, comenzaron a crecer de forma rápida y sostenida a partir de 1966. Así, los 44 700 millones de pesetas corrientes de 1960 —valor de las exportaciones de ese año— pasaron a 479 000 millones en 1975 (si se mide en pesetas constantes de 1970 la diferencia sería 60,7 y 279,1 respectivamente), con una clara inflexión en 1966 de la tendencia a ampliarse la diferencia entre importaciones y exportaciones.

Con todo, el volumen de las exportaciones nunca cubrió el valor de las importaciones: desde 1968 se mantuvo en valores ligeramente superiores al 50% con solo tres años superando el 60%. El estrangulamiento exterior pudo evitarse por la conjunción de tres factores: las remesas de emigrantes, los ingresos de divisas por turismo y las importaciones netas de capital.

Estos canales de compensación del persistente déficit de la balanza comercial —que se agravaría decisivamente con la subida de precios del crudo en 1974— estrecharon los lazos de la economía española con la mundial y, a la par, la supeditaron a la coyuntura internacional. La magnitud del fenómeno se pondría de manifiesto con el estancamiento del turismo, debido a la incipiente recesión europea de mediados de los setenta, y a la caída de las remesas de emigrantes provocada por el retorno masivo al iniciarse la crisis en los países que les habían acogido.

La profunda vinculación de la economía española al exterior se refiere también al aumento de la presencia de capital extranjero en España. La apertura decretada en 1959 tuvo un efecto inmediato en el incremento de inversiones extranjeras que ascendieron de 3000 millones de pesetas en 1960 a 65 000 millones en 1973. De Estados Unidos, Suiza, Alemania, Reino Unido y Francia procedían las principales inversiones. Si se añaden Holanda, Bélgica, Suecia e Italia resulta que entre Estados Unidos y los países de Europa occidental cubrían más del 95% de todas las inversiones extranjeras en España, dirigidas sobre todo a construcción y montaje de automóviles, a industria química, equipos eléctricos y electrodomésticos, alimentación, industrias de bienes de consumo y banca. Estas inversiones han dado lugar a lo que se ha llamado desnacionalización o internacionalización del capitalismo español. De hecho, aunque la cantidad total invertida fuera modesta en comparación con otros países, la menor entidad de los capitales españoles ha facilitado en muchas ocasiones el control de una industria e incluso de un sector por el capital extranjero.

En fin, además de internacionalizarse, la industria modificó su distribución territorial dentro de la misma España. En 1900 era notorio el predominio de la industria de productos alimenticios en casi todo el país, con la evidente especialización catalana en industria textil y la del País Vasco en industrias metálicas y una relativa diversificación industrial en Baleares, Valencia y Asturias. A mediados de los setenta, la industria fabril se había diversificado en todas las regiones aunque permanecían algunas especializaciones regionales, como la textil catalana y la alimenticia en Canarias, Andalucía y Extremadura. Lo más destacable, sin embargo, fue el progreso de las industrias metálicas en todas las regiones, de la química en

Murcia, Castilla la Vieja y Cataluña; del cuero, calzado y confección en Valencia y Baleares, y la mayor difusión de industrias como madera y corcho, papel, cerámica, vidrio y cemento.

3.3. ÉXODO RURAL Y URBANIZACIÓN

La España de los años sesenta habrá sido, pues, la España del acelerado proceso de industrialización, pero no habrá sido menos la España de la masiva emigración. Desde el mismo año del plan de estabilización decenas de miles de españoles abandonaron su lugar de nacimiento y residencia y comenzaron a abarrotar los trenes que les llevaban a las grandes capitales, a las zonas industriales o al extranjero, a Francia, Suiza, Alemania. Más que un movimiento migratorio fue un verdadero éxodo que dio lugar a la más radical redistribución de población nunca producida en España.

La agricultura, tanto en las zonas de minifundio como en las de latifundio, había soportado un exceso de oferta de mano de obra que normalmente buscaba salida en la emigración. En 1940 la población activa agraria volvió a superar a los otros dos sectores juntos, llegando en términos absolutos a 4,8 millones de activos. Esa cantidad todavía creció en medio millón durante la década de 1940, de modo que en el censo de 1950 aparecían 5,4 millones de activos. A partir de ahí la población dedicada a la agricultura y pesca comenzó a descender a un ritmo creciente: en 1960, los activos serán 4,9 millones, cien mil más que en 1940 pero que ahora solo representan el 41,6% de toda la población activa. Diez años después, los activos en agricultura y pesca habían descendido a 3,7 millones que ya no supondrían sino el 29,1% del total, una proporción que ha seguido bajando desde entonces.

*Cuadro 3. Evolución de la población activa por sectores económicos
(miles), 1960-1976*

<i>Años</i>	<i>Agricultura</i>	<i>Industria</i>	<i>Construcción</i>	<i>Servicios</i>	<i>No clasif.</i>	<i>Total</i>
1960	4.923	2.929	837	3.137-	—	11.826
1970	3.706	3.650	1.096	4.279	—	12.732
1976	2.732	3.469	1.351	5.310	202	13.064

FUENTE: *Encuesta de Población Activa. Resultados detallados*, Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1989.

Así pues, algo más de un millón de activos agrarios abandonó la agricultura en la década de 1950 y otros dos millones lo hicieron en la siguiente. La abundancia de mano de obra que ese éxodo entrañaba fue un factor decisivo para alcanzar las excepcionales tasas de crecimiento económico que caracterizan a los años sesenta. Se cumplía así también en España el modelo de «desarrollo económico con oferta ilimitada de trabajo». Pero además de ser un elemento decisivo para el desarrollo industrial, el éxodo rural provocó una transformación radical en la misma agricultura, hasta el punto de que se ha podido definir la década de 1960 como la del fin de la agricultura tradicional en España. Mientras la presión demográfica mantuvo bajos los salarios, los propietarios no estuvieron interesados en proceder a la sustitución de mano de obra, pero cuando la oferta de mano de obra se hizo más escasa y los salarios subieron comenzó a ser rentable solicitar créditos para realizar inversiones que mejorasen las condiciones técnicas de la explotación agraria. De esta forma, debido al éxodo de la población rural, la agricultura española de los años sesenta se convirtió, como demandante de productos industriales, en un decisivo factor del desarrollo industrial.

Naturalmente, estos cambios tuvieron consecuencias decisivas en el ciclo de la agricultura tradicional, concepto con el que se designa aquí una agricultura capitalista por sus formas de propiedad pero todavía no por su nivel de desarrollo tecnológico ni por su funcionamiento mercantil. Quienes primero abandonaron el campo fueron los asalariados, que descendieron en un millón exacto de personas entre 1960 y 1972, pasando de 1 945 100 a

solo 945 400. Roto este eslabón, todos los demás siguieron en cadena: la agricultura se mecanizó a un ritmo impresionante, como fue también muy alto el incremento de consumo de abonos y fitosanitarios. Los agricultores mostraron una gran capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y en muy pocos años transformaron por completo las explotaciones agrarias. Antes altamente intensivas en empleo de mano de obra y muy bajo desarrollo tecnológico, los agricultores españoles prescindieron de la primera y tecnificaron sus explotaciones: los 56 800 tractores de 1960 superaban el medio millón veinte años después.

El período de transición de una a otra forma de explotación fue de brillantes resultados para los agricultores. Producción, productividad y renta agraria experimentaron un incremento notable mientras que los precios de los productos industriales o de la energía mantenían una relación favorable con los precios a los que ellos podían vender sus productos. Esta relación, añadida al continuo incremento en el índice de la producción final agraria, explica que entre 1964 y 1973 los agricultores españoles experimentaran un aumento de 1,7% anual de su renta a precios constantes, lo que favoreció la transformación de los hábitos de consumo de la población española en esa década. De una alimentación basada en cereales, leguminosas y hortalizas, y con muy bajo consumo de proteínas de origen animal, los españoles doblaron entre 1965 y 1975 el consumo de carne e incrementaron sustancialmente el de frutas, leche y huevos.

El éxodo rural y el incremento de la producción agraria estuvieron íntimamente relacionados con el desarrollo industrial y con las transformaciones que simultáneamente se operaban en el mundo urbano. El primer gran flujo migratorio se encaminó hacia el extranjero. La política de liberalización adoptada en 1959 afectó al movimiento de la población a través de la frontera, actuando de nuevo la emigración al exterior como válvula de escape de una economía en proceso de industrialización aunque incapaz de atender toda la demanda de trabajo. Según las estadísticas de los países receptores, entre 1960 y 1972 habían emigrado a Alemania cerca de 552 000 trabajadores, 577 000 lo habían hecho a Suiza y otros 436 000 habían salido para Francia.

La importancia de esa emigración al exterior para la economía española no radicó únicamente en su función de válvula de escape, al modo que ya la tuvo la gran emigración transoceánica de principios de siglo. En esta ocasión, los emigrantes, que muchas veces dejaban atrás a sus familias porque pensaban regresar a sus lugares de origen, fueron una de las principales fuentes de divisas. Para el período de 1960 a 1974, se ha estimado en 5440 millones dólares las remesas directas y en 1783 las transferencias. De modo que la cantidad total habría ascendido para ese período a más de 7223 millones de dólares. Con ellos se pudo financiar más de la mitad del déficit comercial. Realmente, fue la suma de esta inyección de divisas y las que aportaban los turistas lo que ayuda a entender el período de euforia importadora que caracterizó a los industriales españoles de esos años.

Pero si la emigración al exterior tuvo una decisiva importancia para el desarrollo de la economía, los movimientos migratorios interiores la tuvieron para enviar a las ciudades la mano de obra exigida por el desarrollo de la industria y redistribuir espacialmente la población. El cambio de actividad se dobló lógicamente en cambio de residencia. Sin contar a los menores de diez años, el número total de españoles que mudaron de residencia durante esos diez años superó los 4,5 millones, de los que 2,6 abandonaron la provincia donde residían. Algo más de un millón y medio de estos emigrantes salieron de municipios de menos de 10 000 habitantes, que experimentaron durante esos quince años una permanente sangría.

Esta gigantesca redistribución de la población reforzó el peso demográfico del triángulo Madrid-Barcelona-Bilbao, el crecimiento de las zonas costeras y el simultáneo despoblamiento de las mesetas centrales, con la excepción de Madrid, que recibió en solo diez años 686 544 inmigrantes, 35 000 más que Barcelona, mientras Extremadura, las dos Castillas y algunas provincias andaluzas sufrían notables pérdidas. Con el crecimiento de los núcleos urbanos de más de 10 000 habitantes, que en conjunto pasaron de 17,3 a 22,5 millones en solo diez años, aparecieron los primeros balbuceos de la sociedad de consumo, el cambio de la moto de los años cincuenta por el utilitario de los sesenta y la irrupción, al volante, de una

nueva clase media que protagonizó un profundo cambio en la moral y las costumbres.

Pues, en efecto, la transformación del paisaje social del campo tuvo su correlato en la profunda y muchas veces traumática transformación experimentada por las ciudades durante la década del desarrollo. Situado en los extrarradios que comenzaban a rodear con sus bloques de viviendas esas ciudades, lo primero con que tropezaba el observador era la presencia de una nueva clase obrera en un rápido proceso de transformación. El crecimiento económico fue suficientemente duradero y sostenido como para que los jornaleros que llegaban del campo o los trabajadores sin calificar que venían de zonas urbanas deprimidas pasaran de la chabola y del realquiler a la vivienda de promoción oficial. Las altas tasas de desarrollo industrial produjeron, además, una diversificación tan notable de las industrias que algunos de ellos y muchos de sus hijos pudieron transformarse de jornaleros o peones en obreros cualificados. Fueron estos los años de movilidad social ascendente, con posibilidades abiertas para que muchos españoles pudieran cambiar no solo de sector —del campo a la industria, o a los servicios— sino de posición dentro del mismo sector —de obrero semicualificado o sin calificar a trabajadores cualificados de cuello azul.

Con los planes de promoción de viviendas y los sistemas crediticios para convertir al trabajador en propietario de su piso, las ciudades sufrieron un proceso de segmentación espacial y social al elevarse en sus márgenes barrios enteros habitados por esta nueva clase obrera. Ciertamente, el proceso no se inició en los años sesenta, sino en los años diez y veinte con el caótico crecimiento de los extrarradios. Pero aquel incipiente proceso de urbanización, bruscamente cortado por la política ruralizante de los primeros años de la dictadura, no llegó a culminar hasta 1956-1973, cuando esta nueva clase obrera se hizo presente en todas las ciudades más importantes, trabajando en fábricas de tamaño medio y grande, de más de cien asalariados, con empleos fijos y en industrias como la química, los transformados metálicos, la construcción naval, la siderurgia y la fabricación de automóviles y de electrodomésticos. Su integración en este nuevo modo de vida comenzaba con el acceso a la propiedad de su

vivienda, un elemento que transformó por completo la anterior relación del trabajador con su lugar de residencia. Tener un trabajo fijo, en un sistema de relaciones laborales que hacía muy complicado el despido, y disponer de una vivienda en propiedad para toda la vida, dotada de los indispensables servicios y de electrodomésticos, radio y televisión, en una barriada en la que sus hijos tenían acceso a un puesto escolar, transformó por completo el modo de ser obrero en la ciudad.

Penetrando desde los extrarradios hacia el centro, el segundo anillo estaba formado por los ensanches iniciados en el último tercio del siglo XIX, que conocieron una llamada «orgía constructora» durante los años veinte, pero que no habían llegado todavía a colmatarse cuando se produjo el colapso de 1930. De nuevo comenzaron a conocer una frenética actividad, levantando nuevas edificaciones en los solares hasta entonces baldíos y sometiendo la vieja trama de la ciudad interior a actuaciones muchas veces traumáticas con el único propósito de facilitar la circulación rodada o proporcionar pingües beneficios a los empresarios de la construcción y a los propietarios de suelo. Una nueva clase media se expandió por esas zonas de las ciudades durante todo el período de desarrollo económico. Entre 1964 y 1970 los cuadros superiores, los vendedores, los empleados de oficina, los técnicos medios, los directores de empresa conocieron una continua expansión, superior a la de los obreros cualificados. En resumen, durante solo estos seis años la estructura social de España cambió sensiblemente hacia un mayor peso de las categorías de asalariados que integran lo que se ha dado en llamar nuevas clases medias, un cambio social que marcaría su impronta en el clima cultural de aquella década.

3.4. MOVILIZACIÓN POLÍTICA Y DISIDENCIA CULTURAL

A finales de la década de los cuarenta la fuerte represión y el distanciamiento de gran parte de la población española de la lucha armada ponían fin a la actividad guerrillera. Última expresión de una opción marcada por la experiencia de la Guerra Civil, las agrupaciones guerrilleras, en las que luchaban socialistas, anarquistas y sobre todo comunistas,

tuvieron su período más activo entre 1945 y 1948. El frustrado intento de liberar territorios penetrando en el valle de Arán con unos miles de hombres (muchos de los cuales habían participado en la resistencia francesa contra los nazis), organizado por el Partido Comunista español en octubre de 1944, relanzó el maquis. El objetivo era promover una situación insurreccional que, aprovechando el aislamiento y la condena del régimen después de la Segunda Guerra Mundial, facilitara la caída de la dictadura. El fracaso de la acción armada, la conciencia de que las democracias occidentales no intervendrían directamente para provocar la caída de Franco y la progresiva reincorporación de España a la comunidad internacional, llevaron a un replanteamiento de las formas de lucha.

Los acontecimientos de la Universidad de Madrid supusieron un giro en la oposición al régimen, en particular en lo que atañe a la redefinición de la política de alianzas y de las estrategias de movilización.

El deseo de superar la división entre «vencedores y vencidos», expresada en el manifiesto de los jóvenes del Partido Socialista después de los incidentes de la Universidad de Madrid, en 1956, revelaba la necesidad de un cambio en el lenguaje político, como premisa para construir una oposición capaz de reunir a distintas tendencias alrededor de unos objetivos compartidos. Intelectuales como el exfalangista Dionisio Ridruejo, el socialista Tierno Galván y el monárquico Joaquín Satrústegui, dirigieron sus esfuerzos en ese sentido, promoviendo la creación de pequeños grupos y asociaciones. También la reciente formación de la Unión Democrática Cristiana, fundada por estudiantes universitarios y liderada por Giménez Fernández, se declaraba a favor de la superación de los «sangrientos odios del pasado». Este cambio de orientación fue asumido por el mismo PCE (Partido Comunista de España), que a partir de 1956 adoptó una política de «reconciliación nacional». El documento redactado en junio de ese mismo año —*Declaración del Partido Comunista de España. Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español*— hace hincapié en el «espíritu de Ginebra» e indica la posibilidad de un cambio político pacífico en España, favorecido por «el clima internacional de coexistencia y colaboración pacífica entre los Estados»; se hace intérprete de la «nueva generación que no vivió la Guerra Civil, que no

comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos» y del deseo de todas las capas sociales del país de «terminar con la artificiosa división de los españoles en “rojos” y “nacionales”, para sentirse ciudadanos de España». En 1959 se convocó una «huelga general pacífica». Esta iniciativa, a la que siguieron otras similares, fracasó, si bien el PCE, gracias también a su capacidad de movilización, iba imponiéndose desde la clandestinidad como el partido mejor organizado y más numeroso de la oposición de izquierdas. Por otra parte, la fuerza política de las organizaciones que desempeñaron un importante papel en los años de la República se había debilitado considerablemente: el sindicato socialista UGT, el Partido Socialista y la misma CNT, esta última desgarrada por divisiones internas, habían sido afectados muy duramente por la represión.

En esa década se sentaron las bases para abandonar la radicalización ideológica, cultural y política, y los profundos antagonismos generados por la Guerra Civil, como premisa imprescindible para construir un frente común contra la dictadura y alcanzar una democracia que tuviera a Europa como principal referente. Se trataba, sin duda, de un proceso lento y minoritario aunque, con la reunión de Munich, en 1962 llegaron los primeros resultados. En la ciudad alemana, con ocasión del IV Congreso Internacional del Movimiento Europeo, se reunieron 80 exponentes de la oposición interna (gran parte de ellos monárquicos liberales y demócratacristianos, pertenecientes a asociaciones católicas y al Partido Social de Acción Democrática) y 38 del exilio (republicanos, socialistas y nacionalistas) con la presencia como observadores de dos delegados comunistas. En un documento común exigían «la instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas», los derechos civiles, la libertad de reunión, de asociación y de huelga, el reconocimiento de las «comunidades naturales» y «la incorporación de España en Europa» (Doc. 8^[*]). Algunos de los participantes fueron detenidos y multados a su regreso a España y obligados a elegir entre el confinamiento o el exilio (Satrústegui y otros, 1993).

De todas formas, las primeras movilizaciones masivas contra el régimen comenzaron a inicios de los años cincuenta. En marzo de 1951, la participación de miles de personas en la huelga general de Barcelona,

conocida como «la huelga de los tranvías» por haber sido provocada a causa de la subida de las tarifas de los medios de transporte, ponía en evidencia el malestar social presente en muchas capas de la población, si bien la vinculación entre las reivindicaciones salariales y la oposición al régimen se afianzaría, sobre todo, en los años sesenta.

En los años cincuenta y sesenta se sucedieron conflictos laborales discontinuos y concentrados sobre todo en las grandes ciudades y en las regiones mineras. De hecho, después de una breve tregua debida a los aumentos salariales concedidos por el ministro Girón, en la primavera de 1956 se registraron nuevas huelgas y manifestaciones en Barcelona, Madrid y Asturias.

Mientras que se radicalizaba la crisis del sindicato vertical se afirmaban las primeras formas de estructuras autónomas, llamadas «Comisiones Obreras», las cuales inauguraban una estrategia de lucha en la que se combinaban formas de luchas ilegales con la utilización de recursos legales e institucionales. Cada vez con mayor frecuencia, las elecciones de los delegados en los sindicatos oficiales se convertían en ocasiones para la incorporación de los representantes comunistas y socialistas, y los locales del sindicato vertical se utilizaban para reuniones semiclandestinas. A partir de 1956, el SEU fue perdiendo fuerza en las universidades, mientras que las organizaciones católicas HOAC y JOC criticaban al régimen y denunciaban las injustas condiciones de vida de los trabajadores. Críticas y denuncias que se habían manifestado ya con anterioridad. Entre 1951 y 1955, el *Boletín de Militantes* de la HOAC publicaba artículos en defensa de la libertad de prensa, y planteaba los problemas de los objetores de conciencia, de la emigración y de las relaciones con la izquierda; en un artículo de enero de 1957, defendía la legitimidad de la huelga (Hermet, II, 1981, págs. 263-264).

Asimismo, a finales de los años cincuenta, fueron perfilándose, con modalidades específicas, determinadas por las diferentes historias de las dos comunidades, los nacionalismos catalán y vasco. La abolición de los Estatutos de Autonomía concedidos por el gobierno republicano en 1932 a Cataluña y en 1936 al País Vasco, había sido una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno franquista en nombre de la unidad nacional. La

imposición del idioma castellano y la presión centralista ejercida por Madrid se vivían por vascos y catalanes como una cancelación de su identidad y de su patrimonio cultural. Todo ello se convirtió, en Cataluña, en factor de cohesión y generó momentos de unidad política entre organizaciones de izquierdas, grupos católicos e intelectuales. Cada acto represivo contra las expresiones de la identidad cultural y lingüística reforzaba el vínculo entre las reivindicaciones autonomistas y la movilización antifranquista. Sin embargo, la cultura catalana logró conservarse, durante todos esos años, en las familias, en las canciones y en el exilio mediante la publicación de libros y revistas en lengua catalana.

En Bilbao, en 1952, un grupo de estudiantes universitarios anunció la formación del grupo Ekin (Hacer), proponiendo como principal objetivo la recuperación del euskera junto con la historia y la cultura vascas. El grupo militó en un primer momento en el PNV (Partido Nacionalista Vasco) — que había sido un importante punto de referencia para la oposición y para el gobierno vasco en el exilio— pero salió del partido después de dos años de militancia. En 1959 fundó la organización llamada ETA (Euzkadi Ta Askatasuna: País Vasco y libertad), en cuyo documento constitutivo se recuperaban algunos principios del ideólogo católico del siglo XIX Sabino Arana, quien, en sus escritos, había formulado la teoría de la ocupación del País Vasco por el Estado español. De ahí la adopción de un programa independentista y la reivindicación del euskera como componente esencial de la nacionalidad vasca (De la Granja, Beramendi, Anguera, 2001, págs. 184-185).

La respuesta del régimen ante estas tensiones, reivindicaciones y movilizaciones fue la represión.

El «desarrollismo» emprendido con la llegada al gobierno del nuevo personal político procedente del Opus Dei no implicó, al menos durante una década, ninguna modificación en la estructura autoritaria del régimen. Sin embargo, el crecimiento industrial y los cambios que siguieron en el ámbito económico y administrativo, el aumento del turismo, el mayor disfrute de los bienes de consumo, los crecientes intercambios comerciales y contactos culturales con Europa, promovieron nuevas pautas sociales, laborales y de comportamiento. De hecho los procesos de modernización chocaban no

solo con la falta de libertad, sino también con las resistencias ideológicas y culturales de la jerarquía eclesiástica y de la Falange. La promulgación de los Principios Fundamentales del Movimiento, en mayo de 1958, generó un nuevo auge de la organización, la cual, si bien había ido perdiendo protagonismo político, mantenía una presencia importante en los aparatos administrativos y burocráticos. Los Principios reafirmaban que «España era una unidad de destino en lo universal» y la importancia de la familia, del municipio y del sindicato como estructuras básicas de la nación. La doctrina de la Iglesia se presentaba como «única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación».

Por su parte, en 1952, la jerarquía eclesiástica relanzaba la unidad nacionalcatólica en el Congreso Internacional Eucarístico de Barcelona, celebrado con gran pompa y triunfalismo ante la presencia de Franco, de las autoridades eclesiásticas y de los principales exponentes políticos del régimen. Una bandera catalana, izada clandestinamente, rompió el compacto formalismo del ceremonial.

La Cruzada seguía utilizándose en clave legitimadora del régimen. En su discurso de inauguración del Valle de los Caídos, en 1959, Franco volvía a definir la Guerra Civil como «Cruzada de Liberación», milagrosa y providencial, reiterando la imposibilidad de una reconciliación y el mensaje de una victoria «total y para todos» e inmutable (Doc. 9^[*]). Paralelamente, la represión seguía ejerciéndose en formas y ámbitos diversos. La censura era muy activa en la literatura, el teatro, la prensa y el cine. Sin embargo, también en estos sectores iba reforzándose una disidencia que aprovechaba hábilmente los escasos márgenes que dejaban los controles. En esos años, la elección de temas disconformes con la retórica oficial del régimen se convertía automáticamente en un acto de disidencia cultural y política. La censura estaba más presente que nunca y era al mismo tiempo arbitraria; en muchos casos, resultaba decisivo obtener el dictamen favorable del «asesor religioso» que participaba en las comisiones de control. También circulaban libros, boletines y opúsculos a través de los cuales la Iglesia catalogaba los libros, incluso los extranjeros, como «lecturas buenas y malas». Por ejemplo, en *Lecturas buenas y malas a la luz del dogma y de la moral*, publicado en Bilbao en 1949 (que tuvo muchas reediciones), la novela de

Matilde Serao *¡Centinela... alerta!* (1889) se consideraba «no buena» porque «proclama con entusiasmo la unidad italiana, a Víctor Manuel y Garibaldi». Muy radical era el juicio sobre el inquieto e inconformista intelectual Miguel de Unamuno expresado en estos términos: «Con una concepción del cristianismo absurda y errónea, heterodoxo y modernista en el sentido condenado por la Iglesia, en el aspecto moral toda su obra presenta ciertos y gravísimos peligros, no hallándose las novelas libres del contagio profundo de las angustias y problemas trascendentales de su autor» (Garmendía de Otaola, 1961, pág. 625).

Camilo José Cela (premio Nobel en 1989), él mismo censor entre 1941 y 1945 y sucesivamente «informante y consejero» (Ysás, 2004, pág. 52), tuvo que publicar en Buenos Aires su novela *La colmena*, magnífico fresco de la desolación del Madrid de la posguerra representada a través de los destinos, cruzados o paralelos, de una multitud de antihéroes enjaulados, como señala el título, en una «colmena». Los escritores inventaban estrategias y recursos narrativos y exploraban las posibilidades de la metáfora, del símbolo y de la alegoría para transmitir su mensaje. Ya en 1944 el poeta Dámaso Alonso expresaba el dolor y la impotencia en el conocido verso que abre su poema «Insomnio», del libro *Hijos de la ira*: «Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres».

Paralelamente, entre grupos de escritores disidentes se difundía la tendencia a utilizar el teatro, la novela y la literatura de viajes como testimonio y revelación. El dramaturgo Antonio Buero Vallejo, en su obra *En la ardiente oscuridad* (1951), simboliza, mediante la metáfora de la ceguera, la tensión entre la resignación y la esperanza. Juan Goytisolo publicó, en 1954, la novela *Juegos de manos*, donde el malestar y el desarraigo se manifiestan en la rebelión de un grupo de jóvenes; en *Duelo en el paraíso* (1955) se alude, en cambio, a la tragedia de la Guerra Civil a través de la violencia de un grupo de niños. El enfoque realista de las novelas, que tuvo también reflejos en el teatro y en la literatura de viajes, se convertía en respuesta y defensa ante la cultura de evasión y la retórica apologética, buscando formas de expresión que introdujeran elementos de inquietud y conflictividad. El dramaturgo Alfonso Sastre, con un título claramente alusivo, *La mordaza*, abordaba en 1954 el tema de la falta de

libertad. El escritor Armando López Salinas denunciaba en *La mina* (1960) las duras condiciones de vida de los mineros, incluyendo en su novela también a los vencidos. *Caminando por las Hurdes* (1960), escrito en colaboración con Antonio Ferres, describe, en cambio, la desolación de una de las zonas más atrasadas de España, Extremadura, que ya en los años treinta había sido objeto de un famoso documental de Luis Buñuel. En el mismo año, contra los mitos y estereotipos románticos del sur de España, Goytisolo relataba, en *Campos de Níjar*, las etapas de su viaje por las tierras de Almería marcadas por la miseria y el hambre.

Aunque no directamente inspiradas en la denuncia, otras grandes novelas reflejaban realidades dramáticas. Cabe recordar *Nada* (1945), de Carmen Laforet, *El Jarama*, de R. Sánchez Ferlosio (1956), y *Tiempo de silencio*, de L. Martín-Santos (1962); este último lograba conjugar la innovación lingüística con una eficaz representación de la vida en las chabolas que poblaban la periferia de Madrid.

En el cine de producción nacional, durante los años cuarenta, predominaban los temas vinculados a la reivindicación del pasado heroico y de los mitos nacionales e hispánicos, temas estos que inspiraron al mismo Franco el guión de la película *Raza*, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y estrenada en 1942. Producida por el Consejo de la Hispanidad, la película representó «un manifest politique au terme d'une victoire» (Berthier, 1998, pág. 32). Sin embargo, el impacto de las innovaciones procedentes sobre todo del neorrealismo italiano, en directores como Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, estimuló un tipo de cine en el cual, a través de la sátira, la comicidad o el realismo, se introducían fragmentos de realidades dramáticas. En algunos casos fueron los cineclubs, dirigidos por el SEU, los que introdujeron las novedades del cine italiano. A comienzos de los años cincuenta, se proyectaron en Madrid *Bellísima* de Visconti, *Crónica de un amor* de Antonioni y *Ladrón de bicicletas*, aunque a esta película de Vittorio De Sica —como escribe Román Gubern— se le añadió «una reconfortante y esperanzadora voz en *off* al final de la película, que fue sin duda su pasaporte moral para la exhibición en España» (Gubern-Font, 1975, pág. 62).

Los directores estaban obligados a ingeniárselas entre la innovación y el exiguo margen que les quedaba intentando sortear la censura, a menudo imprecisa y confusa en sus directrices, pero muy activa a la hora de cortar o retirar las películas. El caso de *Surcos* (1951), dirigida por el falangista José Antonio Nieves Conde, es emblemático del funcionamiento contradictorio de la censura y de los conflictos internos que a veces provocaba en las instituciones. La película trataba de las dramáticas vivencias de una familia campesina emigrada a un Madrid en el que estaban presentes la prostitución, el estraperlo y el paro. José María García Escudero, director general de Cinematografía y Teatro (del Ministerio de Información y Turismo), convencido defensor de un cine social, la declaró de «interés nacional», y por lo tanto susceptible de ser subvencionada (Monterde, 1995, pág. 135). La obra levantó numerosas protestas, a pesar de que el amargo final —la familia regresa al pueblo, pobre y humillada, cruzándose por el camino con otra que acaba de llegar a la ciudad— fue sustituido por un elogio de la vida rural. García Escudero defendió la película (García Escudero, 1958), lo cual constituyó uno de los motivos de sus dimisiones. Menor fortuna aún tuvo *El inquilino* (1957), del mismo director y centrada en el problema de la vivienda, que, después de haber sufrido numerosos cortes de la censura, fue prohibida durante tres años (Gubern-Font, 1975, pág. 91). Bardem, con *Muerte de un ciclista* (1955), realizada bajo la influencia de Antonioni, obtuvo un éxito considerable en el Festival de Cannes; en otra película, *Calle Mayor* (1956), ofreció una eficaz radiografía de la superficialidad y del machismo de un grupo de jóvenes de provincias, que montan una amarga broma contra la «soltera». En la película *La venganza* (1957) Bardem abordaba el tema de la solidaridad. Cortada y modificada por la censura, la película *Los jueves, milagro* (1957), de Berlanga, utilizaba el registro de la sátira y de la comicidad para denunciar una religiosidad basada en la superstición y en la «milagrería». En 1963, Berlanga retrató magistralmente la figura del verdugo en la película del mismo título.

Los escasos encuentros y seminarios permitidos se convertían no solo en ocasiones de debate sobre nuevas fórmulas de experimentación cinematográfica, sino también de crítica y de cambio. Las Conversaciones

Cinematográficas de Salamanca convocadas por el Cineclub universitario del SEU de Salamanca, además de representar un foro de debate sobre el cine español entre personas de diversas tendencias y orientaciones (asistieron falangistas junto con jóvenes directores como Carlos Saura y Jesús Fernández Santos), brindaron la posibilidad de dirigirse al gobierno solicitando un mayor apoyo para el cine y una nueva reglamentación de la censura. Bardem, además, propuso un documento final en el que se definía al cine español «políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico» (García Escudero y otros 1995).

En 1961 se prohibió la proyección de *Viridiana*, de Luis Buñuel, rodada en España y galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La película no llegó a proyectarse en las salas, entre otras razones, por las duras críticas del *Osservatore Romano*, que en el artículo «Il contrastato sole di Cannes non deve lasciar risaltare solo le ombre» (31 de mayo de 1961), denunciaba la presencia de «atteggiamenti antireligiosi» y utilizaba expresiones como «violenza blasfema» y «oscenità rivoltante».

Sin embargo, la disidencia cultural iba penetrando también en algunos sectores de la Iglesia. En 1959, la Abadía de Montserrat publicó la revista *Serra d'Or* en lengua catalana, defendiendo, en contra de la imposición del castellano por parte del régimen, la vitalidad de una lengua que contaba con una rica tradición cultural. La revista contribuyó durante años al conocimiento del debate intelectual europeo entre católicos y laicos. En enero de 1960, Jaime Vicens Vives publicaba en sus páginas un artículo sobre la «nova historia», en el que afirmaba: «La història es una ciència dels fets de conjunt del passat de les comunitats socials, no pas una tribuna per a declamacions patriòtiques ni un corriol on es paren paranys dialèctics».

Ese mismo año, 339 sacerdotes vascos enviaron una carta a los obispos pidiendo libertad de reunión y de asociación, defendiendo la «inviolabilidad de la conciencia» y denunciando «el culto casi idolátrico del jefe» y la represión de las «características étnicas, lingüísticas y sociales del pueblo vasco». Los obispos contestaron con palabras de crítica y condena.

En 1962, año del Concilio Vaticano II, la Iglesia reiteraba su apoyo al Caudillo a través de las celebraciones que, con ocasión del cuarto centenario de la reforma de la orden de las carmelitas descalzas, acompañaron el recorrido de una reliquia teresiana, «el brazo incorrupto», por todo el territorio español.

3.5. «25 AÑOS DE VICTORIA»

Los años sesenta se caracterizan por un tímido *aperturismo* —aunque atento a preservar el sistema dictatorial— y por una extensión de los conflictos sociales y de la oposición antifranquista, a la que se respondió con una intensificación de la represión. En mayo de 1966 se aprobó la Ley de Prensa, promovida por el ministro Fraga Iribarne, que suprimía la censura previa pero mantenía el secuestro administrativo de las publicaciones, aumentando de hecho la responsabilidad de los editores. En realidad, el artículo 2 de la ley reafirmaba las limitaciones a la libertad de expresión, al imponer «el respeto a la verdad y a la moral, el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior». Un año después se promulgó la Ley sobre la Libertad Religiosa, respondiendo a la renovación impulsada por el Concilio Vaticano II.

En el ámbito de las movilizaciones, aumentaban los conflictos, y las acciones de lucha iban adquiriendo cada vez una mayor visibilidad. A partir de 1962, las huelgas, las manifestaciones y las asambleas determinaban la politización de otros sectores de la sociedad, mientras que las organizaciones católicas de base, bajo la influencia del Concilio Vaticano II, radicalizaban sus denuncias y críticas contra la dictadura. La protesta de los estudiantes universitarios, sobre todo en Barcelona y en Madrid, amenazaba con volverse endémica, hasta el punto de que el régimen decretó, en 1968, el cierre provisional de algunas facultades de las dos universidades. En las movilizaciones participaron profesores como José Luis Aranguren, Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo, frecuentemente suspendidos de la

enseñanza y finalmente destituidos. En las universidades las canciones de Raimon eran un símbolo de la oposición antifranquista y en aquellos años cantar las palabras de *Diguem no* (compuesta en 1969) se transformaba en un acto de rebeldía civil (Doc. 10^[*]).

En el mundo laboral, Comisiones Obreras fue consolidándose gracias a su estrategia de aprovechar las estructuras del sindicato vertical, y en las elecciones de 1966 sus representantes alcanzaron un importante éxito. En esos años se consumó la ruptura entre empresarios y trabajadores, poniendo en crisis uno de los fundamentos del sindicato corporativo.

Junto con las reivindicaciones salariales y la lucha por las infraestructuras en los barrios, la demanda de amnistía a favor de los detenidos políticos se convirtió en un elemento aglutinante para los diferentes sectores de la oposición. Respecto a este último objetivo, la movilización de las mujeres de los presos políticos desempeñó un papel fundamental. A su vez, grupos de mujeres juristas (que fundarán en 1971 la Asociación Española de Mujeres Juristas) criticaban —solicitando modificaciones— la desigualdad y la marginación femenina sancionadas por el ordenamiento jurídico.

La represión provocaba la participación y el apoyo de sectores de la sociedad cada vez más amplios. Muchos intelectuales se solidarizaron con las huelgas de Asturias de 1962-1963, a las que siguieron detenciones y torturas, y en octubre de 1963 enviaron una carta con 102 firmas al ministro Fraga Iribarne en la que se denunciaban las represalias y las torturas a los mineros, así como los malos tratos sufridos por numerosas mujeres, a algunas de las cuales se les había cortado el pelo al rape. Firmaban la carta, entre otros, José Bergamín, escritor católico que había regresado del exilio, los poetas Vicente Aleixandre y Gabriel Celaya, Laín Entralgo, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Juan Goytisolo y personalidades del cine como Francisco Rabal y Fernando Fernán Gómez.

Ese mismo año, el comunista Julián Grimau fue procesado por un consejo de guerra y condenado a muerte después de haber sido torturado. Los cargos acusatorios expuestos se remontaban a la Guerra Civil. Numerosas fueron las manifestaciones de protesta en el ámbito internacional.

El régimen alternaba la represión y el estado de excepción con la campaña de propaganda de los «25 años de paz». Se invocaba continuamente el desarrollo económico como factor de legitimación y se exaltaba a Franco como promotor del bienestar y de la estabilidad en un clima de paz. La película de Sáenz de Heredia *Franco, ese hombre* consagraba la imagen del dictador como *pater patriae* en versión cotidiana, guardián atento de la salvación de España durante los veinticinco años de gobierno.

Sin embargo, en noviembre de 1963 se alzó la voz disconforme del benedictino Aureli Maria Escarré, abad de Montserrat, que, en una entrevista al diario *Le Monde*, afirmaba que los «25 años de paz» del régimen habían sido, en realidad, «25 años de victoria». A la luz de *Pacem in terris*. Escarré señalaba la contradicción entre la política del gobierno y los principios cristianos, y apoyaba a los detenidos políticos de Burgos sometidos a castigo porque, al no ser creyentes, se habían negado a asistir a misa; denunciaba los obstáculos al desarrollo de la cultura catalana y señalaba como problema de España la ausencia de democracia y de libertad. En marzo de 1965 el abad se marchó de Montserrat (Díaz Plaja, págs. 361-364).

El distanciamiento respecto al régimen por parte del mundo católico se concretaba en declaraciones escritas y en acciones de solidaridad hacia las luchas existentes, a veces con la participación directa de sacerdotes. Muchos de éstos, sobre todo en el País Vasco, pagaron este compromiso con la detención y la cárcel.

De hecho, el Concilio Vaticano II sirvió de detonante y estímulo respecto a las tensiones ya presentes en el catolicismo español. Términos recurrentes en las revistas y en los libros católicos como *aggiornamento* y «diálogo», revelaban una nueva actitud cultural y mental, también empeñada en la crítica contra la actuación de la Iglesia durante la dictadura. Las organizaciones HOAC y JOC solidarizaban con las reivindicaciones de los trabajadores y con las exigencias de amnistía y de libertades democráticas.

En 1963 Ruiz-Giménez fundó la revista *Cuadernos para el diálogo*, que vino a sumarse a la revista católica *El Ciervo*, fundada en 1951 en

Barcelona por un grupo de universitarios católicos y progresivamente convertida en una tribuna de teólogos e intelectuales críticos con el régimen. En 1966 empezó a publicarse en Bilbao la revista *Iglesia viva*, que en su primer número recogió significativas aportaciones críticas sobre el nacionalcatolicismo. En estas revistas escribía el intelectual «cristiano-marxista» Alfonso Comín, cuya figura simbolizó el «diálogo», es decir, la superación de uno de los más arraigados tabúes de la Guerra Civil. La relación entre cristianismo y socialismo pasó a ser tema de debate en muchas revistas católicas y la misma *Ecclesia*, el 2 de septiembre de 1967, publicó el artículo «Diálogo con el marxismo».

Y sin embargo, en 1966, la Universidad de Santiago de Compostela, en coincidencia con el Año Santo Jacobeo, concedía a Franco el grado de doctor «Honoris causa», por la Facultad de Ciencias, en cuanto se le reconocía el mérito de haber restaurado «el biologismo normal de nuestra Patria cuya vida venía siendo alterada por los regímenes políticos instaurados por los años 31 al 36» (Doc. 11^[*]).

Con frecuencia, las iglesias y los conventos ponían sus espacios a disposición para reuniones de sindicatos clandestinos, estudiantes e intelectuales. En 1966 los estudiantes de la Universidad de Barcelona fundaron el SDEUB (Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona). La reunión, a la que asistieron también profesores universitarios, se celebró en una sala del convento de los capuchinos de Sarriá y duró toda la noche. Al día siguiente la policía intervino y detuvo, entre otros, al poeta Salvador Espriu y al pintor Antoni Tàpies. Este episodio sería recordado como «La caputxinada» (Crexell, 1987). Dos meses después, 130 sacerdotes organizaron, en el centro de Barcelona, una manifestación silenciosa de protesta que fue disuelta por la policía.

En la zona minera del País Vasco los conflictos laborales se sucedían casi ininterrumpidamente. El gobierno declaró el estado de excepción en aquella región mientras que el Tribunal Supremo reafirmaba la ilegalidad de las huelgas y de Comisiones Obreras. Sin embargo, en Cataluña y en el País Vasco las estrategias adoptadas con respecto a las reivindicaciones autonomistas tuvieron distintos desenlaces. En 1969 nació en Barcelona la

Coordinadora de las Fuerzas Políticas de Cataluña, que reunía a los grupos y partidos que se habían ido formando durante aquellos años, incluyendo el Partido Comunista catalán (PSUC). Entre sus objetivos figuraban la amnistía para los detenidos políticos, la libertad política y sindical, y el restablecimiento del Estatuto de 1932 como primer paso hacia la autodeterminación.

En el País Vasco se produjo el paso de ETA a la lucha armada. En la V Asamblea, celebrada entre 1966 y 1967, la organización definió su estructura política, económica, cultural y militar, pero en la práctica predominaría la lucha armada. En 1968 un etarra mató a un guardia civil en un control de carretera y, pocas horas después, fue a su vez muerto por disparos de la Guardia Civil. ETA iniciaba una «espiral de acción-represión-acción» (De la Granja, Beramendi, Anguera, 2001, pág. 186) e inauguraba una estrategia de violencia que marcará al País Vasco y a España en los años futuros.

RESUMIENDO...

A partir de 1957, los tecnócratas del Opus Dei en el gobierno proceden a reformar la Administración y ponen en marcha planes de estabilización y liberalización económica. Paralelamente concluye el proceso de institucionalización del régimen, y Juan Carlos I de Borbón es designado sucesor de Franco a título de rey.

En los años sesenta, un acelerado proceso de industrialización determina el éxodo rural, el crecimiento urbano y una masiva emigración que transforman profundamente la estructura social del país.

En el extranjero, la oposición en el exilio se reorganiza y encuentra un momento de unidad con la del interior en la reunión de Munich. Mientras, se suceden las movilizaciones de los trabajadores contra la dictadura y cobra fuerza la disidencia cultural de intelectuales, escritores y cineastas. Bajo el impulso del Concilio Vaticano II, también en el mundo católico crece la oposición a la dictadura.

CRISIS DE RÉGIMEN (1969-1975)

4.1. EL GOBIERNO MONOCOLOR DE 1969

DURANTE LA DÉCADA DE 1960, el conflicto central que dividió a la clase política se produjo entre un sector del Movimiento, que pretendía asegurar la continuidad del régimen ampliando la base social y la participación política por medio de una ley de asociaciones, y los tecnócratas, que se habían propuesto garantizar, con el apoyo de Carrero Blanco, una solución monárquica en vida de Franco manteniendo la estructura autoritaria del sistema político. En el consejo de ministros, ese conflicto enfrentó al secretario general del Movimiento, José Solís, responsable también de la Organización Sindical, y al titular de Información y Turismo, Manuel Fraga, con los responsables del área económica, encabezados como siempre por López Rodó. La Ley Orgánica del Estado, última de las leyes fundamentales, y la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor del jefe del Estado a título de rey, consagró aparentemente el triunfo del sector tecnocrático, que pudo bloquear en las Cortes cualquier intento de reforma y de apertura propugnado por los ministros del Movimiento.

Desde principios de 1969 se hizo cada vez más evidente la tensión entre estas dos líneas políticas y la creciente parálisis del gobierno ante los desafíos que planteaba una oposición cada vez más activa entre la clase obrera, los estudiantes universitarios y un sector importante del clero católico, sobre todo, aunque no exclusivamente, en regiones donde habían resurgido movimientos nacionalistas como Cataluña y el País Vasco. El año comenzó bajo un estado de excepción decretado tras las movilizaciones de

protesta por la muerte a manos de la policía del joven universitario Enrique Ruano, y emprendió su último tramo en medio del peor escándalo del régimen, el asunto MATEA, un fraude a Hacienda por exportación ficticia, fuertemente subvencionada, de telares en que se vieron implicados empresarios y ministros vinculados al Opus Dei. Intentando modificar a su favor la relación de fuerza con los tecnócratas, Manuel Fraga y José Solís dieron a este escándalo una publicidad sin precedentes en los anales del régimen.

Lo que nunca esperaron los promotores de mantener vivo el escándalo fue la solución que se dio a la crisis. En octubre de 1969, el vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco, presentó al jefe del Estado un amplio memorándum titulado «Consideraciones sobre la conveniencia de proceder a un reajuste ministerial». Para Carrero, cuatro eran los principales asuntos que aconsejaban un profundo cambio de gobierno. El primero, los intentos del ministro secretario general del Movimiento de aprobar una nueva Ley Sindical y un Estatuto de Asociaciones de acción política que incrementaba para la organización del Movimiento sus atribuciones en esos ámbitos. Carrero temía enfrentarse a una especie de reedición de lo ocurrido en los años cincuenta con Arrese y proponía una solución drástica: despedir al ministro Solís y separar la Organización Sindical de la Secretaría General del Movimiento, de manera que esta no pudiera controlar a aquella.

El segundo problema había surgido en relación con el asunto MATEA. Reconociendo que el fraude había salpicado a los ministros de Economía y Hacienda —pero no al de Industria, López Bravo—, Carrero proponía la salida de ambos del gobierno, pero a la vez planteaba la necesidad de destituir al ministro de Información, responsable de la actitud permisiva ante la publicidad del asunto. Fraga había percibido en MATEA la gran oportunidad para debilitar a la élite de poder configurada durante los años anteriores en torno a la Comisaría del Plan de Desarrollo y de su titular, López Rodó, pero en su intento se había ganado la enemistad del vicepresidente del gobierno. Por otra parte, y en tercer lugar, Carrero, hombre de religiosidad integrista, veía con malos ojos los avances de la libertad de prensa, la relajación de la censura, la publicación de libros marxistas, la aparición de películas y revistas que juzgaba como

pornográficas y, en general, el abandono de las buenas costumbres y de la moral tradicional.

En fin, Carrero había mantenido una fuerte discrepancia con el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, procedente del sector católico o «propagandista» del régimen, cercano a Solís y Fraga en su común objetivo de debilitar a los tecnócratas del Opus Dei. Carrero consideraba a Castiella culpable de haber enajenado la amistad con Estados Unidos planteando exigencias exorbitantes para la renovación de los acuerdos de 1953; haber hostilizado a Inglaterra con su posición obcecada en la reivindicación de soberanía sobre Gibraltar y las medidas de fuerza emprendidas contra la colonia británica; haber deteriorado las relaciones con la Santa Sede tras la celebración del Concilio Vaticano II; no haber adelantado nada en la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y, en fin, haber agudizado el aislamiento exterior de España cuando más necesitada estaba de apoyos en el contencioso que la enfrentaba a Marruecos por los territorios del Sahara occidental.

Si a estos ministros se añadían los que ya habían desempeñado el cargo durante varios años, el cambio propuesto por Carrero significaba cuantitativamente una de las mayores remodelaciones llevadas a cabo desde 1938. Pero a esa relevancia cuantitativa se añadió una cualitativa. Carrero no era partidario de seguir la pauta del reparto equilibrado de poder entre las distintas facciones del régimen. Por vez primera, argumentando la necesidad de un gobierno fuerte y disciplinado, sin divisiones internas, optó por ofrecer los ministerios que quedaban vacantes a personajes vinculados a uno solo de los viveros que proporcionaban personal político al régimen. Con pocas excepciones, entre ellas las del nuevo ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, fue un gobierno con una mayoría de ministros procedentes del entorno de López Rodó, propuestos por él o por colaboradores suyos en la Comisaría del Plan de Desarrollo. De ahí que fuera bautizado inmediatamente con el calificativo de «gobierno monicolor» y que se le recibiera como una prueba del triunfo sin paliativos de los tecnócratas del Opus Dei sobre el resto de «familias» políticas del régimen.

Resuelta la crisis de gobierno, nadie había previsto que su solución marcaría el inicio de una crisis de régimen. La dictadura había recibido su legitimación de una victoria en la Guerra Civil administrada durante décadas por una coalición de militares, falangistas y católicos: Fuerzas Armadas, Movimiento e Iglesia habían sido los suministradores tradicionales de personal político. Alejarse de aquel origen para refundar a finales de los años sesenta una legitimidad basada en la eficacia, las obras, la administración, esto es, en un Estado gobernado por una alta burocracia sostenida por el poder personal de Franco, constituía una contradicción. La dictadura, para subsistir, necesitaba el concurso de todos los fundadores: sin la Iglesia y contra el Movimiento, aunque se mantuviera el ojo vigilante del Ejército, el gobierno monicolor se enfrentó a problemas insolubles, sobre todo al de la lucha abierta entre las mismas facciones del régimen.

Franco, en efecto, había nombrado presidente de las Cortes a un falangista, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que utilizó su puesto para convertir la institución de representación orgánica en una especie de trinchera desde la que los políticos del Movimiento hostilizaron sin tregua al gobierno. Las Cortes mantuvieron vivo el asunto MATESA hasta obligar al jefe del Estado a decretar una amnistía general que impidió el juicio de los responsables políticos del asunto al precio de poner en la calle a tres mil presos por delitos comunes. Por otra parte, una maniobra favorecida por personajes del Movimiento y el entorno familiar de Franco acabó en el matrimonio de su nieta mayor, Carmen, con Alfonso de Borbón, primo de Juan Carlos. Aun cuando las posibilidades de que recayera sobre él la designación como sucesor eran algo más que remotas, la presencia en la escena política de los duques de Cádiz —nuevo título nobiliario otorgado al joven matrimonio— introducía un elemento de incertidumbre en el proceso de sucesión elaborado por Carrero y López Rodó.

A esta sorda lucha entre las facciones del régimen se añadió el mayor activismo de las diversas oposiciones antisistema: obrera, universitaria y nacionalista. En Burgos, la celebración de un consejo de guerra contra miembros de ETA colocó al gobierno al borde de la crisis. La relativa permisividad de las organizaciones obreras clandestinas, que venían actuando desde los órganos de representación de la Organización Sindical,

fue sustituida por un recrudecimiento de la represión, mientras las promesas de liberalización de la prensa quedaban desmentidas por un mayor control de la información que culminó con el cierre del diario *Madrid*. Todos los proyectos de apertura quedaron definitivamente congelados: el proyecto de ley de asociaciones elaborado por el nuevo secretario general del Movimiento, Fernández Miranda, más modesto del que había presentado José Solís, no llegó a ser debatido en el Consejo Nacional.

De modo que la exclusión del gobierno de grupos que seguían siendo poderosos como los «azules» (falangistas que continuaban vistiendo de uniforme en los actos oficiales) y los «católicos» de la ACNP acabó suscitando una involución autoritaria y un recrudecimiento de la represión en medio de un persistente deterioro del clima político. El Movimiento no solo no desapareció sino que se aprestó a reconquistar las posiciones perdidas mientras que otras personalidades del régimen, entre ellas Silva Muñoz, que había dimitido como ministro de Obras Públicas en 1970, adoptaban políticas de semioposición o pretendían establecer bases orgánicas con la mirada puesta en el futuro. Diversos grupos más o menos emparentados con la democracia cristiana, nuevas generaciones del Movimiento o personalidades independientes, comenzaron a aparecer en público, en conferencias, banquetes u homenajes, exponiendo planes de reforma que garantizaran una evolución ordenada y legal del régimen, al abrigo de posibles convulsiones. Surgieron diversas iniciativas y propuestas, como la de Manuel Fraga, con libros y conferencias sobre el centrismo y la fundación de un sucedáneo de asociación política amparada en la figura de sociedad anónima, el Grupo de Orientación y Documentación —GODSA—; o el grupo «Tácito», alentado por Alfonso Osorio y la joven generación de la siempre viva ACNP, que comenzó a publicar semanalmente un artículo en el diario *Ya*, con el propósito de diseñar el tránsito desde dentro del régimen a una democracia limitada sin quebrantos de la legalidad ni tampoco del orden.

En tales circunstancias, el gobierno no pudo evitar el desgaste sufrido en los diversos frentes que permanecían abiertos. Ciertamente, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, se apresuró a cerrar el contencioso existente con Estados Unidos, firmando el nuevo convenio

de amistad y cooperación, y a tranquilizar a los británicos respecto a Gibraltar. Asimismo, el representante español ante el Mercado Común, Alberto Ullastres, accedió a firmar un acuerdo económico preferencial que equiparaba a España con Yugoslavia o Marruecos, en la imposibilidad de alcanzar un estatus similar a Grecia o Turquía. Pero la escasa cortesía mostrada por López Bravo en sus relaciones con la Santa Sede, y con el papa Pablo VI en particular, agudizaron la crisis abierta con la Iglesia católica con la inevitable repercusión interna de alejar del régimen a un sector creciente del episcopado.

Carrero intentó recuperar la iniciativa política formando un nuevo gobierno, por vez primera como presidente, en junio de 1973. Por fin decidido a separar la jefatura del Estado de la del gobierno, Franco dejó a Carrero la iniciativa en la designación de los nuevos ministros. Además de limitar el número de ministros adscritos o vinculados al Opus Dei, Carrero incorporó al nuevo gobierno a burócratas de las generaciones más jóvenes de la ACNP y del Movimiento, a técnicos independientes y, como ministro de la Gobernación, a Carlos Arias, designado por el mismo Franco tal vez a instancias de su entorno familiar. Pero la inmediata desaparición del presidente, tras el atentado de ETA que le costó la vida en diciembre de ese mismo año, dinamitó el proyecto continuista preparado por López Rodó y formalizado en la Ley Orgánica del Estado que concentraba en el futuro rey los supremos poderes político y administrativo y le otorgaba facultades colegislativas. Para explorar las posibilidades de este proyecto se habría requerido la presencia junto al futuro rey de una personalidad de la dictadura con poder suficiente para mantener la disciplina del Ejército y un equilibrio entre todas las facciones que garantizase la continuidad. Es dudoso que esa persona pudiera ser Carrero —o cualquier otro excepto el mismo Franco—, pero, en todo caso, su muerte agudizó la crisis del régimen porque hizo inevitable la salida a la superficie de las diversas estrategias para el futuro alimentadas por cada una de sus facciones.

4.2. DIVISIONES ENTRE LAS FACCIÓNES DEL RÉGIMEN

El nuevo gobierno que sucedió al de Carrero Blanco en enero de 1974 estaba presidido por su ministro de la Gobernación, Carlos Arias, que había ejercido como fiscal en Málaga en los primeros años de posguerra, había sido director general de Seguridad y alcalde de Madrid, y a quien no se atribuían conexiones especiales con ninguna de las facciones del régimen, aun cuando eran notorias sus buenas relaciones con la camarilla familiar de Franco. Tal vez por esta doble cualidad, pensó Franco, para sustituirle, en quien había sido responsable en último término de la clamorosa falta de seguridad que costó la vida al presidente Carrero. En todo caso, Arias formó un gobierno que marcaba no ya el declive sino la desaparición del primer plano político de la alta burocracia vinculada al Opus Dei: ningún ministro de esta procedencia formó parte del nuevo gobierno. El proyecto continuista, encallado en el inmovilismo con el gobierno de Carrero, perdía, con la salida de López Rodó, al segundo de sus arquitectos. Era el momento de ensayar otras posibilidades.

Propuestas para iniciar caminos de reforma, que sin dismantelar al régimen aseguraran una transición ordenada a algún tipo de democracia, no faltaban. Todo el mundo, desde el príncipe Juan Carlos hasta el último burócrata, hablaba de la necesidad de apertura, de liberalización, de reforma. Pero Arias carecía de un proyecto político propio que estuviera dispuesto a llevar a la práctica con energía y decisión. Recuperó para el gobierno, en la persona de Pío Cabanillas, al grupo vinculado a Manuel Fraga, que pretendía incorporar al juego político a las oposiciones moderadas de disidentes cristianodemócratas, liberales y socialdemócratas del régimen con objeto de impulsar una operación de reforma conducida desde el poder: se partía del supuesto de que el régimen podía evolucionar desde dentro. Fraga había proclamado desde 1971 una apertura al centro, amplio terreno en el que situaba al llamado «franquismo sociológico», una mayoría de las clases medias favorecidas por el crecimiento económico y partidarias de una ordenada transición desde el autoritarismo a formas más democráticas de participación política. Tal vez Cabanillas podría, como ministro de Información, impulsar desde el gobierno ese nuevo ensayo de apertura.

El nuevo ministro de la Presidencia, Antonio Carro, ejemplo de carrera política a partir del desempeño de altos cargos en la Administración, se proponía impulsar desde el gobierno la legalización de asociaciones de acción política al margen del Movimiento. Otros políticos con puestos de relieve en cuerpos de la Administración llegaban a segundos niveles de gobierno, como Marcelino Oreja y Landelino Lavilla, ambos del grupo «Tácito», subsecretarios respectivamente de los ministerios de Información y Turismo y de Justicia, o Francisco Fernández Ordóñez, nuevo presidente del INI. Y fueron estos «tácitos» los que, a través del ministro de la Presidencia, ejercieron el primer influjo político sobre el nuevo presidente que el 12 de febrero de 1974 pronunció un discurso en el que dirigió una llamada a participar en la vida política con la promesa de un nuevo Estatuto de Asociaciones que permitiera cambiar la adhesión a Franco por la participación en el régimen. La cuestión más larga e inútilmente debatida durante los últimos diez años en las filas del Movimiento, la posibilidad de abrir canales de participación política a través de «asociaciones» que no fueran partidos, volvía de nuevo al centro de la discusión política, aunque esta vez nadie podía llamarse a engaño: de lo que se trataba era de crear, bajo el control del gobierno, unos sucedáneos de partidos políticos que sirvieran como canales de participación a las fuerzas del régimen o situadas en sus cercanías, disidentes que en tiempos anteriores habían compartido el poder. Por otra parte, Arias había querido asegurar el apoyo de las nuevas generaciones del Movimiento con la incorporación de José Utrera Molina, una concesión a los continuistas, en la Secretaría General del Movimiento.

Pero dos semanas después de la promesa de apertura, el gobierno tuvo que hacer frente a la primera crisis seria, provocada por una homilía del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, en la que pedía el respeto a la lengua y a la identidad cultural vascas y una política de reconocimiento de los derechos de las regiones. La desobediencia del obispo, a quien se pidió que desautorizara y retirara su homilía, fue rápidamente contestada con una orden de arresto domiciliario y la decisión de expulsarle del país. Añoveros respondió a su vez, apoyado por el Vaticano y por el episcopado español, con una amenaza de excomunión ante la que Franco, sensible a los efectos

de una violenta ruptura con la Iglesia, reaccionó obligando a Arias a retirar sus primeras decisiones.

El enfrentamiento con la Iglesia, además de abrir una profunda brecha en el gobierno, favoreció el paso a la ofensiva antiapertura de los sectores del régimen conocidos como «búnker», conjunto de personajes del Movimiento que mantenían estrechas relaciones con sectores inmovilistas de las Fuerzas Armadas y que, a través de ellos o directamente, ejercían presión sobre Franco. Si la cesión de Arias ante la Iglesia podía interpretarse como debilidad, la ejecución el día 2 de marzo de Salvador Puig Antich, un militante del Movimiento Ibérico de Liberación a quien un tribunal militar había encontrado culpable de la muerte de un policía en el momento de su detención, junto al súbdito polaco Heinz Chez, acusado del asesinato de un guardia civil, quiso ser una muestra de fortaleza que sirvió de prólogo al retorno del «búnker» a la escena política de la que ya no se apartaría hasta la muerte de Franco.

Pocas semanas después de estas ejecuciones, y a muy pocos días de la revolución que acabó el 24 de abril con el único régimen en que el franquismo podía mirarse como en un espejo, el portugués, José Antonio Girón, antiguo ministro de Trabajo y relevante personaje del Movimiento, publicó un resonante artículo contra la tímida apertura de Arias cuyos ecos fueron ampliados por una toma similar de posición del teniente general Tomás García Rebull, expresión del sector ultra del Ejército. Los ultras del Movimiento y un sector de las Fuerzas Armadas remataron su ofensiva con la destitución, a mediados de junio, del jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Manuel Díez Alegría, cabeza visible del reformismo militar, y el cese, a finales de octubre, del ministro de Información, Pío Cabanillas, que en abril había pronunciado en Barcelona, tocado de una barretina, un discurso en el que prometió mayor grado de tolerancia y libertad para la prensa. Al cese de Cabanillas, preludio de nuevas restricciones y multas a los medios de información, siguió la dimisión de Barrera y de varios altos cargos de la Administración. Los reformistas replegaban sus posiciones hasta que Franco, muy debilitado tras la enfermedad que obligó a su hospitalización en los meses de julio y agosto y a la sustitución temporal en la jefatura del Estado por el príncipe Juan Carlos, desapareciera de escena.

En el marco de esta ofensiva de los inmovilistas y ultras, el Estatuto de Asociaciones presentado en diciembre de 1974 por Arias ante el Consejo Nacional acabó por liquidar las expectativas que había levantado su discurso del 12 de febrero. El primer proyecto del ministro de la Presidencia, Antonio Carro, que admitía el derecho de asociación sin control del Movimiento, fue desechado en favor del apadrinado por el ministro secretario general del Movimiento, Utrera Molina, entregado aquel año con renovado entusiasmo a revitalizar las organizaciones juveniles para arropar y vitorear a Franco en las concentraciones del Frente de Juventudes. Su Estatuto de Asociaciones, además de exigir 25 000 afiliados y presencia en quince provincias para formar una asociación política, reafirmaba la obligatoriedad de inscribirla en el Movimiento: el pluralismo político, según Utrera, no podía rebasar el ámbito de lo limitado por los Principios Fundamentales. Con la primera de sus condiciones se garantizaba que ninguna asociación vasca o catalana pudiera ser legalizada, ya que por definición ninguna podría estar implantada en más de tres o cuatro provincias; con la segunda, se cerraba la puerta a la incorporación de la oposición democrática, pues ninguno de los partidos o grupos políticos podía aceptar su conversión, siquiera formal, en una asociación del Movimiento.

También rechazó el Estatuto de Asociaciones la moderada oposición que por entonces no se había proclamado aún como decididamente democrática. Al conocerse el cese de Cabanillas y la dimisión de Barrera, la mayor parte del grupo «Tácito» dio por cerrada una vía hacia la reforma. Si Osorio y sus amigos democristianos intentaron el juego asociativo en el estrecho margen dejado por el Estatuto, otros relevantes personajes del grupo, con Marcelino Oreja al frente, se manifestaron en contra. Manuel Fraga, embajador en Londres, que viajó a Madrid en enero de 1975 y presentó al gobierno un plan de reformas con la exigencia mínima de una cámara elegida por sufragio universal, prefirió no embarcarse en la operación cuando su escrito fue rechazado. Mantuvo su opción por un nuevo tipo de partidos camuflados bajo el manto de fundaciones para el estudio de los problemas políticos. Era, ante la imposibilidad de fundar

partidos, la hora de las sociedades mercantiles, clubs o grupos de estudios que aglutinaban a unas docenas de personas.

Naturalmente, todo eso acabó en fragmentación e impotencia: las grandes burocracias que habían servido como viveros de los que el régimen extrajo durante sus primeras décadas el personal político dieron paso a esta política en migajas que consistía en una miríada de pequeños grupos formados en torno a personalidades políticas que en un momento u otro habían servido al régimen desde altas posiciones de poder. Algunas de esas personalidades intentaron llegar a acuerdos que permitieran la creación de una organización capaz de dirigir el proceso de transición que la decadencia física de Franco hacía inminente. Un intento de alianza de todos los reformistas procedentes de la dictadura, propuesta por Osorio en los primeros días del nuevo año de 1975 y patrocinada por el príncipe Juan Carlos, se diluyó en varias iniciativas de las que la sociedad FEDISA, liderada por Fraga y a la que se incorporaron Areilza, Cabanillas y Calvo Sotelo, fue uno de los ejemplos. El sector de la democracia cristiana aglutinado en torno a Silva aceptó, sin embargo, el juego de las asociaciones y fundó Unión Democrática Española, que Osorio se encargó de dirigir. Por su parte, los líderes del Movimiento también se aprestaron a reunir a sus huestes con la fundación de asociaciones como Unión del Pueblo Español, mientras las diferentes Hermandades de Excombatientes se unían en una confederación dispuesta a echarse de nuevo al monte invocando la gesta del 18 de julio.

4.3. CRISIS ECONÓMICA

Todo esto ocurría en medio de una crisis económica a la que los gobiernos presididos por Carlos Arias fueron incapaces de hacer frente. A partir del Plan de Estabilización y Liberalización, España había construido una economía muy vinculada a la europea, aunque sin romper decididamente con los elevados aranceles, las prácticas proteccionistas y las políticas discrecionales de subvenciones y estímulos fiscales, que la hacían escasamente competitiva con el exterior. Mientras del exterior llegaron

impulsos positivos en forma de transferencias de capital, remesas de emigrantes o divisas de turistas, España pudo beneficiarse de esa expansión descuidando, sin embargo, atacar los problemas de desequilibrio interno creados por un proceso de desarrollo escasamente dirigido y con múltiples rasgos del capitalismo corporativo de épocas anteriores. El triunfalismo desarrollista que perduró hasta bien entrados los años setenta impidió tomar medidas para afrontar los primeros síntomas de que el ciclo expansivo de las economías europeas y americana podía estar llegando a su fin.

Y sin embargo, desde 1971 había ya síntomas de la posibilidad de tal contingencia. Los graves problemas de la balanza norteamericana, agudizados por la guerra de Vietnam, aceleraron el proceso de hundimiento del sistema monetario internacional de Bretton Woods y culminaron en la devaluación del dólar, la tendencia a la fluctuación de las monedas y una creciente inflación. Poco después, los países productores de petróleo elevaron el precio del crudo en un solo año en un 500%, lo que provocó fuertes problemas para la balanza de pagos de todos los países de la OCDE. Este aumento del precio del petróleo se vio acompañado además de una fuerte alza de otros productos básicos, debido a las malas cosechas y a la escasez de materias primas provocada por la fuerte demanda del período anterior.

Todos esos factores, condensados en 1973, provocaron en 1974 una fuerte recesión en el conjunto de países de la OCDE. España estaba particularmente mal preparada para hacer frente a una crisis de las características ya señaladas: integrada en el sistema mundial, si bien en una posición periférica y dependiente, España se encontraba, como en la crisis de 1929, con un sistema de capitalismo fuertemente protegido, con rasgos muy corporativos y en un momento de aguda crisis política. Curiosamente, las dos grandes crisis económicas de nuestro siglo —1929 y 1974— acontecieron en dos años que fueron en España vísperas de profundos cambios políticos. La forma de integración en la economía mundial, el carácter corporativo del capitalismo español y la crisis del sistema político tendrán fuertes repercusiones en la incidencia de la crisis en España que, contrariamente a lo ocurrido en 1930, no pudo quedar al abrigo de ella por ser ahora muy superior su grado de integración con la economía mundial.

La principal, pero no única, desventaja relativa de España radicaba en una mayor dependencia de los productos energéticos y especialmente del petróleo. El porcentaje de consumo de petróleo dentro del total de energía primaria ascendía en 1973 a cerca del 70%, frente al 55% de los países de la OCDE. De ese petróleo, el 99% era importado, frente al 70% que consumían los de la OCDE. Por otra parte, la expansión de los años anteriores se había realizado en industrias muy intensivas en consumo de energía primaria, especialmente de petróleo, y los españoles habían accedido desde muy poco tiempo antes al consumo masivo de energía para usos privados: fueloil doméstico, gasolina. Todo ello hizo que en lugar de ajustar rápidamente la demanda a las nuevas condiciones del mercado, España siguiera importando petróleo en mayores cantidades durante los primeros años de la crisis.

Estas importaciones incidían sobre una balanza comercial que se había caracterizado durante todo el período anterior por un déficit crónico, que no llegaba a cubrir por completo los saldos favorables de la balanza de servicios y transferencias. Resultado de ello era que la balanza por cuenta corriente se cerrase en más de la mitad de los años de expansión con saldos negativos. El aumento del precio de las importaciones entre 1973 y 1974 provocó un fuerte aumento en el déficit de la balanza comercial debido en su práctica totalidad a los nuevos precios del petróleo. La crisis europea hizo descender en términos reales el superávit de la balanza de servicios a causa especialmente del descenso o estancamiento de las partidas de turismo. Estas dos causas provocaron durante cuatro años un fuerte déficit en la balanza por cuenta corriente que solo comenzaría a corregirse en 1977, cuando tras las primeras elecciones democráticas se tomaron las primeras medidas de ajuste y, a la vez, se reanudó la buena marcha de la balanza de servicios porque los turistas europeos volvieron a gastar en España.

La economía española, como las europeas, había experimentado durante los años sesenta un continuo crecimiento de los precios al consumo que se aceleró debido a la favorable situación del mercado y al exceso de demanda en los años 1971-1972 hasta superar en España el 10%. La mayor dependencia petrolífera y la falta de una política económica que frenara la

aceleración inflacionista iniciada en 1971 hicieron que los nuevos precios de las materias primas tuvieran sobre los precios interiores un efecto muy superior al experimentado por los países de la OCDE que, por otra parte, habían controlado mejor la inflación en la década anterior. En España, los precios al consumo subieron un 11,4% en 1973; es decir, antes de que la crisis mundial dejara sentir sus efectos, se había alcanzado ya la inflación de los temibles dos dígitos. En esta carrera inflacionista tuvo un papel determinante, además de los conocidos desequilibrios de la economía española y su mayor dependencia de materias primas, la apertura del período de crisis final del régimen franquista. Se trata, en efecto, de un año en el que prácticamente no hay gobierno y, desde luego, en el que no hay política económica. La inestabilidad y debilidad política se agravó todavía más en 1975, con la recaída de Franco en su enfermedad, las divisiones en el seno de la clase política del franquismo, la mayor actividad de la oposición, el fusilamiento de cinco militantes de ETA y FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), la condena internacional del régimen y, finalmente, la muerte de Franco. Un año después, en los primeros meses de 1977, la inflación llegó a rozar el 30%.

La debilidad política de los primeros cinco años de crisis económica actuó sobre la aceleración de la inflación de una doble manera. Ante todo, porque nadie tenía autoridad para formular en un período de grave crisis de Estado una política restrictiva, encaminada a contener la demanda. Además, porque la inflación acelerada y la misma crisis política favorecieron una mayor movilización obrera y, en general, de los asalariados, que actuaron no solo con el objetivo de no perder por la inflación los incrementos reales de salarios obtenidos durante la época de expansión, sino de conseguir aumentos que superasen la inflación y permitieran elevar durante la crisis el nivel de vida de los trabajadores. Así, en un clima de movilización social cuyos objetivos eran a la vez sindicales y políticos —mayores salarios pero también reivindicación de la democracia—, los salarios reales crecieron en España por encima de la inflación. Se produjo, pues, una situación caracterizada simultáneamente por el empobrecimiento interior —evidente en el fuerte déficit de la balanza comercial, con la pérdida de renta nacional

disponible de tres puntos porcentuales— y el crecimiento galopante de la inflación.

4.4. HACIA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Desde finales de la década de los sesenta hasta 1975, año de la muerte de Franco, se produjo un lento pero imparable desmoronamiento del régimen. Dos tendencias, que se conocían con el nombre de *continuismo* —sustancial mantenimiento del *statu quo*— y *aperturismo*, que indicaba un reformismo controlado y moderado, acentuaban los contrastes y las contradicciones existentes en el aparato de gobierno. El acoso de la oposición, la maduración del proceso de crítica al régimen en numerosos sectores y el recrudecimiento de la represión provocaban continuas tensiones sociales y políticas que contrastaban con las directrices de «orden y paz» y las reiteradas llamadas al «espíritu de la Cruzada» de Carrero Blanco.

El estado de excepción de 1969 —que se volvió a proclamar al año siguiente con ocasión del proceso de Burgos—, la muerte de algunos trabajadores durante enfrentamientos y manifestaciones de protesta, los actos selectivos de intimidación (juicios, arrestos domiciliarios, despidos o suspensiones del trabajo), hasta llegar a la ejecución de la condena a muerte de cinco militantes de ETA y del FRAP en septiembre de 1975, tuvieron como consecuencia movilizaciones generalizadas y una creciente conciencia de la necesidad de libertad de prensa, de reunión y de asociación, cada vez más acuciante ya que el estado de excepción conllevaba la suspensión del Fuero de los Españoles y restablecía la censura previa.

En 1963 se había creado el Tribunal de Orden Público (TOP), que sustituía a la jurisdicción militar salvo para algunos delitos como el terrorismo. Entre 1964 y 1976, el TOP procesó a 8943 personas (Del Águila, 2001, págs. 260-261). Su actividad fue especialmente intensa entre 1973 y 1975, años caracterizados por la extensión de la conflictividad obrera y por huelgas frecuentes. En realidad, la represión no hacía más que acelerar la convergencia entre reivindicaciones sociales y objetivos

políticos. Un importante factor de cohesión era la solidaridad, que ampliaba la base de movilización y concienciaba a crecientes sectores de la opinión pública.

Multas, secuestros y cierres eran los instrumentos utilizados contra la prensa que se pronunciaba a favor de la democracia, pero, en realidad, estas medidas provocaban el efecto contrario: aumentaban las ventas de las publicaciones y ponían de manifiesto el carácter anacrónico de la censura. El diario *Madrid*, dirigido por Calvo Serer, pasado a las filas de la oposición, recibió varias sanciones a causa de su línea editorial independiente, hasta que fue clausurado en 1971. Sanciones se adoptaron también contra revistas católicas como *Cuadernos para el diálogo*, *Serra d'Or* y *El Ciervo*. La revista semanal *Triunfo* se transformó en un importante instrumento de información sobre temas de la actualidad y acontecimientos nacionales; periódicamente publicaba entrevistas y artículos firmados por nombres prestigiosos sobre temas de política internacional y culturales. La revista contribuyó también al conocimiento de los Coloquios de Historia Contemporánea de la Universidad de Pau, organizados por el historiador Manuel Tuñón de Lara, que dieron un fuerte impulso a la renovación metodológica de la historiografía española. Entre las actuaciones de la censura contra *Triunfo*, cabe señalar la suspensión de un número de 1971 en el que se habían publicado opiniones sobre la crisis del matrimonio y una reproducción del *Adán y Eva* de Durero en la portada, y la suspensión durante cuatro meses del número de abril de 1975, por un artículo dedicado al carácter inevitable del *cambio*. (Ezcurra, 1995, págs. 519-520). Una considerable difusión alcanzó la revista *Cambio 16*, cuya tirada, en diciembre de 1975, era de 300 000 ejemplares y que, precisamente aquel año, fue obligada a suspender su publicación durante tres semanas. *Triunfo* comentó lo sucedido en un editorial en el que se denunciaban la arbitrariedad y el carácter represivo de la Ley de Prensa, así como las graves consecuencias económicas que las sanciones acarreaban para muchos sujetos «... desde los fabricantes de papel hasta los vendedores de periódicos, pasando por los talleres de impresión y por los colaboradores de la publicación. La lista de víctimas es amplia aunque la

primera víctima sea una forma de libertad: la de informar y la de opinar» (pág. 617).

Estas revistas, junto a muchas otras publicaciones menores, eran portavoces de una disidencia que ponía en tela de juicio también el retraso en las costumbres y en los estilos de vida, desempeñando un papel importante en el aprendizaje del lenguaje del pluralismo y de la crítica.

La necesidad de *cambio*, aunque con modalidades diferentes, era reivindicada por muchos sectores sociales, conscientes de la anomalía de España respecto a las democracias europeas; se hacía cada vez más difícil separar la demanda de modernidad de la democracia. El gran número de españoles que cruzaba la frontera francesa para comprar libros o ver películas prohibidas en España revelaba la difusión de los modelos de consumo europeos y una evolución de las costumbres que ninguna censura podía detener. La exigencia de *cambio* iba penetrando también en las capas medias incluyendo a sectores profesionales (los abogados laboristas desarrollaron una activa solidaridad defendiendo los derechos de los trabajadores), en el mundo del espectáculo, e incluso entre los dirigentes empresariales, interesados en una mayor incorporación de España a Europa.

Grupos y movimientos empezaron a utilizar la combinación de acciones legales e ilegales ya inaugurada por el movimiento obrero. A veces algunos acontecimientos externos, como la proclamación del Año Internacional de la Mujer por parte de la ONU, en 1975, favorecían la denuncia y la agregación. Contra el intento del gobierno de controlar la iniciativa a través de una comisión oficial presidida por Pilar Primo de Rivera, las asociaciones de mujeres (amas de casa, mujeres separadas, mujeres universitarias) enviaron a la prensa y a la ONU un documento, firmado también por algunas asociaciones católicas, en el que se denunciaba, de manera muy detallada, la marginación femenina en España. En diciembre del mismo año, a los pocos días de la muerte de Franco, se desarrollaban en Madrid, en una situación de semiclandestinidad, las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer.

Una experiencia original y compleja fue la conocida con el nombre de «movimiento ciudadano», que se extendió por los barrios mediante comités llamados Asociaciones de Vecinos. El movimiento de barrios veía la

aportación política y organizativa de militantes de los partidos y sindicatos, así como la participación de la HOAC y la JOC, que frecuentemente ponían a disposición sus centros y locales. Las mujeres desempeñaban un papel destacado, ya que conseguían conjugar la red de solidaridad en torno a los múltiples problemas de la cotidianidad con la demanda de servicios sociales, lo cual a menudo representaba un primer paso hacia la politización y la movilización por el derecho de asociación y de reunión.

En este clima, los juicios públicos y las respuestas autoritarias se volvían en contra del régimen tanto en España como en el exterior. El proceso de Burgos, el juicio contra los dirigentes sindicales en 1973 o la protesta de Añoveros —que marcó un momento emblemático de la crisis entre Estado e Iglesia—, no solo ponían al descubierto la fragilidad del régimen, sino que fortalecían la solidaridad internacional. El consejo de guerra celebrado en Burgos en 1970 contra miembros de ETA imputados del asesinato de un inspector de policía, llevó al banquillo de los acusados también a dos sacerdotes y concluyó con nueve condenas a muerte. La defensa fue ejercida por un grupo de prestigiosos abogados, entre los que figuraba el socialista Gregorio Peces-Barba, que sería uno de los padres de la Constitución de 1978.

Pocos días antes del proceso (aún más dramático tras el secuestro por ETA del cónsul alemán en San Sebastián Eugenio Behil), trescientas personas, intelectuales y exponentes del mundo de la cultura y del espectáculo, se encerraban en el monasterio de Montserrat. En un piso de Madrid fueron detenidas (según informaba el *ABC* del 28 de noviembre de 1970) diecinueve personas por «reunión clandestina». Entre ellos: Tierno Galván, intelectual socialista, el escritor López Salinas y el director de cine Bardem, estos dos últimos militantes del PCE.

La fuerte presión interna y externa impulsada por el proceso de Burgos obligó a Franco a conceder el indulto en diciembre de 1970.

En 1973, en una situación de máxima tensión, se celebró el juicio contra prestigiosos dirigentes de Comisiones Obreras. Un año antes, Nicolás Sartorius, Marcelino Camacho, líder histórico de Comisiones Obreras, y el «cura obrero» Francisco García Salve habían sido sorprendidos por la policía en una reunión clandestina en el convento de los Oblatos de Pozuelo

de Alarcón. Juzgados por el TOP, fueron defendidos por Ruiz-Giménez, por entonces líder de Izquierda Democristiana. La primera sesión del juicio empezó el mismo día en que ETA asesinó a Carrero Blanco. El prestigio de los acusados, el carácter «ejemplar» de las condenas —que iban de un mínimo de doce a un máximo de veinte años de cárcel, sucesivamente rebajadas por el Tribunal Supremo—, hicieron que el proceso tuviera una gran resonancia tanto en España como en el extranjero. El grupo dirigente dejó la cárcel de Carabanchel de Madrid en diciembre de 1975, gracias a la concesión del indulto.

También se tomaron medidas represivas contra altos cargos del Ejército. El general Manuel Díez Alegría —jefe del Alto Estado Mayor— fue destituido por haber defendido la necesidad de modernizar y profesionalizar el Ejército, así como de reducir lo más posible su intervención en la vida política. Como consecuencia de la «primavera de los claveles» del vecino Portugal nació la Unión Militar Democrática, promovida por jóvenes oficiales partidarios de la democratización del Ejército. Algunos de ellos fueron procesados por «conspiración para rebelión», condenados a cinco años de cárcel y amnistiados en 1976. Entre los oficiales figuraba Restituto Alcázar Valero, que debía su nombre de pila al hecho de haber nacido durante el asedio del alcázar de Toledo. Un ejemplo este de cómo la conciencia antifranquista podía desarrollarse a través de una trayectoria personal. Además de los casos que hemos señalado —Ridruejo, Ruiz-Giménez, Laín Entralgo, Díez Alegría, y otros muchos— hay que recordar al jesuita José María Llanos, que de franquista pasó a ser, en los años cincuenta, una de las voces críticas más eficaces del régimen.

Indudablemente la Iglesia desempeñó un papel decisivo en la progresiva deslegitimación y pérdida de credibilidad del régimen. A finales de los años sesenta, los efectos del Concilio Vaticano II alcanzaron también a la jerarquía eclesiástica, aunque esta aparecía todavía dividida y con distintas respuestas ante la cada vez más frecuente implicación de curas obreros en las luchas de los trabajadores, o ante la utilización de iglesias y conventos para reuniones y huelgas de hambre a favor de la amnistía y de los derechos civiles.

Existían, además, sectores minoritarios defensores de un catolicismo integrista, que se expresaban a través de la revista *Fuerza Nueva*, fundada por Blas Piñar en 1966. En esta línea se encontraba también el grupo denominado Guerrilleros de Cristo Rey, nostálgico de la España de la Cruzada, protagonista de acciones violentas y promotor de manifestaciones político-religiosas, como la «Concentración Mariana para la salvación de España» que se celebró en el parque del Retiro de Madrid en 1972 (Hermet, II, pág. 419).

Sin embargo, la represión, que a menudo afectaba a militantes de asociaciones católicas e incluso a sacerdotes, generaba contradicciones en sectores de la jerarquía eclesiástica que aún mostraban cierta resistencia al cambio y al *aggiornamento* impulsado por el Concilio. La renovación doctrinal y teológica contenida en las encíclicas y de la que se hacían eco las revistas *Ecclesia*, *El Ciervo*, *Iglesia viva*, *Cristianos por el socialismo* y *Vida Nueva*, proporcionaba un importante soporte teórico a la crítica y a la revisión de las modalidades de interacción entre Estado e Iglesia que habían caracterizado a la dictadura franquista. El nombramiento de Vicente Enrique y Tarancón como arzobispo y cardenal primado de Toledo, en 1969, después del fallecimiento de Pla y Deniel, supuso sin duda una aceleración en ese sentido. Como comenta José María Piñol: «... desde aquel momento fue patente, incluso para la cúpula franquista, que él era el prelado destinado por la Santa Sede y por el mismo Pablo VI, para impulsar la transición en la Iglesia» (Piñol, 1999, pág. 462).

Dos años después, la crítica al papel desempeñado por la Iglesia en la Guerra Civil se formalizó en la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes celebrada en Madrid. Se aprobó por mayoría la siguiente resolución: «Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está en nosotros (I Jn 1, 10). Así, pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos “ministros de reconciliación” en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos» (Raguer, 2008, pág. 405). A pesar de que en la votación final no se consiguieron los dos tercios de votos requeridos para que la resolución fuera considerada texto oficial, la autocrítica ponía en tela

de juicio la legitimidad de la Cruzada y, en consecuencia, uno de los fundamentos del nacionalcatolicismo.

La elección de Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal Española dio un giro decisivo a este importante organismo. En el caso Añoveros, la CEE se manifestó con claridad a favor del prelado. En septiembre de 1975, durante el proceso contra los militantes del FRAP y de ETA, hizo público un comunicado de condena del terrorismo, en el que se incluía una petición de «defensa de los derechos y deberes de la persona humana», conforme a las directrices de *Pacem in terris*, y se defendía la legitimidad de la crítica y de la oposición al gobierno. Además, se pedía clemencia para los condenados.

El período comprendido entre 1973 y 1975 estuvo marcado por una creciente generalización del disenso contra el régimen y por la reorganización de los partidos y de sus estrategias en condiciones de semiclandestinidad, pero también por un incremento del terrorismo.

En lo que se refiere a los partidos, tanto sus actividades como sus líneas políticas estaban sin duda condicionadas por cuarenta años de lucha en la clandestinidad —sobre todo para el PCE— o en el exilio, como ocurría con el PSOE, las dos mayores organizaciones de la izquierda. Sin embargo, en las estrategias que se adoptaron para superar la etapa del franquismo se fueron perfilando cambios, reestructuraciones y fragmentaciones. A la izquierda del PSOE, reorganizado por Felipe González, nacían el PT (Partido del Trabajo) y el PSP (Partido Socialista Popular), fundado por Tierno Galván. Igualmente, el PCE que, bajo el liderazgo de Santiago Carrillo, en 1968 se había distanciado de la Unión Soviética sobre la cuestión de la invasión de Checoslovaquia y se declaraba «eurocomunista», pagaba estas opciones con la aparición a su izquierda de otras formaciones, entre ellas el FRAP. En una primera fase, y a pesar de que los objetivos comunes eran muchos, los dos partidos, socialista y comunista, tuvieron dificultades para encontrar un equilibrio entre el empuje hegemónico y la convergencia en los objetivos políticos y las estrategias de lucha.

En 1974, el PCE presentó en París el programa de la Junta Democrática, en el que se pedía la amnistía para los detenidos políticos, la legalización de los partidos, las libertades democráticas, el reconocimiento de «la

personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente» y la celebración de una consulta democrática para elegir la forma de Estado, a partir de la constitución de un gobierno provisional. Esta línea, llamada «ruptura democrática», obtuvo la adhesión del PSP, del PT y de Comisiones Obreras.

El PSOE, que salía de una difícil reestructuración del aparato dirigente iniciada en el Congreso de Toulouse de 1972 y culminada dos años después en el de Suresnes, creó en junio de 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática a la que se adhirieron el PNV, la Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez, la Unión Socialdemócrata Española fundada por Dionisio Ridruejo, algunos partidos regionales y la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores). Las reivindicaciones eran muy similares a las presentadas por el Partido Comunista en su programa, pero no se pedía la constitución de un gobierno provisional. En cambio, a partir de 1971, se fue formando un frente unitario con la Asamblea de Cataluña, constituida en los locales de la iglesia de San Agustín de Barcelona. En ella convergían todas las formaciones políticas catalanas antifranquistas, incluidas Comisiones Obreras, el PSUC y el MSC (Movimiento Socialista Catalán). El programa, además de la recuperación del Estatuto como primer paso hacia la autodeterminación, proponía la amnistía para los detenidos políticos y los exiliados, las libertades democráticas y la «coordinación de todos los pueblos peninsulares en la lucha por la democracia».

En el ámbito sindical, además de Comisiones Obreras, que contaba entre sus filas con una mayoría de militantes del Partido Comunista y mantenía una fuerte capacidad de convocatoria, iban cobrando importancia sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO), fundada en los años sesenta y constituida por católicos y socialistas independientes, y UGT, el antiguo sindicato socialista liderado por Nicolás Redondo.

Sin embargo, en estos dos años, la reorganización de las fuerzas políticas y la conquista de espacios de libertad tenían que confrontarse con el aumento de las acciones terroristas por parte de ETA y de otras organizaciones. El asesinato de Carrero Blanco, el atentado —también obra de ETA— en el café Rolando de Madrid, cerca de la Dirección General de Seguridad, que provocó muertos y heridos, así como otros atentados del

FRAP contra miembros de la policía, hasta llegar al proceso de 1975, crearon un clima de tensión e hicieron aumentar las medidas represivas de un gobierno Arias cada vez más desorientado. El año 1975 fue el del estado de excepción, del decreto que regulaba los conflictos colectivos de trabajo y de la ley contra el terrorismo. Fue también el año en el que, a pesar de la movilización nacional, las protestas internacionales y la solicitud de clemencia de Pablo VI, se aplicaron las penas capitales a los miembros de ETA y del FRAP acusados de participar en atentados contra la policía.

El 1 de octubre de 1975 Franco hizo su última aparición en público dirigiéndose a miles de españoles desde el balcón del Palacio Real de la Plaza de Oriente y, ante la muchedumbre que lo aclamaba, denunció la conspiración internacional «masónica» y «comunista». Pocos días después ingresaba en el hospital, y tras una larga agonía, murió el 20 de noviembre de 1975. El 27 de noviembre el cardenal Tarancón, durante la misa celebrada «con motivo de la exaltación del rey Juan Carlos I al trono de España», leyó una homilia en la que refrendaba el mensaje de la encíclica *Gaudium et Spes* afirmando la separación entre Estado e Iglesia: «La fe cristiana no es una ideología política ni puede ser identificada con ninguna de ellas, dado que ningún sistema social o político puede agotar toda la riqueza del Evangelio, ni pertenece a la misión de la Iglesia presentar opciones o soluciones concretas de gobierno en los campos temporales de las ciencias sociales, económicas o políticas. La Iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política y si alguien utiliza su nombre para cubrir sus banderías, está usurpándolo manifiestamente».

La muerte del dictador marcaba de hecho el fin del régimen. En la oposición se intensificaban los encuentros orientados a la construcción de un frente unitario. En 1976 las dos principales agrupaciones —Junta Democrática y Plataforma de Convergencia— se disolvían y creaban Coordinación Democrática. Esta formación hacía hincapié, además de en los objetivos democráticos compartidos por la Junta y la Plataforma, en la «realización de la ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un período constituyente que conduzca, a través de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma del Estado y

del Gobierno, así como la defensa de las libertades y de los derechos políticos durante este período» (Doc. 12^[*]).

Entre 1976 y 1977 se sucedieron etapas decisivas para la transición hacia la democracia: la autodisolución de las Cortes y la convocatoria de las primeras elecciones generales en cumplimiento de la Ley para la Reforma Política, aprobada de forma casi plebiscitaria mediante referéndum. Fueron momentos en los que no faltaron tensiones y provocaciones, y que estuvieron jalonados por continuas movilizaciones populares. En muchas ocasiones, la sociedad española dio prueba de un notable autocontrol, que se sumó a la capacidad del gobierno y de los líderes políticos de compaginar modalidades y tiempos del paso a la democracia. Gracias a la acción y a la presión unitaria de las formaciones políticas se obtuvo la legalización de todos los partidos, incluido el PCE. En esta fase de transición, además del pueblo español, el rey Juan Carlos I, el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, y los dirigentes de la oposición, desempeñaron un papel decisivo.

El 15 de junio de 1977, cuarenta años después del último sufragio, se celebraron las primeras elecciones democráticas en España.

RESUMIENDO...

La división existente en el régimen entre los sectores partidarios del inmovilismo, los *aperturistas* moderados y el gobierno de Carrero Blanco apoyado por los tecnócratas del Opus Dei, pone en evidencia la dicotomía entre la sociedad española, en plena evolución, y la política del régimen.

En la década que precede a la muerte de Franco, la represión y el estado de excepción constituyen la respuesta del régimen ante los conflictos obreros, las protestas estudiantiles y la movilización intelectual, mientras amplios sectores de la jerarquía eclesiástica se distancian de la dictadura. Simultáneamente, los nacionalismos vasco y catalán adquieren cada vez más fuerza. Después del asesinato de Carrero Blanco, ETA, ya militarizada, incrementa sus acciones terroristas.

El régimen, en creciente crisis, ejecuta las últimas condenas a muerte en 1975, suscitando protestas en España y en el extranjero. Un año después de la muerte de Franco, partidos tradicionales y nuevas formaciones, apoyados por una oposición generalizada, elaboran una plataforma común a través de Coordinación Democrática, etapa fundamental para la puesta en marcha de la transición democrática.

Apéndice documental

DOCUMENTO 1

Discurso de unificación

Salamanca, 18 de abril de 1937

En el nombre sagrado de España y en nombre de cuantos han muerto, desde siglos, por una España grande, única, libre y universal, me dirijo a nuestro pueblo para decirle:

Estamos ante una guerra que reviste, cada día más, el carácter de Cruzada, de grandiosidad histórica y de lucha trascendental de pueblos y civilizaciones. Una guerra que ha elegido a España, otra vez en la Historia, como campo de tragedia y de honor, para resolverse y traer la paz al mundo enloquecido hoy.

Lo que empezó el 17 de julio como una contienda nuestra y civil, es ahora una llamada que iluminará el porvenir por centenios.

Con la conciencia clara y el sentimiento firme de mi misión ante España, en estos momentos, de acuerdo con la voluntad de los combatientes españoles, pido a todos una sola cosa: *Unificación*.

Unificación para terminar enseguida la guerra. Para acometer la gran tarea de la paz, cristalizando en el Estado nuevo el pensamiento y el estilo de nuestra Revolución Nacional.

Esta unificación que yo exijo en nombre de España, y en el sagrado nombre de los caídos por ella, no quiere decir *conglomerado* de fuerzas, ni *concentraciones* gubernamentales, ni uniones más o menos patrióticas y sagradas. Nada de inorgánico, fugaz, ni pasajero es lo que yo pido.

Pido unificación en la marcha hacia un objetivo común. Tanto en lo interno como en lo externo. Tanto en la fe y en la doctrina como en sus

formas de manifestarlas ante el mundo y ante nosotros mismos.

El Movimiento que hoy nosotros conducimos es justamente esto: un Movimiento más que un programa. Y como tal está en proceso de elaboración y sujeto a constante revisión y mejora, a medida que la realidad lo aconseje. No es cosa rígida ni estática, sino flexible. Y que —como movimiento— ha tenido por tanto diferentes etapas.

La primera de estas etapas, a la que podríamos llamar ideal o normativa, es la que se refiere a todos los esfuerzos seculares de la Reconquista española para cuajarse en la España unificada e imperial de los Reyes Católicos, de Carlos V y de Felipe II, aquella España unida para defender y extender por el mundo una idea universal y católica, un Imperio cristiano, fue la España que dio la norma ideal a cuantas otras etapas posteriores se hicieron para recobrar momento tan sublime y perfecto de nuestra Historia.

La segunda etapa la llamaríamos histórica o tradicionalista. O sea: cuantos sacrificios se intentaron a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, para recuperar el bien perdido sobre las vías que nos señalaba la tradición imperial y católica de los siglos XV al XVII. La mayor fatiga para restaurar aquel momento genial de España, se dio en el siglo pasado, con las guerras civiles, cuya mejor explicación la vemos hoy en la lucha de la España ideal —representada entonces por los carlistas— contra la España bastarda, afrancesada y europeizante de los liberales.

La tercera etapa es aquella que denominaremos presente o contemporánea, y que tiene a su vez diferentes esfuerzos sagrados y heroicos al final de los cuales está el nuestro integrador.

Primer monumento de esta tercera etapa, fue el régimen de D. Miguel Primo de Rivera. Momento puente entre el Pronunciamiento a lo siglo XIX y la concepción orgánica de esos movimientos que en el mundo actual se han llamado «fascistas o nacionalistas».

El segundo momento —fecundísimo, porque arrancaba de una juventud que abría puramente los ojos a nuestro mejor pasado apoyándose en la atmósfera espiritual del tiempo presente— fue la formación del grupo llamado JONS (Juntas Ofensivas Nacional-Sindicalistas), el cual fue pronto ampliado e integrado con la aportación de Falange Española, y todo él asumido por la gran figura nacional de José Antonio Primo de Rivera, que

continuaba así, dándole vigor y dimensión contemporánea, al noble esfuerzo de su padre, e influyendo en otros grupos más o menos afines de católicos y de monárquicos que permanecieron hasta el 18 de julio, y aun hasta hoy, en agrupaciones también movidas por noble propósito patriótico.

Esta era la situación de nuestro Movimiento, en la tradición sagrada de España, al estallar el 17 de julio, instante ya histórico y fundamental, en que todas esas etapas, momentos y personas, influyeron para la lucha común.

Ante todo: Falange Española de las JONS, con un martirologio, no por reciente menos santo y potente que los mártires antiguos históricos, aportaba masas juveniles y propagandas recientes que traían un estilo nuevo, una forma política y heroica del tiempo presente, y una promesa de plenitud española.

Navarra desbordó el embalse, acumulado tenazmente durante dos siglos, de aquella tradición española que no representaba carácter alguno local ni regional, sino al contrario: universalista, hispánico e imperial, que se había conservado entre aquellas peñas inexpugnables, esperando el momento oportuno para intervenir y derramarse; portando una fe inquebrantable en Dios y un gran amor a nuestra Patria.

Otras fuerzas y elementos encuadrados en diferentes organizaciones y milicias, también acudieron a la lucha.

Todas estas aportaciones al 17 de julio —vértice decisivo para el combate final que aguardaba nuestra Historia— han luchado hasta ahora, encuadradas en lo militar, por los cuadros de mando de nuestro Ejército glorioso, y en lo político y civil, por sus respectivos grupos, jefes y consignas.

Por tanto, en vista de las supremas razones ya expuestas, esto es: el enemigo enfrente, y la coyuntura histórica de una etapa integradora de todas las anteriores a nosotros, decidimos, ante Dios y ante la Nación española, ¡dar cima a esta obra unificadora! Obra unificadora que nos exige nuestro pueblo y la misión por Dios a nosotros confiada.

Para llevarla a cabo nosotros ofrecemos dos cosas: la primera, que mantendremos el espíritu y el estilo que la hora del mundo nos pide y que el genio de nuestra Patria nos ofrece, luchando lealmente contra toda bastardía y todo arrivismo. Queremos milites, soldados de la fe y no politicastos ni

discutidores; y la segunda, que nuestro corazón y nuestra voluntad quedarán fijos en los combatientes del frente y en la juventud de España...

Y ahora yo les diría a las naciones que, carentes de sensibilidad e invadidas de un materialismo destructor, venden su prensa al oro de los rojos, entregan sus *radiodifusoras* a las propagandas criminales, comercian con los productos del robo y estrechan las manos de los salteadores y asesinos, que el enemigo mayor de los Imperios, que el más fuerte peligro para los países no son los vecinos que un día lucharon noblemente en las fronteras, o los que resurgiendo a la vida internacional, con pujanza no igualada, reclaman un puesto en el disfrute del mundo; ha nacido un peligro mayor que es el bolchevismo destructor, la revolución en marcha del comunismo ruso;...

Se invoca en las propagandas rojas la democracia, la libertad del pueblo, la fraternidad humana, tachando a la España nacional de enemiga de tales principios. A esta democracia verbalista y formal del Estado liberal, en todas partes fracasada, con sus ficciones de partidos, leyes electorales y votaciones, plenos de fórmulas y convencionalismos, que, confundiendo los medios con el fin, olvida la verdadera sustancia democrática, nosotros, abandonando aquella preocupación doctrinaria, oponemos una democracia efectiva, llevando al pueblo lo que le interesa de verdad: verse y sentirse gobernado, en una aspiración de justicia integral, tanto en orden a los factores morales cuanto a los económico-sociales; libertad moral al servicio de un credo patriótico y de un ideal eterno, y libertad económica sin la cual la libertad política resulta una burla...

Crearemos una Justicia y un Derecho Público sin los que la dignidad humana no sería posible. Formaremos un Ejército poderoso de mar, tierra y aire, a la altura de las virtudes heroicas tan probadas por los españoles, y reivindicaremos la Universidad clásica que, continuadora de su gloriosa tradición, con su espíritu, su doctrina y su moral, vuelva a ser luz y faro de los pueblos hispanos.

Esto es el perfil del nuevo Estado; el que se señaló en octubre del pasado año y que vamos cumpliendo con paso firme y sin vacilaciones. El que es común a la mayoría de los españoles no envenenados por el materialismo o el marxismo. El que figura en el credo de Falange Española.

El que encierra el espíritu de nuestros tradicionalistas. El que es factor común de los pueblos que enterrando un liberalismo engañoso, han orientado su política en camino de autoridad, de enaltecimiento patrio y de justicia social. El que contiene nuestra historia española, tan pródiga en libertades efectivas con sus cartas pueblas, fueros y comunidades. El que atesora la doctrina católica que la totalidad de la nación profesa...

Cuando el prestigio de nuestra nación la haga digna del respeto de las demás naciones; cuando nuestros barcos, potentes y majestuosos paseen de nuevo la enseña de la Patria por los mares; cuando nuestros aviones crucen los aires y al mundo lleven el resurgir de España; cuando los españoles todos alcéis los brazos y elevéis los corazones en homenaje a la Patria, cuando en los hogares españoles no falte el fuego, el pan y la alegría de la vida, entonces podremos decir a nuestros caídos y a nuestros mártires: vuestra sangre ha sido fecunda, pues de una España en trance de muerte hemos creado la España que soñasteis cumpliendo vuestro mandato y haciendo honor a vuestros heroicos sacrificios.

Y en los lugares de la lucha donde brilló el fuego de las armas y corrió la sangre de los héroes, elevaremos estelas y monumentos en que grabaremos los nombres de los que con su muerte, un día tras otro, van forjando el templo de la Nueva España, para que los caminantes y viajeros se detengan un día ante las piedras gloriosas y rememoren a los heroicos artífices de esta gran Patria española.

Espanoles todos, con el corazón en alto ¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! ¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!

*En Palabras del Caudillo 19 abril 1937—
19 abril 1938, Ediciones FE, 1938, págs. 9-17. <<*

DOCUMENTO 2

El saludo impuesto

En los albores del Movimiento Nacional, cuando los patriotas perseguidos caían víctimas de los enemigos de España, el cortejo de los mártires saludaba precursoramente con el brazo en alto en señal de homenaje.

Falange Española adoptó como símbolo lo que era exponente del sentir popular, y al producirse la gesta se generalizaron aquellas demostraciones de respeto como manifestaciones de hermandad, de disciplina y de justicia social que conducen al engrandecimiento de la Patria.

Al fundirse en el Estado aquella organización, la savia de sus aspiraciones toma los caracteres de norma y el saludo, que constituye en las costumbres de los pueblos el testimonio más elevado de la reciprocidad y mutuo auxilio, será forma generosa que patentice el holocausto al más sublime de los ideales y el destierro de una época de positivismo materialista.

En su consecuencia,

DISPONGO:

Artículo primero. Se establece como saludo nacional el constituido por el brazo en alto, con la mano abierta y extendida, y formando con la vertical del cuerpo un ángulo de cuarenta y cinco grados.

Artículo segundo. Al paso de la enseña de la Patria, y al entonarse el Himno y Cantos Nacionales, en los casos previstos en el Decreto número doscientos veintiséis, se permanecerá en posición de saludo.

Artículo tercero. El personal del ejército y de la Armada conservará su saludo reglamentario en los actos militares.

Dado en Salamanca a veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y siete.

FRANCISCO FRANCO

Publicado en *BOE* del 25 de abril de 1937

El saludo suprimido

Al iniciarse en dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis el Movimiento Nacional, como exaltación espiritual de nuestra Patria ante el materialismo comunista, que amenazaba destruirla, entre las formas de expresión de vibrante entusiasmo de aquellos días surgió, frente al puño

cerrado, símbolo de odio y de violencia que el comunismo levantaba, el saludo brazo en alto y con la palma de la mano abierta, de rancio abolengo ibérico, espontáneamente adoptado en pueblos y lugares; saludo que ya en los albores de nuestra historia patria constituyó símbolo de paz y de amistad entre sus hombres.

Mas circunstancias derivadas de la gran contienda han hecho que lo que es signo de amistad y de cordialidad venga siendo interpretado torcidamente, asignándole un carácter y un valor completamente distintos de los que representa. Esto aconseja el que, en servicio de la Nación, deban abandonarse en nuestra vida de relación aquellas formas de saludo que, mal interpretadas, han llegado a privar a las mismas en muchos casos de su auténtica expresión de amabilidad y cortesía.

En consecuencia, y previa autorización del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo único. Quedan derogados el Decreto número doscientos sesenta y tres, de veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y siete, que reglamentó el saludo nacional, las Órdenes complementarias dictadas para su aplicación y los artículos tercero, cuarto, sexto, octavo, noveno y décimo del texto refundido por Decreto de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

Publicado en *BOE* del 14 de septiembre de 1945. <<

DOCUMENTO 3

La ceremonia del juramento

El Caudillo presta su juramento ante el cardenal primado:

Juro ante Dios darme siempre al servicio de la Unidad, la Grandeza y la Libertad de España, vivir con la Falange Española Tradicionalista en Hermandad y conducirla como Jefe.

La jura de los consejeros:

En el nombre de Dios juro darme en servicio con exactitud y vigilancia, con milicia y sacrificio de la misma vida por la Grandeza Imperial de España. Juro emplearme por entero en la misión que me encomiendan los Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, para mantener el rango inmortal de la Patria. Juro lealtad a nuestro Caudillo, fidelidad a sus mandatos, custodia de su persona y entregarme en hermandad cristiana a los demás miembros del Consejo Nacional... Así lo juro en el nombre de Dios sobre sus Santos Evangelios^[1]. <<

DOCUMENTO 4

Súplica a José Antonio
Fragmentos de la advocación y súplica en el Año Nuevo

Por JOSÉ LUIS DE ARRESE

José Antonio,

Tú que diste un sentido de alegría y de apetito a la forma dura y trágica de la vida;

Tú que hiciste carne de tu carne el dolor y el amor, la generosidad y la ambición;

Tú que encontraste una manera militar y elegante de morir;

Tú que nos miras desde el merecido descanso; descanso de luz y de primavera eterna, pero descanso también de puertas guardadas por ángeles con espadas de fuego y de purificación;

José Antonio, ¿estás contento de nosotros?

Yo creo que no.

Y yo creo que no, porque te levantaste contra la materia y contra el egoísmo, y hoy los hombres han olvidado la sublimidad de tus palabras para correr, como locos sedientos, por el camino del egoísmo y de la materia.

Porque quisiste una Patria de poetas y de soñadores, ambiciosos de gloria difícil, y los hombres buscan solo una Patria dispensera y estomacal, repleta de fécula, aunque no tenga belleza ni gallardía.

Porque predicaste el sacrificio, y los hombres miran a un lado y a otro para esconderse.

Porque despreciaste el dinero, y los hombres buscan el dinero, y el negocio se impone al deber, y el hermano vende al hermano, y se especula con el hambre del humilde y con las dificultades de la Patria.

Porque los hombres confunden tu lema de ser mejor por el de estar mejor.

Porque el espíritu se hace carne, y el sacrificio, gula, y la hermandad, avaricia.

Porque llamaste a tu cortejo a millares de mártires para que nos sirvieran de norma y de guía, y los hombres no han visto en la sangre de los tuyos el ejemplo;

Y encuentran inoportuno su recuerdo;

Y les molesta que a sus oídos, cerrados a la generosidad, repitamos con machaconería la presencia de los Presentes;

Y hasta qué sé yo si alguno explota a tus caídos como plataforma para trepar o como trampolín para la pirueta.

José Antonio,

Tú no estás contento de nosotros.

Tú nos tienes que mirar desde tu sitio, desde tu 20 de noviembre con profundo sentido de desprecio y de melancolía.

Tú no puedes estar contento con esta vida mediocre y sensual.

Pero no temas, José Antonio.

Flota en España todavía la esencia de tu perfume;

Tienes prietas aún las filas de tus seguidores;

Hay todavía fibras en los regatos de nuestros ríos de donde sacar cuerdas nudosas para látigos.

Y echaremos del templo a los mercaderes;

Y tu sangre florecerá;

Y el cortejo de tus mártires flotará como una inspiración;

Y la venda de oro, que hoy ciega a los hombres, caerá;

Y volveremos a soñar contigo cosas imposibles y disparatadas;

Y despreciaremos lo pequeño y lo ruin, que está al alcance de la mano;

Y hablaremos de tu ambición;

Y...

¿Quién ha dicho que más vale pájaro en mano que ciento volando?

Mentira: no queremos una Patria chata y sin dificultades; no queremos una Patria de letras de cambio.

José Antonio,

Tú nos enseñaste a decir que todo eso era mentira y convenceremos al mundo de la mentira;

Despreciaremos el egoísmo de lo seguro; seguiremos con ambición insaciable el vuelo de los cien pájaros libres, y llegará un día que el ansia nos dará alas y volaremos más alto que los pájaros mismos.

Y entonces...

Entonces nuestras obras merecerán la sonrisa de tu beneplácito.

José Antonio,

No te seguiremos con la postura y con el grito;

La postura se hace estatua y los gritos solo sirven para que con ellos jueguen las golondrinas de agosto.

Te seguiremos con la fe puesta en la doctrina.

Y triunfaremos.

En «*José Antonio. Fundador y primer jefe de la Falange, capitán de luceros, ¡Presente!*»

Boletín Sindical, n.º 15, enero de 1942,

Departamento Provincial de Propaganda Sindical, Madrid, 1942. <<...

DOCUMENTO 5

Azaña multado después de muerto

DON ANTONIO CARRASCO COBO, Secretario del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid,

CERTIFICO: —Que en el expediente N.º 20/1939D, seguido en este Tribunal, se ha dictado la siguiente,

SENTENCIA:

Número: TRESCIENTAS.

SEÑORES:

Presidente,
Manuel Giménez Ruiz
Vocales:
Fermín Lozano
Alfonso Senra

En Madrid, a veintiocho de abril de mil novecientos cuarenta y uno.

Examinadas por este Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, constituido con los señores anotados al margen, bajo la Ponencia del Vocal Magistrado, las diligencias del expediente seguido contra:

MANUEL AZAÑA DÍAZ: —mayor de edad, casado, natural de Alcalá de Henares (Guadalajara), funcionario del Ministerio de Gracia y Justicia (hoy Justicia) y vecino que fue de Madrid, fallecido en Montauban (Francia); y,

RESULTANDO: que el presente expediente se instruyó a iniciativa de este Tribunal, contra Manuel Azaña Díaz, habiéndose comprobado con las diligencias practicadas e informes aportados, la actuación política del mismo, cuyo relieve y significación son tan notorios, que hacen innecesaria su enunciación completa, que, por otra parte, sería extensa en grado sumo, si bien en pura norma procesal debe hacerse resaltar lo más importante, entre lo que descuella: el haber tomado parte en el denominado Pacto de San Sebastián, que tanta influencia ha tenido en la vida de nuestra Nación; la creación del partido de Acción Republicana, transformado después en Izquierda Republicana, y la presidencia de ambos que ejerció; los distintos cargos políticos que desempeñó, como Diputado a Cortes en todas las Legislaturas de la República, Ministro de la Guerra; Presidente del Consejo de Ministros y de la República; su labor demoledora en el Ministerio de la Guerra — como titular—, que se tradujo en la trituration de lo que es sostén y

defensa de la Patria, permitiendo se incubara una indisciplina que hubiera acabado por socavar el sólido y mejor cimiento del Ejército; la campaña antirreligiosa en el Parlamento, y, antes, fuera de él, con vistas a la desintegración de la familia; la parte que tomó en los sucesos revolucionarios de 1934; su arribo al Poder en febrero de 1936, en circunstancias tan extrañas, a las que no fue ajena la masonería, uno de cuyos afiliados era, sin grado importante, pero de inmensa influencia dentro de ella; la destitución de Alcalá Zamora del cargo de Presidencia de la República, suplantándole, y en el desempeño del cual se evidenció hasta la saciedad, que solo la ruina y destrucción de España era la aspiración máxima que tales elementos sentían, sin importarles lo más mínimo que la sojuzgara otro país, si ello les reportaba, aparte de satisfacer sus instintos vesánicos, beneficios de orden material; sin que nada hiciera para impedir los asesinatos de personas indefensas, que no habían cometido otro delito que amar a su Patria como debe amársela, y hacerse solidario —con su silencio, cuando no con su amparo—, de otros hechos, prolijos de enumerar, y máxima gravedad; y el haber sancionado con su firma, como Presidente de la República, hasta su huida a Francia, todas las disposiciones de nombramiento de los gobiernos rojos, de guerra en contra del Alzamiento Nacional, y demás que tanto perjuicio causaron a España en todos los órdenes.

Carece de hijos, y se le reconoce una cuenta corriente en el Banco Hispano Americano, y otra en el Hipotecario, con saldos a su favor de pesetas 5643,20 y 47,60, respectivamente, algunos objetos depositados en un guarda-muebles, y varias fincas en Alcalá de Henares, propietario en unión de una su hermana;

RESULTANDO: que en la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones que lo regulan, a excepción del plazo señalado para su instrucción, que por la necesidad de practicar algunas diligencias necesarias, ha sido rebasado;

CONSIDERANDO: que los hechos motivo de este expediente — probados suficientemente—, están comprendidos en el artículo 1.º y apartados B), E), F), H), K) y L), del 4.º, de la Ley de 9 de febrero

de 1939, siendo responsable de los mismos el expedientado, en concepto de autor en unos, y como inductor y encubridor en otros, con las circunstancias agravantes del artículo 7.º de la misma Ley, habida cuenta el relieve que llegó a tener en la vida de la Nación, que hace pueda señalársele como el máximo responsable, y calificándose los mismos como de extraordinaria gravedad;

CONSIDERANDO: que tanto por la importancia y gravedad de los hechos, como por la intervención que en ellos ha tenido el encartado, debieran ser sancionados con el máximo rigor que la Ley permite, incluso con la propuesta al gobierno de la pérdida de su nacionalidad española, que preceptúa el artículo 9.º de la Ley antes referida, pues claramente resalta su proceder que le señala como el responsable de más acusada y de mayor orden jerárquico entre sus secuaces, pero su óbito no permite pueda imponérsele otra sanción que la económica, señalada en el grupo III del artículo 8.º de aquella Ley, en la cuantía que se determinará en el fallo, que comprende la totalidad de los bienes que se le conocen;

vistos los artículos citados y demás de aplicación.

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a

MANUEL AZAÑA DÍAZ: a la sanción ECONÓMICA de pago de CIEN MILLONES DE PESETAS, que se hará efectiva en la forma dispuesta en la Ley de 9 de febrero de 1939, ya aludida, en relación con el Código penal común, adoptando para ello las medidas pertinentes.

Notifíquese esta resolución a los presuntos herederos del expedientado, mediante edicto que se insertará en el Boletín Oficial.

Así por esta nuestra sentencia, votada por unanimidad, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: M. Giménez Ruiz. —Fermín Lozano. —A. Senra. (Rubricados).

Y para que conste y unir al rollo, expido el presente que firmo en Madrid a veintiocho de abril de mil novecientos cuarenta y uno.

Antonio Carrasco Cobo (firma)

Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas.
Plaza de Madrid. Expediente n.º 213 de 1939.

DOCUMENTO 6

«Como expresión de la honda y sincera alegría de España»

ORDEN de 15 de agosto de 1945 por la que se dispone que para celebrar la cesación de hostilidades en la guerra mundial se haga izar la bandera nacional, durante tres días consecutivos, en los edificios del Estado, Provincia y Municipio.

Excmos Sres.: Con la rendición incondicional del Japón a los países aliados, la paz tan deseada por los mejores espíritus de la tierra comienza a ser una realidad.

España, que, a pesar de la crítica situación en que en algunos momentos se viera, logró mantener su neutralidad en esta terrible contienda, imponiéndose, a su vez, el noble deber de trabajar sin fatiga desde los primeros instantes para mitigar los dolores de sus víctimas y para ayudar a la reconciliación de los pueblos en lucha, recibe alborozadamente esta noticia y pide a Dios que las naciones, animadas de espíritu constructivo, acierten a instaurar una auténtica comunidad internacional, inspirada en un profundo sentido de justicia, y de la que se aparte para siempre la tremenda pesadilla de la guerra.

Como expresión de la honda y sincera alegría de España en esta hora trascendental de la vida de la Humanidad,

Esta Presidencia ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Para celebrar la cesación total de las hostilidades en la guerra mundial, en los edificios del Estado, Provincia y Municipio se izará la bandera nacional durante tres días consecutivos.

Artículo 2.º Los Ministerios respectivos aplicarán lo dispuesto en el artículo anterior.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 15 de agosto de 1945. P. D., el Subsecretario, P. A., José Díaz de Villegas.

Excmos. Sres. Ministros.

Publicado en *BOE* del 16 de agosto de 1945. <<

DOCUMENTO 7

Hijos de los vencedores y de los vencidos

En este día, aniversario de una victoria militar que, sin embargo, no ha resuelto ninguno de los problemas que obstaculizaban el desarrollo material y cultural de nuestra patria, los universitarios madrileños nos dirigimos nuevamente a nuestros compañeros de toda España y a la opinión pública. Y lo hacemos precisamente en esta fecha —nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos— porque es el día fundacional de un régimen que no ha sido capaz de integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con nosotros mismos.

Nos dirigimos a la opinión pública para hacer constar, por encima de todo, nuestra adhesión entusiasta a la petición universitaria del primero de febrero, que ha adquirido para toda la Universidad española un significado ejemplar y un valor programático. Aquella petición, elaborada, firmada y difundida dentro de la más estricta legalidad, sigue y seguirá siendo la expresión más concreta de nuestras aspiraciones y objetivos, aunque las circunstancias actuales impidan, provisionalmente que la inmensa mayoría de los universitarios manifiesten su aprobación a aquellos principios poniendo la firma al pie de dicho documento.

A los universitarios e intelectuales vinculados a la Universidad que encabezaron aquella petición, hacemos constar nuestra solidaridad. Ellos

supieron darnos a todos motivos de esperanza y razones de actuar. Contra ellos y contra la Universidad entera, que los apoyaba unánimemente, se desató una brutal represión oficial y una grosera campaña de calumnias. Además, hubimos de sufrir la provocación de grupos armados de una bandería jurídica y políticamente inhabilitada para mantener el orden público, definitivamente expulsada de una convivencia nacional.

Las Autoridades, además de solidarizarse con aquellos facinerosos, han violado su propia legalidad, suspendiendo un Fuero de cuya vigencia práctica teníamos, por cierto, los españoles poca noticia. El gobierno solo ha sabido oponer a nuestras razones el recurso de la fuerza; bien precario recurso, así lo ha demostrado la Historia. Pero es más: en los momentos en que todas las naciones del mundo, del Este y del Oeste, han considerado que España podía formar parte de las Naciones Unidas, el gobierno actual ha demostrado que no está en condiciones de cumplir los acuerdos internacionales que ha suscrito. En contradicción flagrante con la Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, textos básicos con carácter obligatorio para todos los Estados Miembros, el gobierno ha actuado y sigue actuando de manera injusta, arbitraria y brutal. Así, en estos mismos días, siete nuevos universitarios e intelectuales han sido detenidos, entre ellos, un compañero nuestro Premio extraordinario de la Universidad de Barcelona y miembro de la Carrera Diplomática.

Todas estas razones son las que nos mueven a llamar a los Universitarios a una acción coordinada y decidida, en estos próximos días en que se reúne en Madrid el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. No es que pensemos que este u otro organismo internacional deba resolver nuestros problemas: afirmamos que el porvenir de España solo está en manos de los españoles. Pero la presencia de la UNESCO en Madrid pone de manifiesto la doblez del gobierno actual, su incapacidad jurídica para servir a los fines de cualquier Organización Internacional encargada de velar por la paz y por los Derechos Humanos más elementales. Por tanto, llamamos a los universitarios a unirse en torno a los siguientes puntos esenciales:

1) Libertad de todos los detenidos y sobreseimiento de los procesamientos en curso. 2) Reposición en sus cargos de Pedro Laín Entralgo, nuestro Rector Magnífico y Presidente de la Comisión Española de la UNESCO y de Don Manuel Torres López, Decano de los estudiantes de la Facultad de Derecho, Reintegración al edificio de San Bernardo de todos los cursos de esta Licenciatura. 3) Celebración del Congreso Nacional de Estudiantes con todas las garantías necesarias para evitar interferencias del aparato policiaco del Estado y de la organización que tan burdamente se atribuye la representación estudiantil.

Así queda definida nuestra posición, la posición de la Universidad madrileña. Para hacerla patente nos declararemos en huelga de 48 horas los días 12 y 13 de abril de 1956, sin perjuicio de las iniciativas de cada grupo universitario en cada situación concreta que puedan modificar, ampliar o precisar esta iniciativa general.

Madrid, 1 de abril de 1956

(Ref. Ejemplar multicopiado, The National Archives, Rew. FO 185/1968 FO 185/1768). <<

DOCUMENTO 8

La resolución de Munich

Texto de la Resolución aprobada por unanimidad de los delegados españoles en el Congreso de Munich (6 de junio de 1962).

El Congreso del Movimiento Europeo reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962 estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa, en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente:

1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.

2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa.

3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.

4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa de los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de la huelga.

5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de los derechos de la oposición.

El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial; y toma nota de que todos los delegados españoles presentes en el Congreso expresan su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles desean que esa evolución se lleve a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo.

J. Satrústegui y otros (eds.), *Cuando la transición se hizo posible. El «contubernio de Munich»*, Madrid, Tecnos, 1993, pág. 180). <<

DOCUMENTO 9

Inauguración del Valle de los Caídos

Espanoles: Cuando los actos tienen la fuerza y la emotividad de estos momentos, en que nuestras preces ascienden a los cielos impetrando la

protección divina para nuestros caídos, las palabras resultan siempre pobres: ¿cómo podría expresar la honda emoción que nos embarga ante la presencia de las madres y las esposas de nuestros caídos, representadas por esas mujeres ejemplares aquí presentes, que, conscientes de lo que la Patria les exigía, colgaron un día las medallas del cuello de sus deudos, animándoles para la batalla? (*Grandes aplausos*). ¿Qué inspiración sería precisa para contar las heroicas gestas de nuestros caídos; para poder reflejar el entusiasmo, segado tantas veces en flor, de los que con los primeros rayos del sol de la mañana caían con la sonrisa en los labios al asaltar las posiciones enemigas, o para encomiar la firme tenacidad de los defensores de los mil pequeños «Alcázares» en que se convirtieron en la nación las residencias de las pequeñas guarniciones o las casas-cuartel de la Guardia Civil, defendidas hasta el límite de lo inverosímil contra fuerzas superiores, sin esperanzas de socorro; o para ensalzar el heroísmo y el entusiasmo derrochados en las cruentas batallas libradas contra las Brigadas Internacionales para hacerles morder el polvo de la derrota; o para enumerar los sacrificios y los heroísmos de los que en los 2500 kilómetros de frente mantuvieron la intangibilidad de nuestras líneas; o para narrar la tragedia, no menos meritoria, de los que sucumbieron a los rigores de los durísimos inviernos, o se vieron mutilados al helarse sus extremidades bajo los hielos de Teruel o en las divisorias de las montañas; o para destacar la serenidad estoica de los mártires que frente al fatídico paredón de ejecución morían confesando a Dios y elevándole sus preces; o para exaltar la conducta de tantos sacerdotes martirizados, que bendecían y perdonaban a sus verdugos, como Cristo hizo en el Calvario; o para presentar las virtudes heroicas de tantísimas mujeres piadosas que, por solo serlo, atraieron las iras y la muerte de las turbas desenfrenadas; o para reflejar la zozobra de los perseguidos, arrancados del reposo de sus hogares en los amaneceres lívidos por cuadrillas de forajidos para ser fusilados; o para poder describir la epopeya sublime de aquella Comunidad de frailes de San Juan de Dios que sobre una playa solitaria de nuestro Levante cayeron segados por las ametralladoras, mientras con sus cantos litúrgicos elevaban a Dios un grandioso *hossanna*? (*sic*) (*Grandes aplausos*).

«NUESTRA GUERRA FUE UNA CRUZADA»

Nuestra guerra no fue, evidentemente, una contienda civil más, sino una verdadera Cruzada, como la calificó entonces nuestro Pontífice reinante; la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. Jamás se dieron en nuestra Patria en menos tiempo más y mayores ejemplos de heroísmo y de santidad, sin una debilidad, sin una apostasía, sin un renunciamiento. Habría que descender a las persecuciones romanas contra los cristianos para encontrar algo parecido.

En todo desarrollo de nuestra Cruzada hay mucho de providencial y de milagroso. ¿De qué otra forma podríamos calificar la ayuda decisiva en que en tantas vicisitudes recibimos de la protección divina? ¿Cómo explicar aquel primer legado, providencial e inesperado, que en los momentos más graves de nuestra guerra recibimos, cuando la inferioridad de nuestro armamento era patente y con el arrojo teníamos que sustituir los medios, y nos llegó, como llovido del cielo, en un barco con ocho mil toneladas de armamento, apresado en la oscuridad de la noche por nuestra Marina de Guerra a nuestros adversarios? Ocho mil toneladas de material que comprendían varios miles de fusiles ametralladores, de morteros, de ametralladoras y cañones con sus dotaciones, que constituían el más codiciado botín de guerra que pudiéramos soñar y que desde entonces formó la primera base de nuestro armamento.

... Y no es una, sino varias las veces que, al correr de nuestra campaña, se repetían los hechos providenciales que nos favorecían. ¿Y qué pensar de los desenlaces de las grandes batallas, cuyas crisis victoriosas, sin que nadie se lo propusiese, se resolvieron siempre en los días de las mayores solemnidades de nuestra Santa Iglesia?

...

«LA ANTI-ESPAÑA NO ESTÁ MUERTA»

La naturaleza parecía habernos reservado este magnífico escenario de la sierra, con la belleza de sus duros e ingentes peñascos, con la reciedumbre de nuestro carácter; con sus laderas ásperas dulcificadas por la ascensión

penosa del arbolado, como ese trabajo que la naturaleza nos impone; y con sus cielos puros, que solo parecían esperar los brazos de la Cruz y el sonar de las campanas para componer el maravilloso conjunto.

...

La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Periódicamente la vemos levantar cabeza en el exterior y en su soberbia y ceguera pretender envenenar y avivar de nuevo la innata curiosidad y el afán de novedades de la juventud. Por ello es necesario cerrar el cuadro contra el desvío de los malos educadores de las nuevas generaciones. (*Grandes aplausos*).

La principal virtualidad de nuestra Cruzada de Liberación fue el habernos devuelto a nuestro ser, que España se haya encontrado de nuevo a sí misma, que nuestras generaciones se sintieran capaces de emular lo que otras generaciones pudieran haber hecho. El genio español surgió en mil manifestaciones: desde aquellas Milicias en que cristalizó el entusiasmo popular en los primeros momentos, y que formaron el primer núcleo de nuestras fuerzas de choque, a los alféreces provisionales que nuestra capacidad de improvisación creó para el encuadramiento de nuestras tropas, y que habían de asombrar a todos por su espíritu y aptitud para el mando. Así iban surgiendo las legiones de héroes y la innumerable floración de mártires. No importaba dónde si en la tierra, en el mar o en el aire; si entre infantes o jinetes, artilleros o ingenieros, falangistas, requetés o legionarios. Era el soldado español en todas sus versiones. Sus sangres se confundían en la Cruzada heroica en el común ideal de nuestro Movimiento. (*Grandes y prolongados aplausos*).

«NUESTRA VICTORIA FUE TOTAL Y PARA TODOS»

Conforme los días pasaban, el Movimiento calaba en las entrañas de nuestra Patria. Todo en nuestra nación se hacía Movimiento. No solo marchaba con nuestras banderas victoriosas, sino que nos salía al encuentro en las poblaciones que liberábamos. Nuestros himnos se musitaban en las cárceles, se extendían por los campos, se susurraban en los hogares y salían al exterior como una explosión de cantos de esperanzas al ser liberados.

Nuestra victoria no fue una victoria parcial, sino una victoria total y para todos. No se administró en favor de un grupo ni de una clase, sino en el de toda la nación. Fue una victoria de la unidad del pueblo español confirmada al correr de estos veinte años...

«LAS BATALLAS DE LA PAZ»

Con la victoria, como sabéis, no acabó nuestra lucha. A las batallas de la guerra siguieron las no menos importantes de la paz, en las que desde el exterior se intentó la reversión de nuestra victoria y que dio lugar a que se exteriorizase la fortaleza de nuestro Movimiento político, al unirnos como un solo hombre en defensa de nuestra razón, y en el que cada uno desde el puesto que le correspondía en la vida habéis venido asistiéndome con vuestra recia fidelidad.

Hoy, que hemos visto la suerte que corrieron en Europa tantas naciones, algunas católicas como nosotros, de nuestra misma civilización, y que contra su voluntad cayeron bajo la esclavitud comunista, podemos comprender mejor la trascendencia de nuestro Movimiento político y el valor que tiene la permanencia de nuestros ideales y de nuestra paz interna. (*Grandes aplausos*).

...

Hoy sois vosotros, nuestros combatientes, los que por haber llegado a la mitad de vuestra vida cubrís puestos en las actividades más diversas e importantes de la Patria, imprimiéndole una doble seguridad. Interesa el que mantengáis con ejemplaridad y pureza de intenciones la hermandad forjada en las filas de la Cruzada, que evitéis que el enemigo, siempre al acecho, pueda infiltrarse en vuestras filas; que inculquéis en vuestros hijos y proyectéis sobre las generaciones que os sucedan la razón permanente de nuestro Movimiento, y habréis cumplido el mandato sagrado de nuestros muertos. No sacrificaron ellos sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar. Nos exigen montar la guardia fiel de aquello por lo que murieron; que mantengamos vivas de generación en generación las lecciones de la Historia para hacer fecunda la sangre que ellos generosamente derramaron, y que, como decía José Antonio, fuese la suya

la última sangre derramada en contiendas entre españoles. ¡Arriba España!
(*Una enorme ovación acogió el final del discurso*).

Discurso de Franco en la inauguración del Valle de los Caídos
(1 de abril de 1959. En *ABC* de Madrid, 2 de abril de 1959. <<

DOCUMENTO 10

Diguem no

Ara que som junts
diré el que tu i jo sabem
i que sovint oblidem:

Hem vist la por
ser llei per a tots.
Hem vist la sang
—que sols fa sang—
ser llei del món.

No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.

(Bis)

Hem vist la fam
ser pa per a molts.
Com han fet callar
a molts homes
plens de raó.

No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.

Letra y música: RAIMON

M. Vázquez Montalbán, *Antología de la «Nova cançó» catalana*, Barcelona, Ediciones de
Cultura Popular, 1968, pág. 236. <<

DOCUMENTO 11

Franco doctor «Honoris causa»

Elogio del Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Iglesias. Decano de la Facultad de Ciencias.

Excelencia,
Excmos. e Ilmos. Señores,
Señores Claustales,
Señora,
Señoras, Señores:

La Facultad de Ciencias de esta Universidad, en la Junta del mes de septiembre del año pasado acordó, por unanimidad, proponer a la superioridad la concesión del Grado de Doctor «Honoris Causa» a S. E. el Jefe del Estado Español y Generalísimo de los Ejércitos, Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde. La Junta de Gobierno de la Universidad compostelana aceptó nuestra propuesta y la elevó a la superioridad. El Ministerio de Educación Nacional accedió a lo que habíamos pedido.

Por esto nos reunimos hoy en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias para proceder, con el ritual de Grados en la Universidad de Santiago de Compostela, a los actos de la investidura, de Doctor «Honoris Causa», por la Facultad de Ciencias, del Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde y soy yo, por la fortuita circunstancia de ser el Decano de esta Facultad, pero no por mérito alguno, el que tiene el privilegio de apadrinar y hacer el elogio de tan egregio doctorando, en el que concurren las condiciones a que se alude en la iniciación de este ritual cuando, después de pedir audiencia al Sr. Rector se dice: *Merita eius, magisterium et opera pro eo loquuntur* (Sus méritos, su magisterio y sus obras están hablando por él).

Permítaseme que, por el ambiente en que se vive en una Facultad de Ciencias, interprete esas tres condiciones con un criterio científico y, por la ciencia que toda mi vida vengo profesando, lo oriente en un sentido biológico.

Consecuente con ello yo equiparo las obras, las enseñanzas y los méritos de nuestro ilustre doctorando como una experiencia científica biológica mediante la cual consiguió restaurar el biologismo normal de nuestra Patria cuya vida venía siendo alterada por los regímenes políticos instaurados por los años 31 al 36. Dirigiendo un equipo de colaboradores — como debe de hacerse todo trabajo científico de gran trascendencia y en este caso del más amplio alcance vital— fue, con un tesón, con una firmeza y sobre todo con una fe inquebrantable, recuperando paso a paso el territorio nacional y devolviéndole sus características biológicas ancestrales tanto en el terreno material como en el espiritual.

Los métodos seguidos para alcanzar estos fines, las vicisitudes por las cuales se ha pasado en las distintas fases de esta experiencia están en el ánimo de todos nosotros, puesto que la inmensa mayoría de los que aquí estamos las hemos vivido, y todo ese conjunto de actuaciones y resultados constituyen su mérito, su enseñanza, su obra, en suma la tesis doctoral del nuevo Doctor que está escrita en el gran libro de la historia con los caracteres indelebles de los hechos realizados y de los efectos conseguidos, marcando un capítulo de la Historia de España.

Y si, como en toda tesis doctoral, queremos consignar las conclusiones en las que de una manera compendiada se señalan el método seguido en la experimentación y los resultados a que se ha llegado, yo creo que en esta, bastaría con una sola conclusión que podría estar concebida en estos o parecidos términos: con la experiencia por mí dirigida he conseguido para España —en la fecha actual, en la que se da la providencial circunstancia de ser Año Santo Jacobeo— 26 años de paz.

Nada tiene de particular que con tal tesis y semejante conclusión se juzgue al nuevo doctorando —*nemine discrepante*— con la máxima calificación «Sobresaliente cum laude».

Pero, además de lo expuesto, que he comparado a un experimento científico biológico, hablan a favor del nuevo ilustre Doctor su actuación, no de una forma figurada, sino genuina, auténtica, protegiendo las ciencias puras y aplicadas, tanto en el más alto nivel cultural de toda nación, como es el medio universitario, como en las distintas instituciones dedicadas a las más diversas especialidades, fomentando el perfeccionamiento docente e

investigador de nuestra vida intelectual, tan bien puestos de manifiesto en el trabajo que con el título de «La investigación científica», publicó en el año 63, nuestro ilustre compañero y Jefe, el Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo, Ministro de Educación Nacional, en el que se analizan minuciosamente todas las instituciones científicas que, con el patrocinio de V. E., se han creado en España.

Y nosotros, los profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela, tenemos que agradecerlos de una manera especial este magnífico edificio de que se nos ha dotado, en el que no solo el continente, por lo que a su prestancia y comodidad se refiere, sino también su contenido en lo referente a su material científico y bibliográfico, nos proporciona los medios adecuados para educar, enseñar e investigar que son las tres obligaciones ineludibles de todo profesor universitario.

Por todo ello el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias y el Claustro de Doctores de la Universidad de Santiago de Compostela os recibe en su corporación incorporándoos a ella, cumpliendo la parte de este ritual cuando se dice: *Sedeas in sapientiae cathedra, ut inde, in Academia et in regno doceas, iudices, optuleris* (Siéntate en la silla de la sabiduría, para que desde ella enseñes, orientes y sirvas en la Universidad y en la Nación).

Que Dios os dé, Señor, la integridad física y psíquica necesarias para seguir dirigiendo y supervisando aquel experimento científico que habéis organizado, y protegiendo la vida cultural de nuestra Patria. Todos los españoles os lo agradeceremos, Excelencia.

Elogio del Ilmo. Sr. Dr. Luis Iglesias, decano de la Facultad de Ciencias. En *Recepción e investidura de S. E. EL JEFE DEL ESTADO DON FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE como doctor «Honoris causa» por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela. Año Jubilar. 27 de julio de 1965*. Publicación de la Secretaría General n.º 23, Santiago de Compostela, 1965, págs. 9-12. <<

DOCUMENTO 12

Declaración de Coordinación Democrática

Ante la crisis general del gobierno y del Régimen y la ausencia de soluciones justas y eficaces a los graves problemas del país, con plena conciencia de la responsabilidad histórica que incumbe a la oposición democrática ante los pueblos de España, la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática han decidido, en el día de hoy, su disolución y la constitución simultánea de un solo órgano de la oposición, denominado COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA, como medio indispensable de ofrecer a la sociedad española una real alternativa de poder capaz de transformar, por vía pacífica, el Estado actual en un Estado Democrático.

COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA se opone a la continuidad de un régimen que está haciendo imposibles las libertades democráticas de todos los ciudadanos, sea bajo la forma concreta que se ha establecido en virtud de las Leyes Fundamentales, sea bajo cualquier forma de Gobierno o Estado que se pretenda imponer al pueblo sin la necesaria consulta previa con plenas garantías de libertad política e imparcialidad, y en la que se asegure además la igualdad en la utilización de los medios estatales de comunicación de masas.

En consecuencia, COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA denuncia como perturbador para la convivencia pacífica el intento de la llamada política reformista del gobierno, de perpetuarse en el poder combinando las promesas democráticas con medidas represivas, e intentando dividir a las fuerzas políticas y sindicales más responsables mediante arbitrarias discriminaciones y exclusiones. Las proyectadas Leyes de reforma política aprobadas por el gobierno y enviadas a las Cortes no son aceptables para la oposición, porque, si bien desde un punto de vista formal modifican criterios anteriores, no reconocen las libertades democráticas a todos los ciudadanos del Estado.

COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA manifiesta su decisión de emprender las acciones políticas adecuadas para la consecución de los siguientes objetivos:

- La inmediata liberación de los presos políticos y sindicales sin exclusión, el retorno de los exiliados, y una Amnistía que restituya en

todos sus derechos a los privados de ellos por motivos políticos o sindicales.

- El eficaz y pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades políticas consagradas en los textos jurídicos internacionales, especialmente de todos los Partidos Políticos, sin exclusión alguna.
- El reconocimiento inmediato y pleno de la libertad sindical y el rechazo del actual sindicato estatal.
- El pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades políticas de las distintas nacionalidades y regiones del Estado Español.
- El funcionamiento de un poder judicial único e independiente según las exigencias de una Sociedad Democrática.
- La realización de la ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un período constituyente que conduzca, a través de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma del Estado y del gobierno, así como la defensa de las libertades y derechos políticos durante este período.

COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA invita:

A las instancias de oposición existentes en las nacionalidades y regiones a que se articulen con este organismo en la alternativa democrática a nivel del Estado Español.

A los partidos políticos y organizaciones sindicales a nivel del Estado que no formaban parte de la Plataforma o de la Junta, a que se integren en COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA.

A los sectores económicos, profesionales culturales y de la Administración Pública, así como a las instituciones eclesiásticas, militar y judicial, a la apertura de un diálogo, en aras de los superiores intereses patrios, que conduzca a la realización de la alternativa pacífica aquí definida.

A todas las fuerzas democráticas, políticas, sindicales, y a todos los ciudadanos de los pueblos del Estado Español a participar en las acciones y movilizaciones pacíficas necesarias para la efectiva conquista de los

derechos y libertades fundamentales, y para el establecimiento, en el momento de la ruptura, de órganos de poder ejecutivos de amplia coalición, sin exclusiones ni obligaciones, que garanticen el pleno uso de las libertades y derechos democráticos, y la apertura y desarrollo del proceso constituyente hasta la transmisión de poderes a los órganos de poder ejecutivo o de gobierno que resulten constitucionalmente elegidos.

COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA estima que el cumplimiento de su finalidad política como alternativa democrática, exige su duración hasta el momento en que se convoquen elecciones generales, sin perjuicio de la libertad de cada partido en el debate constitucional y de que tras la ruptura democrática, reconsidere la oportunidad de su permanencia en el organismo unitario.

Los signatarios de COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA declaran su profundo convencimiento de que todos ellos concurren a este acto con voluntad de superación de pasados enfrentamientos y de que acatarán el resultado del proceso constituyente y de las elecciones democráticas correspondientes.

COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA expresa su total convicción de que este programa constituye la única alternativa pacífica hacia la democracia. Su realización no es por tanto tarea exclusiva de la oposición, sino deber primordial de todos los españoles.

Madrid, a 26 de marzo de 1976

Signatarios: COMISIONES OBRERAS, GRUPO INDEPENDIENTE, MOVIMIENTO COMUNISTA, PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, PARTIDO CARLISTA, PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR, PARTIDO SOCIAL-DEMÓCRATA, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, PARTIDO SOCIALISTA POPULAR, PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA, UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UNIÓN SOCIAL DEMÓCRATA ESPAÑOLA, IZQUIERDA DEMOCRÁTICA. <<

Cronología

1931 Triunfo de la coalición republicano-socialista en las elecciones municipales. Alfonso XIII abandona España. Proclamación de la República. Elecciones a Cortes Constituyentes y promulgación de la Constitución.

1932 Intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. Aprobación del Estatuto de Cataluña y de la Ley de Reforma Agraria.

1933 Fundación de Falange Española. Elecciones generales. Triunfo del Partido Radical, de Alejandro Lerroux y de la CEDA, de José María Gil Robles.

1934 Nuevo gobierno de Lerroux que incorpora ministros de la CEDA. Huelga general y revolución. Insurrección armada en Asturias. Suspensión del Estatuto de Cataluña.

1935 Franco es nombrado jefe del Estado Mayor Central. Escándalo del estraperlo y caída del gobierno Lerroux. Gobierno de Portela Valladares con el encargo de disolver las Cortes.

1936 Elecciones generales. Victoria del Frente Popular (coalición de las izquierdas). Azaña presidente de la República. Asesinatos del teniente Castillo y del diputado Calvo Sotelo. Golpe de Estado militar. Asesinato de Federico García Lorca. Franco es proclamado en Burgos jefe del gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. Traslado a Valencia de la capitalidad de la República. Resistencia de Madrid.

1937 Decreto de Unificación de FE de las JONS y de Comunión Tradicionalista. Las tropas italianas conquistan Málaga y son derrotadas en Guadalajara. Sucesos de mayo en Barcelona. Juan Negrín, presidente del Gobierno de la República. Bombardeo de Guernica y caída de Bilbao, Santander y Asturias.

1938 Primer gobierno de Franco. Promulgación del Fuero del Trabajo. Fin de la batalla de Teruel y crisis del gobierno de la República. Batalla del

Ebro. Las Brigadas Internacionales se retiran de España.

1939 Las tropas franquistas entran en Barcelona. Francia y el Reino Unido reconocen al gobierno de Burgos. Azaña dimite la presidencia de la República. Caída de Madrid y fin de la Guerra Civil. Franco forma un nuevo gobierno. Se promulga la Ley de Responsabilidades Políticas. España se retira de la Sociedad de Naciones.

1940 Franco se entrevista con Hitler en Hendaya. Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores. Se instituye el Tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo. Se inician las obras del Valle de los Caídos.

1941 Alfonso XIII renuncia a sus derechos en favor de su hijo, Juan de Borbón. Parte de España la División Azul.

1942 Ley Constitutiva de Cortes. Sustitución de Serrano Suñer por Gómez-Jordana en Exteriores. Se crea el NO-DO.

1943 El gobierno español pasa de la «no beligerancia» a la neutralidad. Regreso de la División Azul.

1944 El PCE intenta una incursión militar en el valle de Arán.

1945 Manifiesto de don Juan de Borbón requiriendo a Franco la restauración de la monarquía. Promulgación del Fuero de los Españoles. Crisis de gobierno. Los católicos al poder. Ley de Referéndum.

1946 La ONU veta el ingreso de España y recomienda la retirada de los embajadores. Francia cierra su frontera con España. Manifestación de apoyo al régimen en la Plaza de Oriente.

1947 Franco promulga la Ley de Sucesión.

1948 Entrevista de Franco y don Juan de Borbón en el *Azor*. Pacto de San Juan de Luz entre monárquicos y PSOE.

1951 Huelga general en Barcelona. Ruiz-Giménez, ministro de Educación.

1953 España entra en la UNESCO. Firma de los pactos con Estados Unidos y del Concordato con el Vaticano. Ley de Ordenación de la Enseñanza Media.

1955 España ingresa en la ONU.

1956 Incidentes en la Universidad de Madrid. Destitución de Ruiz-Giménez y de Fernández Cuesta. El Partido Comunista anuncia su

política de reconciliación nacional. Huelgas en el País Vasco y en Cataluña.

1957 Los tecnócratas del Opus Dei acceden al gobierno. Leyes de Reforma de la Administración del Estado.

1958 Las Cortes promulgan la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento.

1959 Se aprueba la Ley de Ordenación Económica conocida como Plan de Estabilización. Fundación de ETA.

1962 Huelga general de los mineros en Asturias. Estado de excepción. España solicita el ingreso en la CEE. Encuentro en Munich entre representantes de la oposición del interior y del exilio.

1963 Juicio y ejecución de Julián Grimau. Se crea el Tribunal de Orden Público. Primer Plan de Desarrollo.

1966 Ley de Prensa e Imprenta de Fraga Iribarne. «Capuchinada» y manifestación de sacerdotes en Barcelona. Referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado.

1967 Estado de excepción en el País Vasco. Carrero Blanco es nombrado vicepresidente del gobierno.

1969 Estado de excepción en todo el territorio nacional. Juan Carlos de Borbón designado por las Cortes sucesor de Franco a título de rey. Escándalo Matesa. Gobierno con predominio del Opus Dei.

1970 Ley General de Educación. Juicio de Burgos contra miembros de ETA.

1971 Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid. Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes. Cierre del diario *Madrid*.

1973 Carrero Blanco, presidente del gobierno. Juicio contra dirigentes de Comisiones Obreras. Carrero Blanco muere en un atentado de ETA. Carlos Arias Navarro es nombrado presidente del Gobierno.

1974 Franco, gravemente enfermo. El príncipe Juan Carlos asume temporalmente la jefatura del Estado. Presentación en París de la Junta Democrática. Felipe González elegido primer secretario del PSOE. Atentado de ETA en la cafetería Rolando en Madrid.

1975 Intensificación de las huelgas. Estado de excepción en el País Vasco. Ejecución de cinco miembros de ETA y del FRAP. Protestas y

manifestaciones en Europa. Muerte de Franco. Proclamación de Juan Carlos I como rey de España.

1976 Unificación de la oposición y nacimiento de Coordinación Democrática. En Vitoria cinco obreros mueren por disparos de la policía en una manifestación. Adolfo Suárez es nombrado presidente del Gobierno. Fundación de Alianza Popular. Aprobación por referéndum de la Ley para la Reforma Política.

1977 Elecciones generales e inauguración de las nuevas Cortes. Restablecimiento de la Generalitat de Cataluña.

1978 La Constitución es aprobada por referéndum.

Bibliografía general sobre el franquismo

Franco y el régimen. La más completa biografía disponible de Francisco Franco es la de P. Preston, *Franco, «Caudillo de España»*, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 2005 (1.^a ed. inglesa 1993). Breve pero útil ensayo biográfico es el de J. P. Fusi, *Franco: autoritarismo y poder personal*, Madrid, Suma de Letras, 2001 (1.^a ed. 1985). Buenas síntesis de la historia del régimen son las de E. Moradiellos, *La España de Franco (1939-1975): política y sociedad*, Madrid, Síntesis, 2000; Stanley G. Payne, *El régimen de Franco, 1936-1975*, Madrid, Alianza, 1987; J. Tusell, *Historia de España en el siglo XX*, vol. III, *La dictadura de Franco*, Madrid, Taurus, 1998; Borja de Riquer, *La dictadura de Franco*, Barcelona, Crítica, Marcial Pons, Madrid, 2010; M. Tuñón de Lara y J. A. Biescas, *España bajo la dictadura franquista*, vol. X de *Historia de España* dirigida por M. Tuñón de Lara, Barcelona, Labor, 1982. R. Carr y J. P. Fusi han coordinado los dos volúmenes del tomo XLI, *La época de Franco (1939-1975)*, de la *Historia de España de Menéndez Pidal*, subtitulados respectivamente *Política, Ejército, Iglesia, Economía y Administración*, y *Sociedad, vida y cultura*, Madrid, Espasa-Calpe, 1996 y 2001. Para las transformaciones de la sociedad española de los años sesenta y setenta, los valiosísimos *Estudios sociológicos sobre la situación social de España*, Madrid, FOESSA, 1966, 1970 y 1975. Óptimos estudios sobre cuestiones económicas, sociales y políticas contienen los tres volúmenes dirigidos por M. Fraga, J. Velarde y S. del Campo (eds.), *La España de los años 70*, vol. III, *El Estado y la política*, Madrid, Moneda y Crédito, 1974.

Iglesia. Sobre la Iglesia y las instituciones franquistas: R. Díaz Salazar, *Iglesia, dictadura y democracia*, Madrid, HOAC, 1981; J. J. Ruiz Rico, *El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco*, Madrid,

Tecnos, 1977; F. Lannon, *Privilegio, persecución y profecía: la Iglesia católica en España, 1897-1975*, Madrid, Alianza, 1990. Sobre el papel de los católicos hay análisis políticos en Hermet (1981); J. Tusell (1984). Respecto a la relación ritos-poder, ideología y modelos religiosos: VV. AA, *Iglesia y sociedad en España*, Madrid, Editora Popular, 1977; G. Di Febo (2012). Sobre el nacionalcatolicismo una fundamental aportación teórica es el libro de A. Álvarez Bolado (1976). Interpretaciones sobre temas específicos son las de A. Botti, *Cielo y dinero: el nacionalcatolicismo en España (1881-1975)*, Madrid, Alianza, 2008 (1.^a ed. 1992); G. Cámara Villar, *Nacional-catolicismo y escuela*, Jaén, Hesperia, 1984. Sobre el impacto del Concilio Vaticano II en la Iglesia española: Piñol (1999).

Ejército. Eficaces reconstrucciones de dos militares protagonistas: J. Busquets, *El militar de carrera en España*, Barcelona, Ariel, 1984 (1.^a ed. 1967); Íd., *Militares y demócratas*, Barcelona, Plaza & Janés, 1999; M. Díez-Alegría, *Ejército y sociedad*, Madrid, Alianza, 1973 (1.^a ed. 1971). Análisis complexivos son los de J. Lleixá, *Cien años de militarismo en España*, Barcelona, Anagrama, 1986, y J. A. Olmeda Gómez, *Las fuerzas armadas en el estado franquista*, Madrid, El Arquero, 1988; sobre ideología: J. C. Losada Malvárez, *Ideología del ejército franquista: 1939-1959*, Madrid, Istmo, 1990; entre las últimas aportaciones: M. A. Baquer, *Franco y sus generales*, Madrid, Taurus, 2005; G. Cardona, *El poder militar en el franquismo*, Barcelona, Flor del Viento, 2008.

Falange y partido único. Una de las primeras aportaciones es la de Stanley G. Payne, *Falange: A History of Spanish Fascism*, Stanford, Stanford University Press, 1961. Las distintas etapas de la experiencia están reconstruidas por S. Ellwood, *Prietas las filas: historia de la Falange española, 1933-1983*, Barcelona, Crítica, 1984; J. L. Rodríguez, *Historia de Falange Española de las JONS*, Madrid, Alianza, 2000; J. Thomàs *La Falange de Franco: fascismo y fascistización en el régimen de Franco (1937-1945)*, Barcelona, Plaza & Janés, 2001. Sobre las organizaciones juveniles los completos estudios de M. T. Gallego, *Mujer, Falange y franquismo*, Madrid, Taurus, 1983, y de J. Sáez Marín, *El Frente de*

Juventudes, Madrid, Siglo XXI, 1988; entre las aportaciones sobre el Auxilio Social: A. Cenarro, *La sonrisa de Falange: Auxilio social en la guerra civil y en la posguerra*, Crítica, Barcelona, 2006. Sobre Falange y el partido único: J. M. Thomàs, *Lo que fue la Falange*, Barcelona, Plaza & Janés, 1999. Sobre el sindicalismo oficial: M. A. Aparicio, *El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1980.

Franquismo y fascismo. Definición del régimen. Un ensayo pionero en clave comparativa es el de J. Tusell, «El franquismo y las dictaduras contemporáneas», en Íd., *La dictadura de Franco*, Madrid, Alianza, 1996 (1.^a ed. 1988). Sobre la influencia del fascismo italiano véanse los ensayos recogidos en L. Casali (comp.), *Per una definizione della dittatura franchista*, Milán, Franco Angeli, 1990; análisis en clave comparativa entre distintos regímenes se encuentran en Stanley G. Payne, *El fascismo*, Madrid, Movimiento Cultural Cristiano, 2001 (1.^a ed. ingl. 1980); E. Collotti, *Fascismo, fascismi*, Milán, Sansoni, 2004 (1.^a ed. 1989); E. Malefakis, «La dictadura de Franco en una perspectiva comparada», en J. P. Fusi, J. L. García Delgado, S. Juliá, E. Malefakis y Stanley G. Payne, *Franquismo: el juicio de la historia*, Madrid, Temas de Hoy, 2005 (1.^a ed. 2000). Aportaciones más recientes sobre la comparación fascismo-franquismo: J. Tusell, E. Gentile y G. Di Febo (eds.), y S. Sueiro (coord.), *Fascismo y franquismo: cara a cara*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004; I. Saz Campos, *Fascismo y franquismo*, Valencia, Universitat de València, 2004; G. Di Febo y C. Molinero (eds.), *Nou Estat, nova política, nou ordre social*, Barcelona, Fundació Pi i Sunyer-CEFID, 2005. Sobre la definición del franquismo como régimen autoritario: J. J. Linz, «Una teoría del régimen autoritario: el caso de España», en M. Fraga, J. Velarde y S. del Campo (comps.), *La España de los años 70*, vol. III, *El Estado y la política*, Madrid, Moneda y Crédito, 1974 (1.^a ed. 1972), págs. 1467-1531.

Política exterior. Para las vinculaciones entre el cuadro internacional y la política exterior franquista es fundamental el libro de M. Guderzo, *Madrid e l'arte della diplomazia*, Florencia, Il Maestrato, 1995. Para una

profundización de las relaciones Franco-Mussolini: J. Tusell y G. García Queipo de Llano, *Franco y Mussolini*, Barcelona, Península, 2006 (1.^a ed. 1985). La política de las grandes potencias respecto a España al final de la Segunda Guerra Mundial ha sido exhaustivamente analizada por F. Portero, *Franco aislado: la cuestión española (1945-1950)*, Madrid, Aguilar, 1989. Para los acuerdos con Estados Unidos véase el libro de A. Viñas (1981). Una buena reconstrucción que abarca toda la política exterior del régimen es la de M. Espadas Burgos, *Franquismo y política exterior*, Madrid, Rialp, 1987. Sobre las relaciones con el Vaticano véase A. Marquina Barrio, *La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945)*, Madrid, CSIC, 1983; sobre relaciones con América Latina véase L. Delgado Gómez-Escalonilla, *Diplomacia franquista y política cultural hacia Iberoamérica: 1939-1953*, Madrid, CSIC, 1988; Íd., *Imperio de papel*, Madrid, CSIC, 1992. M.^a E. Cavallaro ha estudiado el movimiento europeo en *Los orígenes de la integración de España en Europa*, Madrid, Sílex, 2009.

Política económica y cambio social. Sobre la política económica existe un buen estudio global: M. J. González González, *La economía política del franquismo (1940-1970): dirigismo, mercado y planificación*, Madrid, Tecnos, 1979; el excelente estudio de J. Clavera y otros (1978). Opiniones de destacados economistas que tuvieron un importante papel en la elaboración de las diferentes políticas pueden encontrarse en J. Ros Hombravella (comp.), *Trece economistas españoles ante la economía española*, Barcelona, Oikos-Tau, 1975. Sobre los orígenes de la política de industrialización masiva: E. San Román, *Ejército e industria: el nacimiento del INI*, Barcelona, Crítica, 1999. Una excelente historia del INI es la de P. Martín Aceña y F. Comín, *INI: 50 años de industrialización en España*, Madrid, Espasa-Calpe, 1991; V. Pérez Díaz recoge trabajos sobre empresarios, obreros, campesinos y la Iglesia durante el franquismo y la transición en *El retorno de la sociedad civil*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987; para las transformaciones agrarias: C. Barciela, «Introducción», en R. Garrabou y otros (1986). Sobre lo que su título

indica, J. Echeverría Zabalza, *La movilidad social en España (1940-1991)*, Madrid, Istmo, 1999.

Política cultural, intelectuales, vida cotidiana, género. Sobre intelectuales y culturas políticas véase E. Díaz (1992); J. Gracia, *Estado y cultura: el despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo (1940-1962)*, Barcelona, Anagrama, 2006; S. Juliá (2004). Un estudio de símbolos, valores y mitos en Z. Box, *España, año cero. La construcción simbólica del franquismo*, Madrid, Alianza, 2010. La relación entre cambios sociales y nueva cultura política en los años sesenta y setenta ha sido analizada por J. C. Mainer y S. Juliá, *El aprendizaje de la libertad, 1973-1986*, Madrid, Alianza, 2000. Sobre la vida cotidiana existen reconstrucciones detalladas en Abella (1985); modelos, costumbres, cultura a la luz de la discriminación de género, son analizados por Martín Gaité (1987); J. Roca i Girona, *De la pureza a la maternidad*, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997; aportaciones sobre el tema en G. Nielfa Cristóbal (ed.), *Mujeres y hombres en la España franquista*, Madrid, Universidad Complutense, 2003.

Propaganda, medios de comunicación, censura. Una eficaz reconstrucción centrada en los primeros años es la de M. A. Barranchina, *Propagande et culture dans l'Espagne franquiste (1936-1945)*, Grenoble, Université Sthendal, 1998. Sobre la prensa véase J. Torrón, *La prensa en España durante el régimen de Franco*, Madrid, CIS, 1981; A. Alted, P. Aubert (1995). Un excelente estudio sobre el NO-DO, en las distintas etapas del régimen, es el de R. Tranche y V. Sánchez-Biosca, *NO-DO: el tiempo y la memoria*, Madrid, Cátedra, 2000 (1.^a ed. 1993); sobre cine español durante la dictadura los ensayos de J. E. Monterde y C. Torreiro en R. Gubern y otros (1995); sobre cine y propaganda: Berthier (1998). Sobre censura: M. L. Abellán (1980); J. Sinova, *La censura de prensa durante el franquismo*, Madrid, Espasa-Calpe, 1989; Gubern y Font (1975); Gubern R., *La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975)*, Barcelona, Península, 1981.

Oposición, conflictos sociales, disidencias. Sobre la oposición hay un pionero estudio de J. Linz, «Opposition in and under an authoritarian regime: the case of Spain», en A. Dahl Robert (comp.), *Regimes and Oppositions*, New Haven, Yale University Press, 1973. Una buena fuente de información para todo el período de la dictadura son los dos volúmenes de F. Jáuregui y P. Vega, *Crónica del antifranquismo*, Barcelona, Planeta, 2007 (1.^a ed. 1983). Numerosos y estimulantes estudios sobre aspectos parciales de la oposición política interior y en el exilio se encuentran en J. Tusell, A. Altet y A. Mateos (coords.), *La oposición al régimen de Franco*, 3 vols., Madrid, UNED, 1990. De la primera década se ocupan V. Fernández Vargas, *La resistencia interior en la España de Franco*, Madrid, Istmo, 1981, y con relación a la guerrilla: H. Heine, *La oposición política al franquismo de 1939 a 1952*, Barcelona, Crítica, 1983. Para las luchas obreras: C. Molinero y P. Ysás, *Productores disciplinados y minorías subversivas*, Madrid, Siglo XXI, 1998; la organización de Comisiones Obreras en todo el territorio español se examina en D. Ruiz González (dir.), *Historia de Comisiones Obreras: 1958-1988*, Madrid, Siglo XXI, 1994 (1.^a ed. 1993). Sobre el nacimiento del movimiento feminista, A. Moreno, *Mujeres en lucha: el movimiento feminista de España*, Barcelona, Anagrama, 1977. Sobre la oposición en el País Vasco y Cataluña: J. M. Garmendia y A. Elordi, *La resistencia vasca*, San Sebastián, Haranburu, 1982; B. de Riquer y J. B. Culla, «El franquisme i la transició democràtica (1939-1988)», en P. Vilar (dir.) y J. Termes (coord.), *Història de Catalunya*, vol. 7, Barcelona, Edicions 62, 2004 (1.^a ed. 1987). Sobre formas de disidencias culturales y resistencia civil: A. Altet Vigil y E. Nicolás Marín, *Disidencias en el franquismo (1939-1975)*, Murcia, DM, 1999; I. de Cabo, *La resistencia cultural bajo el franquismo*, Barcelona, Áltera, 2000; J. Gracia y Gracia, *La resistencia silenciosa*, Barcelona, Anagrama, 2004; P. Ysás (2004). Para el PCE, E. Treglia, *Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero*, Madrid, Eneida, 2012. Entre las aportaciones sobre la oposición universitaria al franquismo: J. J. Carreras y M. A. Ruiz Canicer (eds.), *La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991;

J. Álvarez Cobelas, *Envenenados de cuerpo y alma*, Madrid, Siglo XXI, 2004; P. Lizcano, *La Generación del 56. La Universidad contra Franco*, Madrid, Leer, 2006 (1.^a ed. 1981); A. López Pina (ed.), *La Generación del 56*, Madrid, Marcial Pons, 2010.

Represión. Sobre la política represiva del régimen: P. Preston, *La política de la venganza*, Barcelona, Península, 2004 (1.^a ed. 1997). Como rigurosa síntesis de lo investigado sobre el terror y la represión: J. Prada Rodríguez, *La España masacrada. La represión franquista en la guerra y la posguerra*, Madrid, Alianza, 2010. Para el marco legal, una excelente síntesis es la de M. Carrillo, en VV. AA. (2001). Acerca del clima autárquico como ingrediente de la represión: M. Richards, *Un tiempo de silencio: la Guerra Civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945*, Barcelona, Crítica, 1999. Un estudio pionero que conserva su valor sobre presos y prisiones de la dictadura es el de A. Suárez y Colectivo 36, *Libro blanco sobre las cárceles franquistas: 1939-1976*, París, Ruedo Ibérico, 1976. La actuación del Tribunal de Orden Público ha sido objeto de un exhaustivo estudio por J. J. del Águila (2001); para la represión en las cárceles femeninas: G. Di Febo, *Resistencia y movimiento de mujeres en España, 1936-1976*, Barcelona, Icaria, 1979; S. Mangini, *Recuerdos de la resistencia: la voz de las mujeres de la guerra civil española*, Barcelona, Península, 1997; R. Vinyes, *Irredentas: las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco*, Temas de Hoy, Madrid, 2002; testimonios de detenidas políticas están recogidos en: F. Romeu Alfaro, *El silencio roto: mujeres contra el franquismo*, Barcelona, El Viejo Topo, 2002, y en los tres volúmenes de T. Cuevas, *Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas* (reeditados por J. J. Montes), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2004. Para los campos de concentración y las prisiones durante la Guerra Civil y el franquismo: C. Molinero, M. Sala y J. Sobrequés (eds.), *Una inmensa prisión*, Barcelona, Planeta-De Agostini, 2006 (1.^a ed., 2003), y J. Rodrigo, *Los campos de concentración franquistas entre la historia y la memoria*, Madrid, Siete Mares, 2003.

Referencias bibliográficas

- Abella, R., *La vida cotidiana en España bajo el régimen de Franco*, Barcelona, Planeta, 1985.
- Abellán Manuel L., *Censura y creación literaria en España*, Barcelona, Península, 1980.
- Álvarez Bolado, A., *El experimento del nacionalcatolicismo (1939-1975)*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976.
- Ballbé, M., *Orden público y militarismo en la España constitucional*, Madrid, Alianza, 1983.
- Barciela López, C., «Introducción», en R. Garrabou, C. Barciela López y J. I. Jiménez Blanco (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea*, vol. 3, Barcelona, Crítica, 1986.
- Berthier N., *Le franquisme et son image: cinema et propagande*, Presses Universitaires du Mirail, 1998.
- Cámara Villar, G., «La práctica educativa en el primer franquismo: cómo se forma un “caballero cristiano y español”», *Ciel*, vol. 5, n.º 1, Amsterdam, 1994, págs. 67-87.
- Carrillo, M., «El marc legal de la repressió de la dictadura franquista en el periode 1939-1959», en VV. AA., *Notícia de la negra nit: vides i veus a les presons franquistes (1939-1959)*, Barcelona, 2001.
- Clavera J. y otros, *Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (1939-1959)*, Madrid, Edicusa, 1978.
- Crexell, J., *La caputxinada*, Barcelona, Edicions 62, 1987.
- De la Granja, J. L., Beramendi J. y Anguera P., *La España de los nacionalismos y las autonomías*, Madrid, Síntesis, 2001.
- Del Águila, J. J., *EL TOP: la represión de la libertad (1963-1977)*, Barcelona, Planeta, 2001.

- Delgado Gómez-Escalonilla, L., «Franchismo, *hispanidad* e relazioni con l'America Latina», en *Giornale di storia contemporanea*, n.º 2 (1999), págs. 144-166.
- Díaz, E., *Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975)*, Madrid, Tecnos, 1992.
- Díaz Plaja, F., *La España franquista en sus documentos*, Barcelona, Plaza y Janés, 1976.
- Di Febo, G., *Ritos de guerra y de victoria en la España franquista*, Valencia, Universitat de Valencia, 2012 (1.ª ed. 2002).
- , «Riti e propaganda: il viaggio di Ciano in Spagna (luglio 1939)», en G. Di Febo y R. Moro (eds.), *Fascismo e franchismo: Relazioni, immagini, rappresentazioni*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005.
- Di Febo G., «Vaticano e franchismo: el Fuero del Trabajo (marzo 1938)», en *Mundo contemporaneo*, n.º 3 (2008), pp. 129-141.
- Ezcurra, J. A., «Crónica de un empeño dificultoso», en Alted A. y P. Aubert (eds.), *Triunfo en su época*, Madrid, Casa de Velázquez, Ediciones Pléyades, 1995.
- García Escudero, J. M., *Cine social*, Madrid, Taurus, 1958.
- García Escudero J. M., y otros *El cine español, desde Salamanca (1955-1995)*, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura, 1995.
- Garmendía Otaola, A., *Lecturas buenas y malas a la luz del dogma y de la moral*, Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús, 1961.
- Giménez Caballero, E., *Los secretos de la Falange*, Barcelona, Yunque, 1939.
- Goytisolo, J., «Escribir en España», en *Furgón de cola*, París, Ruedo Ibérico, 1967.
- Gubern, R. y Font D., *Un cine para el cadalso: 40 años de censura cinematográfica en España*, Barcelona, Euros, 1975.
- Hermet, G., *Los católicos en la España franquista*, vol. I, *Los actores del juego político*, vol. II, *Crónica de una dictadura*, Madrid, CIS/Siglo XXI, 1986 (1.ª ed. en francés 1981).
- Juliá, S., *Un siglo de España. Política y sociedad*, Madrid, Marcial Pons, 1999.
- , *Historias de las dos Españas*, Madrid, Taurus, 2004.

- Martí Morales, R., *Les targetes postals de la guerra civil 1936-1939: en campanya*, Barcelona, Miquel A. Salvatella, 2000.
- Martín Gaité, C., *Usos amorosos de la postguerra española*, Barcelona, Anagrama, 1987.
- Monterde, J. E., «Continuità e dissidenza (1951-1962)», en R. Gubern, J. E. Monterde, E. Riambau y C. Torreiro, *Storia del cinema spagnolo*, Venecia, Marsilio, 1995.
- Montero Moreno, A., *Historia de la persecución religiosa en España: 1936-1939*, Madrid, BAC, 2000 (1.^a ed. 1961).
- Pemartín, J., *Qué es «lo nuevo»... Consideraciones sobre el momento español presente* (1938), Madrid, Espasa-Calpe (1.^a ed. 1937).
- Piñol, J. M., *La transición democrática de la Iglesia católica española*, Madrid, Trotta, 1999.
- Puelles Benítez de, M., *Educación e ideología en la España contemporánea*, Barcelona, Labor, 1980.
- Raguer, H., *La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939)*, Barcelona, Península, 2008 (1.^a ed. 2001).
- Ridruejo, D., *Casi unas memorias*, Barcelona, Planeta, 1976.
- Ripalda J., *Nuevo Ripalda: enriquecido con varios apéndices*, Edit. Casa de Arte Católico José Vilamala, 1944 (17.^a ed.).
- Sáez Marín, J., *El Frente de Juventudes*, Madrid, Siglo XXI, 1988.
- Sardá, J., «El Banco de España: 1931-1962», en *El Banco de España: una historia económica*, Madrid, Banco de España, 1970.
- Satrústegui, J., y otros (eds.), *Cuando la transición se hizo posible: el «contubernio de Munich»*, Madrid, Tecnos, 1993.
- Serrano Suñer, R., *Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias*, Barcelona, Planeta, 1977.
- Sueiro D., *La verdadera historia del Valle de los Caídos*, Barcelona, Sedmay, 1976.
- Tusell J., *Franco y los católicos*, Madrid, Alianza, 1984.
- Viñas, A., *Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos*, Barcelona, Grijalbo, 1981.
- Ysás, P., *Disidencia y subversión*, Barcelona, Crítica, 2004.

Notas

[¹] Reproducido en *ABC* de Sevilla, 3-12-1937. <<